

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR**

**FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS**

**ESCUELA DE SOCIOLOGÍA**

**LAS MUJERES DE SECTORES POPULARES EN LA  
REORGANIZACIÓN DEL MOVIMIENTO DE MUJERES DEL  
ECUADOR:**

**ANÁLISIS DEL PERIODO 1990-2013 Y LA FORMACIÓN DE LA  
ASAMBLEA DE MUJERES POPULARES Y DIVERSAS DEL  
ECUADOR**

**DISERTACIÓN PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE  
SOCIÓLOGA CON MENCIÓN EN CIENCIAS POLÍTICAS**

**NANCY CARRIÓN SARZOSA**

**DIRECTORA: LISSET COBA**

**QUITO, SEPTIEMBRE DE 2013**

## ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	3
METODOLOGÍA .....	6
CAPÍTULO 1:	
Tensiones sobre el movimiento de mujeres del Ecuador y las organizaciones de sectores populares en los análisis académicos.....	8
1.1. Los años 80: los derechos de las mujeres como reivindicación democrática.....	8
1.2. Los años 90: la perspectiva global en la construcción de la ciudadanía para las mujeres.....	9
1.3. La diversidad en los márgenes: reinterpretaciones críticas de la historia del movimiento.....	12
1.4. Sobre las tensiones en torno al feminismo desarrollista y estatal.....	13
1.5. Sobre la agencia de las mujeres de sectores populares.....	16
1.6. Puntualizaciones para un nuevo análisis.....	25
CAPÍTULO 2:	
El movimiento de mujeres y el neoliberalismo.....	27
2.1. El neoliberalismo y la cultura política.....	28
2.2. Desigualdades económicas, contradicciones sociales.....	33
2.3. El neoliberalismo y la organización social.....	37
CAPÍTULO 3:	
Las organizaciones de mujeres de sectores populares como disensos.....	50
3.1. La categoría de pueblo.....	51
3.2. La irrupción de lo popular en el movimiento de mujeres.....	56
3.3. La desujeción de las mujeres de sectores populares.....	61
CAPÍTULO 4:	
La Asamblea de Mujeres Populares y Diversas del Ecuador.....	69
4.1. Las organizaciones de mujeres de sectores populares.....	70
4.2. La Asamblea de Mujeres Populares y Diversas del Ecuador.....	74
4.3. La identidad popular desde la memoria de las mujeres.....	78
4.4. El feminismo popular.....	84
4.5. La estructura de organización.....	86
CONCLUSIONES.....	94
ANEXO 1:	
MAPA DE LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES DE SECTORES POPULARES.....	101
Referencias bibliográficas .....	102

## INTRODUCCIÓN

El movimiento de mujeres del Ecuador conjuga en su interior diferencias y desigualdades tal vez como ningún otro movimiento social. En él se presentan diferencias en razón de la identificación de sus miembros con pueblos y nacionalidades distintas, la relación con otras organizaciones y movimientos sociales a nivel nacional e internacional, desiguales relaciones con el estado y lo público, distintas condiciones de clase y varias posiciones en una historia de colonización, entre otras. El presente trabajo analiza las complejas relaciones entre mujeres de sectores populares y de clases medias entre 1990 y la actualidad, puesto que a lo largo de la historia del movimiento de mujeres estas relaciones han sido la fuente de su mayor potencia y a la vez de tensiones y conflictos. Considero esto una necesidad académica y política, puesto que de la comprensión y gestión de estas desigualdades depende el dinamismo político del movimiento de mujeres, la posibilidad de que unas y otras construyan en su interior un lugar y una voz propia, y desarrollen procesos colectivos que procuren para sí mismos los objetivos de equidad y justicia que orientan sus estrategias hacia el exterior.

El objetivo es comprender cómo se producen continuidades y transformaciones en la historia del movimiento de mujeres a partir de la irrupción de organizaciones de mujeres de sectores populares y de qué manera sus procesos dan forma los modos de entender y hacer la política.

Parto de la idea de que las relaciones entre las distintas expresiones del movimiento de mujeres no están determinadas por la estructura; las diferencias y desigualdades a las que corresponden estas expresiones también son producidas por las actoras del movimiento. Como en otros movimientos sociales, las relaciones de poder entre sus integrantes son inevitables, pues son parte de sociedades atravesadas de profundas desigualdades, entre las que cuentan las vinculadas a la producción simbólica de sus identidades, la creación de sentidos de realidad y la producción del mundo social.

Inicio esta disertación indagando en la producción académica sobre el movimiento de mujeres, con la intención de ubicar el/los lugar(es) que se da a los procesos de mujeres de sectores populares. Para esto analizo también cuáles son y a qué responden los enfoques con los que se aborda la historia del movimiento de mujeres. Las tensiones que aparecen aquí, son planteadas como productos de una lucha interpretativa entre consideraciones que tienen como referencia las dinámicas desarrolladas por mujeres de clase media, urbanas –con una posición privilegiada en las relaciones de producción

simbólica-, y esfuerzos por descentrar esta mirada. Estos últimos visibilizan relaciones de poder y reconocen rupturas en el movimiento de mujeres, pero dejan abiertas sobre la complejidad que implica las interacciones entre procesos organizativos de mujeres de clase media y de sectores populares. La contradicción y la inestabilidad quedan planteadas como rasgos que deben ser abordados en tanto son elementos constitutivos de un sujeto colectivo de deseo.

En el segundo capítulo abordo cómo las desigualdades estructurales permearon los mecanismos de articulación de las diferencias en el movimiento de mujeres durante los años 90, la década que ha sido caracterizada por otras autoras como el periodo de afianzamiento del movimiento de mujeres. Cifras socioeconómicas ilustran el contexto de profundización de las desigualdades estructurales, a la vez que testimonios sobre el proceso que desarrolló el movimiento de mujeres, conjugados con análisis de los procesos sociopolíticos de la época, dan cuenta de un proceso de diferenciación política al interior del movimiento. El neoliberalismo es planteado aquí como un proyecto económico y político que atraviesa la política cultural del movimiento de mujeres y establece asimetrías de poder.

El capítulo tres sigue aquella intención de descentramiento de los análisis sobre la historia del movimiento de mujeres, pues hace visibles los procesos desde los que emergieron las organizaciones de mujeres de sectores populares y sus contextos referenciales. Lo popular es planteado en este capítulo como una articulación equivalencial que conlleva el problema de cómo se establece la representación y el lugar que tiene la diferencia. A partir de esto, se distingue cómo la identidad mujeres de sectores populares se forma como un proceso de desujeción respecto a un ordenamiento de tipo neoliberal en el movimiento de mujeres; una táctica a través de la cual lo popular es construido como un lugar de enunciación de la diferencia.

Finalmente, el proceso de la Asamblea Nacional de Mujeres de Sectores Populares (ANMPDE) es abordado en el Capítulo 4, con el objetivo de profundizar el análisis sobre la relación entre mujeres de clase media y sectores populares a través de una experiencia concreta de organización. Para esto, me enfoco en las tácticas desarrolladas en la AMPDE para mirar hasta qué punto estas permiten enfrentar las complejas inequidades entre las mujeres que la integran. Al analizarlas, tomo en cuenta los puntos de referencia desde donde sus integrantes construyen su memoria política, los deseos utópicos expresados en sus discursos y las prácticas que organizan el espacio

colectivo al asignar roles y lugares diferenciados, así como particulares modos de construir la representación de lo popular.

Mi participación como integrante de esta organización y la Casa Feminista de Rosa – organización que ha sido parte de la primera- y mi trabajo como acompañante de procesos de educación popular con varias organizaciones que son parte de la AMPDE o que han participado esporádicamente en ella, me han brindado una oportunidad privilegiada para observar las dinámicas colectivas y acercarme a las historias de vida y subjetividades de quienes integran este proceso. Por eso, el desarrollo de esta tesis ha significado una confrontación conmigo misma, con las apuestas colectivas de las que he sido parte. Su elaboración es un intento de comprensión desde y sobre el conflicto constitutivo del deseo utópico que nos ha movido a provocar estos encuentros políticos, a pesar de nuestras diferencias, o más bien por ellas, para transformarlas. Como esfuerzo de autoconciencia sobre una historia compartida, este trabajo ha sido desarrollado como un ejercicio de diálogo crítico con otras, compañeras, en el que analizar el delicado tejido de nuestras potencias y límites ha sido parte de aquel mismo compromiso, asumido desde el deseo, con el que construimos nuestros procesos de organización.

## METODOLOGÍA

En atención a esta complejidad política de las relaciones que configuran el movimiento de mujeres del Ecuador, esta disertación fue desarrollada a partir de una combinación de metodologías. Inició con la organización de varias preguntas que quedaban abiertas en las críticas que, a través de una observación participativa durante los últimos cuatro años, pude identificar entre organizaciones de mujeres de sectores populares respecto al movimiento de mujeres del Ecuador. En estas se observaba una división de la historia del movimiento en dos procesos: uno desarrollado principalmente durante los años 90 por activistas y académicas de clase media, y otro, más visible hacia fines de los 90, desarrollado por mujeres de sectores populares.

Para comprender mejor las tensiones desde las que se planteaba esta distinción, empecé por indagar en la producción académica sobre el movimiento de mujeres. Así puede identificar enfoques que prestaban distintos grados de atención a los procesos desarrollados por mujeres de sectores populares. En algunos casos, la agencia de estas mujeres era omitida de la historia del movimiento. Algunos de estos análisis subordinaban los procesos de mujeres de sectores populares a las pautas que mujeres de clase media imprimieron en el movimiento. Otros trabajos sí analizaban los procesos de organización de mujeres de sectores populares pero poco profundizaban en su rol dentro del movimiento de mujeres, las relaciones que establecían con otras y las implicaciones políticas e históricas para el movimiento.

Estos aspectos parecían fundamentales para reinterpretar la historia del movimiento de mujeres y para indagar en ellos realicé 12 entrevistas a profundidad a mujeres de clase media y de sectores populares que integraron el movimiento de mujeres durante los años 90. Paralelamente, con el objetivo de encontrar puntos de referencia para el análisis de la historia del movimiento de mujeres que no estuvieran necesariamente centrados en los procesos que desarrollaron mujeres de clase media – predominantes en los análisis académicos-, desarrollé talleres 14 talleres de memoria e historia oral con organizaciones de mujeres de sectores populares que integran la AMPDE o que se vincularon esporádicamente a ella. Dos de estos talleres fueron nacionales y contaron con la participación de representantes de varias organizaciones a nivel nacional. Los otros se distribuyeron en procesos de distinta duración con organizaciones localizadas territorialmente o agrupadas de acuerdo sus objetivos

políticos (ej. organizaciones de trabajadoras remuneradas del hogar). Algunos de estos se desarrollaron en el marco de procesos de educación popular y formación política.

La memoria, en tanto proceso constructivo que organiza el pasado, fue una metodología clave para acercarme a la organización de la experiencia de las mujeres y su subjetividad, elementos claves para comprender de qué modo concebían su propia historia de organización en relación con el movimiento de mujeres. Como bien plantea McAdam, la memoria es un mecanismo cognitivo que opera mediante la interacción entre las percepciones individuales y colectivas para permitir el reconocimiento, la reinterpretación y clasificación de la historia.

Con el objetivo de alcanzar un análisis más introspectivo con integrantes de la ANMPDE, fueron analizadas cuatro historias de vida realizadas por Dana Hill para su tesis doctoral, y a partir de estas y los resultados de los talleres se desarrollaron entrevistas a profundidad, individuales y colectivas, a 11 de sus integrantes. La observación participativa que pude realizar como integrante de esta organización también me permitió desarrollar varios diálogos con otras integrantes sobre los hallazgos y análisis a lo largo del trabajo de campo y escritura de esta disertación.

La autoconciencia feminista en tanto metodología crítica de reflexión-acción fue clave en este proceso, en tanto me facilitó indagar en la dimensión personal y colectiva de los procesos de organización que han formado parte de la ANMPDE como objetos-experiencias de conocimiento. Esto me permitió pasar del deseo de pensar únicamente en la experiencia política que las mujeres de sectores populares habían tenido como parte del movimiento de mujeres, a incluir la experiencia política que mujeres que como yo, de una clase media militante, hemos tenido en el encuentro con mujeres de sectores populares dentro de un mismo movimiento-comunidad de mujeres. Por esto, los espacios de convivencia tanto como los discursos públicos que hemos compartido se ponen como objeto de conocimiento para reflexionar de qué modo nosotras, mujeres diversas y desiguales que militamos desde el feminismo de izquierda, construimos lo popular y nos relacionamos con ello.

## **CAPÍTULO 1**

### **Tensiones sobre el movimiento de mujeres del Ecuador y las organizaciones de sectores populares en los análisis académicos**

Las investigaciones sobre el movimiento de mujeres del Ecuador muestran una tensión entre dos interpretaciones, que no necesariamente están separadas de los trabajos que revisaremos en esta sección. La primera hace referencia a un proceso centralizado principalmente en Quito y representado por mujeres de clase media. La segunda representa un esfuerzo por evidenciar los procesos de organización desarrollados por mujeres de sectores populares y por mujeres diversas en distintos lugares del país, y plantea la existencia de un movimiento social plural y descentralizado.

Investigaciones producidas en los años 80 y 90 (Prieto 1986; Verdesoto 1986; Vega 1991) ubican el nacimiento del movimiento de mujeres en torno a una tematización de la problemática de las mujeres y la formación de un pensamiento feminista. Posteriores análisis adhieren a este planteamiento y enfocan los años 90 como un periodo de afianzamiento del movimiento social de mujeres, en torno a estrategias globales para la ampliación de la ciudadanía de las mujeres (Vega 1991; Troya 2007; Balladares 2003). A partir del 2000, como respuesta a la presencia crítica de mujeres de sectores populares en la esfera pública, se produce un desplazamiento de este enfoque, centrado en los procesos de mujeres de clase media, a un enfoque que reinterpreta esta historia del movimiento de mujeres para recupera el lugar de lo popular en él.

#### **1.1. Los años 80: los derechos de las mujeres como reivindicación democrática**

En los años 80, Prieto (1986) y Verdesoto (1986) ubicaron la existencia todavía latente de un movimiento de mujeres a partir del posicionamiento público de tal problemática: “Con un grado todavía débil de tematización social y marcada por el carácter de ‘no visibilidad’ de su actor emergió una demanda femenina, también asociada con la redemocratización” (Ibíd.: 33). La producción de esta temática se orientaba mayoritariamente a analizar las condiciones socioeconómicas de las mujeres, como respuesta a intereses de agencias de desarrollo, y la participación política formal de las mujeres (Vega 1991: 8, 10). Las autoras de esta temática fueron mujeres de clase media vinculadas a ONGs y a la academia, como lo señala Herrera (2001).



Estos análisis destacan la formación de un movimiento social en torno a una agencia que amplió los derechos de ciudadanía de las mujeres en un contexto de redemocratización del sistema político (Vid.: Verdesoto 1986; Prieto 1986; Vega 1991; Troya 2007; Balladares 2003). Mujeres por la Democracia es una de las organizaciones más destacadas durante este periodo en varias investigaciones. Su cuestionamiento al autoritarismo del gobierno de León Febres Cordero y la violencia que fundamentaba la cultura política de la época, sumadas a su lucha por la participación política formal de las mujeres, dan cuenta de una concepción dinámica de la política en la que la transformación político-cultural sería condición para la inclusión de las mujeres y a la vez su consecuencia.

Sus integrantes eran reconocidas como mujeres de clase media, urbanas, de tendencias políticas entre la izquierda y centro izquierda, que tendían vínculos con otros movimientos sociales, como el sindical y el indígena, a nivel nacional y con el movimiento feminista a nivel internacional. Para algunas de ellas, los años 80 fue un periodo de acumulación de conocimientos a través del intercambio de experiencias político-organizativas que les permitió una comprensión global de los problemas de las mujeres, con lo que enriquecieron la capacidad de incidencia a nivel local y nacional (Vega 2000: 240-241). Algunas mujeres entrevistadas dicen que en esta década se produjeron sus primeros contactos con la teoría feminista, a través de su participación o la de compañeras suyas en encuentros con feministas europeas, espacios generados a través de organizaciones partidistas de izquierda. Autoras como Vega (Ibíd.) y Alvarez (2001) señalan que varios espacios de encuentro y redes internacionales de intercambio entre mujeres fueron desarrollados con recursos de la cooperación internacional y Naciones Unidas. Por esto, el escenario internacional es visto como un contexto de oportunidades que permitió afianzar una postura feminista en el movimiento de mujeres que nacía.

## **1.2. Los años 90: la perspectiva global en la construcción de la ciudadanía para las mujeres**

La dinámica de encuentros, intercambios y redes a nivel internacional entre mujeres organizadas se fortaleció en la década de los noventa y fue vista como el ejercicio de una “ciudadanía global” (Vargas 1998, citado en Vega 2000). Siguiendo Troya (2007) y Balladares (2003) afirman que durante la década de los noventa el movimiento se articuló alrededor de los debates preparatorios para la IV Conferencia Mundial de la

Mujer, en 1995, Beijing. Por esto destacan al Foro Nacional Permanente de la Mujer Ecuatoriana como uno de los procesos organizativos principales en este periodo. La organización agrupaba principalmente a mujeres que trabajaban en asuntos de género desde ONGs y vinculó al movimiento con el Foro Latinoamericano de ONGs que se había constituido en 1993 para preparar esta Conferencia. De este proceso y como iniciativa de Mujeres por la Democracia, surgió la Coordinadora Política de Mujeres Ecuatorianas (CPM) que fortalece la apuesta por la participación directa en el estado, al proponerse abrir mayores espacios de decisión y establecer cuotas de participación en los partidos políticos.

Este contexto influye en la adopción de la interlocución con el estado como una estrategia para ampliar la ciudadanía de las mujeres, pensada como inclusión de las mujeres en la comunidad política (Troya 2007). La participación en la construcción de leyes y normas que respondan a su realidad específica como mujeres fue considerada como una búsqueda por mecanismos que garantizaran un ejercicio mayor de la ciudadanía (Ibíd.; Vega 2000;). Varias investigaciones destacan la construcción de una importante institucionalidad de género en el estado como garantía de esta estrategia. El Consejo Nacional de las Mujeres (CONAMU) aparece como uno de los logros más importantes, en tanto canaliza a través de políticas las demandas del movimiento de mujeres hacia el estado.

Todas las autoras mencionadas destacan esta estrategia como fundamental en la ampliación de los derechos formales de las mujeres. Sin embargo, Herrera observa la existencia de dudas respecto al rol que este sector del movimiento de mujeres estaba asumiendo en un estado que atravesaba una crisis institucional. Los espacios de poder que como mujeres apuntaban a conquistar eran limitados, sobre todo para provocar transformaciones que incluyeran a mujeres de sectores populares. La perspectiva estratégica que apuntaba al estado, se desarrollaba en tensión con concepciones que venían de su formación política de izquierda y que veían al estado como un instrumento reproductor de relaciones de poder (Herrera 2007 s/p). Vega (2000) ratifica esta tensión al afirmar que uno de los límites de esta búsqueda estaba en su direccionamiento a políticas sociales que no implicaban transformaciones estructurales, respecto a la producción y redistribución de la riqueza.

La preeminencia de mujeres mestizas, urbanas, de clase media, profesionales, es sugerida por Vega como uno de los motivos de esta limitación política. A partir de esta observación, la autora plantea una problemática mayor, una dinámica implícitamente

excluyente en el movimiento de mujeres: “¿Cuántas de las propuestas y estrategias planteadas no han dejado fuera las preocupaciones de otras mujeres, de las pobres, de las negras de las indias, de las jóvenes, de las mujeres rurales?” (Vega 2000: 246-247). Pero la necesidad que como feministas de izquierda vivieron de consolidar espacios organizativos propios aparece como una explicación:

[...] en el caso ecuatoriano no hemos dado los pasos necesarios de diálogo, apertura, reconocimiento a “las otras”, pues hemos dirigido nuestras energías a consolidar nuestros propios espacios organizativos o a lo mucho a relacionarnos, con poco éxito, entre quienes compartimos la mayor parte de los rasgos identitarios hasta ahora en el movimiento (Vega 2000: 247)

Herrera va más allá, al señalar que no solo habría una omisión política, sino que la estrategia política de este sector del movimiento habría desarrollado modos instrumentalistas de procesar las demandas de género (Vega 2000: 62). Este problema será abordado más profundamente en el siguiente capítulo.

Por ahora resalto que algunos de los análisis sobre el movimiento de mujeres que han sido revisados en esta sección (Prieto 1986; Verdesoto 1986; Balladares 2003; Troya 2007) y que sitúan al movimiento de mujeres como un proceso conducido o representado por mujeres de clase media, más que dar cuenta de la realidad del movimiento, dan cuenta de una mirada autoreferencial que devela límites subjetivos. Sus dificultades para reconocer a “las otras” se manifiestan en el plano político-organizativo tanto como en sus narraciones de la historia del movimiento de mujeres del Ecuador. Herrera propone uno de los motivos de esta ausencia:

Los análisis feministas han sido críticos frente al quehacer de estas organizaciones, considerando que el *leiv motiv* de las mujeres [de sectores populares] fue el trabajo para los otros –el barrio, la comunidad, el esposo, los hijos- y eso difícilmente se podía traducir entonces en procesos de autonomía para las mujeres (Herrera 2007 s/p)

Aunque de ellas, algunas reconocen la existencia de organizaciones de mujeres de sectores populares alrededor de la militancia o el trabajo que mujeres de clase media tuvieron en ONGs y el estado, no profundizan en el vínculo que las de sectores populares tuvieron con el movimiento de mujeres ni analizan su agencia en las transformaciones sociales y políticas del país.

### **1.3. La diversidad en los márgenes: reinterpretaciones críticas de la historia del movimiento**

A partir del 2000, el contexto político del movimiento de mujeres se complejiza, con una presencia mayor de mujeres de sectores populares, cuya presencia pública mostraba que sus procesos se habían desarrollado al mismo tiempo que el movimiento de mujeres, pero sin ser reconocidas como parte de él. Desde una retrospectiva crítica sobre la trayectoria que en los años noventa siguieron las mujeres de clase media, estas son identificadas como un sector, entre otros, del movimiento. Herrera (2001a) y Rodas (2003) lo identifican con una ideología liberal que se hizo manifiesta a través de una política de *lobby* con los partidos y el estado (Herrera 2001a; Rodas 2003); un carácter a partir del cual explican su distancia respecto a las organizaciones de mujeres de sectores populares.

Un trabajo importante para esta investigación es el de Herrera (2007 s/p), quien al mostrar al movimiento de mujeres como un proceso social amplio y descentralizado, producto de las distintas formas de empoderarse y politizar las desigualdades de género que desarrollaron mujeres en distintos lugares del país. Esta autora analizó los orígenes del movimiento de mujeres a partir del rescate de procesos de movilización y vínculos militantes entre mujeres de clase media y de sectores populares producidos antes de aquel momento de tematización de la problemática de las mujeres en los años 80. Una ola de movilizaciones en varias provincias durante la década de los 70, había producido, según esta autora un proceso descentralizado de politización de la subordinación femenina. Ubicó tres espacios en torno a los cuales se formó este movimiento social en la izquierda: el movimiento estudiantil, el movimiento obrero y, vinculado a estos dos, el movimiento poblacional. Como una contraparte liberal y conservadora, esta autora destacó además la agencia de otro sector de mujeres que tuvo una clara apuesta por ampliar la participación política formal de las mujeres en el estado y enfrentar las desigualdades de género desde el ámbito jurídico.

Las organizaciones de mujeres de sectores populares en este trabajo de Herrera son analizadas como procesos generados alrededor del trabajo que realizaron mujeres de izquierda, de clase media, desde los años 70 hasta inicios del 2000 o en procesos organizados en torno a la supervivencia. A través de testimonios de mujeres de clase media sobre el trabajo que realizaron con mujeres de sectores populares, la autora resalta que en estas “surgió un tipo de subjetividad feminista más relacionado con el empoderamiento personal y cierto grado de autonomía [...] se trabajó hacia una

politización de lo privado, de la reproducción social y de las estrategias de supervivencia y de la vida cotidiana” (Herrera 2007 s/p). La autora resalta que este trabajo entre las mujeres de clase media y de sectores populares—especialmente el desarrollado por el FAM en Cuenca- permitió al feminismo un interesante debate sobre la relación clase y género y las diferencias de clase entre mujeres.

#### **1.4. Sobre las tensiones en torno al feminismo desarrollista y estatal**

La declaración de la Década de las Naciones Unidas para las Mujeres (1975-1985) comprometió a los estados en el objetivo de conseguir la igualdad plena y la eliminación de la discriminación de género, la integración y participación plena de las mujeres en el desarrollo y la contribución de las mujeres a la paz mundial. Como respuesta a este contexto, en la cooperación internacional se institucionalizaba el enfoque Mujeres en el Desarrollo (MED), mientras el estado ecuatoriano definía una Política Nacional para la Integración de la Mujer en el proceso de Desarrollo. Desde la perspectiva que aquí se construye, las mujeres de sectores populares fueron vistas como un grupo meta. En este contexto, la generación de política pública y de proyectos de desarrollo fueron espacios importantes de acción para las mujeres de clase media que accedían al estado ONGs y organismos de cooperación internacional.

Estos espacios, siendo lugares laborales, eran asumidos como posibilidad de desarrollar las estrategias políticas por las que antes —aproximadamente hasta mediados de los 80- apostaban desde la militancia. Desde la cooperación internacional y el estado empezaron a desarrollar experticias técnico-políticas en relación a la problemáticas relacionadas con las mujeres, al tiempo que tendían puentes con movimientos feministas a nivel internacional. Mientras tanto, los modos de integrar a mujeres de sectores populares, afirma Lind (1992: 215), constituyeron “prácticas ideológicas bienestaristas” que ya habían sido señaladas por algunas feministas como formas de reforzar los roles tradicionales de aquéllas y generar su dependencia hacia el estado y otros sujetos en la vida privada.

Varias autoras muestran que durante la década de los 80, a través de ONGs, agencias de cooperación y el estado, mujeres de sectores medios —autoras en la construcción de la problemática femenina que mencionábamos antes- canalizaron financiamientos provenientes del enfoque MED para sostener los vínculos con mujeres de sectores populares que antes se habían desarrollado desde la militancia. Algunas

ONGs y organizaciones de investigación, que orientaron su trabajo desde un enfoque de género, se desarrollaron principalmente en los años 90, a partir de su salida del estado.

La figura de ONG y fundación les permitió trabajar con mayor autonomía y establecer relaciones más estables, en redes sociales que agrupaban a mujeres de distintos sectores sociales. Esto les permitió también mayor visibilidad y cohesión como movimiento social (Ver Lind 1992). A mediados la década de los 80, había más de cien ONGs registradas en el Ecuador. Al finalizar la década de los 90, el 70% de ONGs trabajaba en asuntos de género (Lind 2005: 5).

Pero, al desarrollarse estas experiencias, nuevas relaciones se configuraron a través de la prestación de servicios y asistencia social. El proceso de neoliberalización económica que se abrió a partir de los ajustes estructurales también implicó consecuencias políticas en la relación entre estos dos segmentos de mujeres (ver capítulo 2). Algunas autoras muestran indicios de la conflictividad que aparecía al interior del movimiento de mujeres. Por ejemplo, Lind señala que esta apuesta por actuar fuera del estado, pero a la vez en referencia a él, generó importantes debates sobre la autonomía del movimiento respecto al estado y los partidos políticos. Tales debates, aunque generaban diferencias y tensiones importantes –señala la autora– también permitieron la formación coaliciones entre mujeres diversas, de clases medias y empobrecidas, de sindicatos, de organizaciones indígenas y de partidos políticos. Así, estos debates son vistos por esta autora como “uno de los pocos espacios colectivos en los cuales las mujeres pobres y de clase media pueden establecer un diálogo” (Lind 1992: 218).

Pero Balladares señala el aparecimiento de una nueva tensión en el movimiento de mujeres, al indicar que en los años 80:

[...] la intervención externa en las organizaciones de mujeres populares, a través de ciertas ONG's se convirtió en un tipo de padrinazgo manipulador, similar al de los partidos políticos, cayó en prácticas clientelares con su grupo objetivo, o se constituyó en un *modus vivendi*, obstaculizando más que facilitando las posibilidades de fortalecimiento de las organizaciones (Balladares 2003: 34).

Rodas (2007: 24) observa que la adopción del enfoque técnico-político que requería el trabajo en el estado y las mismas ONGs significaba una “profesionalización de la causa feminista”, un proceso de burocratización e instrumentalización de los conocimientos sobre la problemática de género, que se produjo en detrimento de la politización de lo privado. Vega plantea incluso el desarrollo de un proceso de cooptación de intelectuales

y activistas que debilitó al movimiento: “[este] ha ido desapareciendo [...] en razón inversamente proporcional al crecimiento de las instancias estatales” (Vega 2000: 251).

Herrera observa además que esta dinámica complejizaba las desigualdades ya existentes entre mujeres, pues implicó la formación de “sistemas interpretativos institucionalizados” (Fraser 1987 citado en Herrera 2001a) que convertían al género en un producto de las interpretaciones que l@s “expert@s” hacían, a partir de sus propios intereses, sobre las demandas de las mujeres. Las desigualdades estructurales entre una clase social y otra parecían evidenciarse en el movimiento de mujeres como diferenciados accesos al conocimiento y, por lo tanto, relaciones de poder que empezaban a ser problemáticas.

Varios análisis (Lind 1994; Lind 2005; Moser 1997) ven a los años 90 como una década de permanentes movilizaciones con una alta participación femenina, como respuesta a la crisis económica acentuada por los ajustes estructurales. El proceso constituyente de 1997 condensó demandas sociales de esta y anteriores décadas, construidas en medio de los procesos de movilización y organización social (Herrera 2007 s/p). El movimiento de mujeres logró la inclusión de la mayor parte de sus propuestas políticas (Lind 2001; Arboleda 1997), evidenciando un significativo grado de organización social y capacidad de incidencia al hacer de esta Constitución “una de las más avanzadas de América Latina en lo que se refiere a derechos de las mujeres” (Herrera 2007 s/p).

Este logro también fue visto como resultado de la experticia técnico-política que mujeres de clase media habían acumulado a lo largo de más de una década de institucionalización del género en el estado. El énfasis en la incidencia en el estado hizo que fuera visto como un “movimiento ciudadano” (Vega 2000), cuyo objetivo, el reconocimiento pleno como miembro de la comunidad política, tenía como escenario una economía en crisis y una débil institucionalidad estatal, lo que suponía enormes dificultades para un ejercicio real de la ciudadanía por parte de una enorme mayoría de mujeres empobrecidas. Por ello, Vega (Ibíd.) expresaba preocupaciones por la ausencia de reflexión en torno a la economía desde una mirada de género y sugería que al interior del movimiento de mujeres los problemas estructurales se convertían en problemas políticos, derivados de las dificultades para enfrentar las desigualdades entre mujeres y procesar las diferencias políticas que de ello surgían (Vid. Ibíd.: 245-246).

## **1.5. Sobre la agencia de las mujeres de sectores populares**

Algunas investigaciones sobre el movimiento de mujeres señalan que en sus inicios la relación entre mujeres de sectores populares y de clase media fue fundamental, incluso fundacional. Las alianzas entre ellas se produjeron a partir de la vinculación que ambos sectores tuvieron con el movimiento obrero durante los años 70 y 80. El poco respaldo y los límites que las mujeres encontraron en los espacios mixtos, las llevó a formar organizaciones autónomas de mujeres, que se caracterizaron por integrar a mujeres de distinta clase social en una apuesta militante de transformación social (Goetschel 2007; Herrera, 2007 s/p). Entre estas destacan la Unión de Mujeres Trabajadoras (UMT) y el Frente Unido de Mujeres (FUM) del Partido Comunista, organizaciones que demandaron derechos laborales y sociales. A finales de los 80 se forma también el Movimiento de Mujeres de Sectores Populares (MSP), con mujeres organizadas de algunos barrios de Quito, especialmente del sur (Rodas, 2007: 49).

La autonomía organizativa de estas alianzas interclasistas fue un proceso que les permitió un pensamiento político y demandas propias, compartidas, frente al estado y la sociedad. Entre las estrategias que permitieron que estos procesos se desarrollen está el desarrollo de una voz propia, compartida entre las distintas mujeres, fue de especial importancia en este proceso de autonomía. Para esto, programas radiales, foto y radionovelas, y otras propuestas de educación popular, se desarrollaron como herramientas de trabajo político para el desarrollo de un pensamiento feminista entre mujeres de clase media y mujeres campesinas, de barrios y de organizaciones de diversa índole.

Se trataba de crear alternativas a la palabra escrita para construir ese contrapúblico de denuncia de la subordinación de las mujeres a partir de experiencias cotidianas. Este tipo de expresiones fueron producidas en el marco de un tipo de activismo que seguía muy apegado a militancias de izquierda (Herrera, 2007 s/p)

Además publicaron algunas revistas o suplementos en periódicos de alta circulación que contribuyeron a la formación de un pensamiento feminista. Entre éstos tenemos: La Mujer (una publicada por el CIAM en Guayaquil y otra por el Frente Amplio de Mujeres en Cuenca), Eva de la Manzana, La Maga y Nueva Mujer. Temas, como el derecho al aborto seguro, el placer femenino o la violencia de género, fueron nuevos y controversiales. Hacer del ámbito privado un locus político contribuyó a la conformación de una identidad genérica que fortaleció o –podría decirse- formó al



movimiento de mujeres de esta época (Herrera, 2001b; CEPAM, 1989: 8).

En estos procesos, la construcción de espacios de encuentro fue de especial importancia. Entre estos destacan algunos centros feministas como La Manzana de Eva, La Pájara Pinta y Manuela León. Otras, especialmente a partir de los 90 y a través de fondos de cooperación internacional, sostuvieron estas relaciones a través de la figura de fundaciones y ONGs, pues les facilitaría continuar el trabajo que como militantes habían desarrollado en los 80. Entre éstas están el Centro Integral de Apoyo a la Mujer (CIAM) en Quito, el Centro de Acción de la Mujer (CAM) en Guayaquil y el Centro de Apoyo y Promoción de la Mujer (CEPAM) en ambas ciudades.

Pero, aspectos relacionados con el rol y el vínculo de mujeres de sectores populares como parte del movimiento son más abordados por investigaciones que se centran específicamente en el análisis de las organizaciones de mujeres de sectores populares. Estas generalmente parten de análisis contextuales y ven a los procesos organizativos de las mujeres de sectores populares como respuesta a las crisis económicas (Ver Lind, 1994; Lind, 2005; Moser, 1997; Vega, 2000).

Un análisis que considero apropiado para los propósitos de esta tesis es el de Lind, puesto que se plantea como objetivo analizar la agencia de las mujeres de sectores populares. Para esto sitúa sus procesos de organización en un contexto histórico amplio en el que convergen la construcción del estado y la nación ecuatoriana, la institucionalización de un campo internacional de desarrollo, la globalización económica y cultural y las luchas por los derechos de ciudadanía. A través de varias relaciones con este amplio contexto toma sentido el carácter político de los procesos de organización de las mujeres de sectores populares –especialmente urbanos. De tal manera, esta autora contrapone su análisis a algunos otros que veían a las mujeres de sectores populares de la región organizadas en torno a necesidades prácticas –opuestas a los intereses estratégicos- e incapaces de transformar las inequidades de género.

Las políticas de modernización en los años 60 y 70 habían extendido los roles tradicionales –domésticos- de las mujeres sectores populares hacia el ámbito comunitario o barrial y ampliado su carga global de trabajo. De este modo habían sido marcadas como “madres de una nación subdesarrollada” (Lind, 2005: 2). Esta fue la base sobre la que en los años 80 desarrollaron numerosos procesos de organización y movilización para enfrentar la reciente aplicación de políticas neoliberales. Mientras el estado disminuía la inversión social, ellas asumían la gestión de servicios e infraestructura básica para sus barrios, el desarrollo de iniciativas productivas, la

provisión de cuidado y alimentación para los niños. A la vez estos procesos fueron experiencias desde donde las mujeres interactuaron con poderes locales y nacionales (Lind, 2005; Vega, 2000). Alrededor de estos procesos, Herrera (2007 s/p) plantea que las mujeres de sectores populares urbanos construyeron una identidad como “madres sociales”. De acuerdo a Lind, el trabajo gratuito o mal pagado de las mujeres de sectores populares, organizado colectivamente como estrategias de supervivencia, subsidiaba gran parte de la crisis económica.

Esta autora señala que durante los años 80, las experiencias de organización de las mujeres de sectores populares en Ecuador y otros países de Latinoamérica fueron analizadas bajo categorías marxistas como “estrategias de supervivencia”. De acuerdo a este punto de vista, las mujeres extendían su trabajo reproductivo al ámbito comunitario, por lo que su trabajo era destacado como un factor crucial en la reproducción de las comunidades. Frente a este punto de vista, la autora plantea que estas experiencias de organización constituyeron una respuesta crítica a las relaciones de poder en la vida cotidiana, las instituciones políticas y las instituciones de desarrollo; una “lucha por lograr la autonomía ideológica” (Lind, 1994: 205-207). Por esto, las destaca como experiencias que permitieron también la politización de las diferencias de género y la formación de una identidad colectiva.

Sin embargo, en el mismo texto, Lind (1994) dice que los procesos de organización de las mujeres de sectores populares de esta época fueron resultado del “desplazamiento hacia la autonomía” que hicieron feministas de clase media respecto al estado e instituciones políticas masculinas (Ver pp. 216-217). También señala que “mujeres pobres y de clase obrera ayudaron a organizar a otras mujeres de comunidades vecinas” (p. 213). El contexto internacional formado por organizaciones feministas – especialmente en Perú y otros países de América Latina-, fondos e instituciones de la cooperación internacional, también es destacado como un contexto de oportunidades para las organizaciones de mujeres de sectores populares.

El reconocimiento que esta autora hace de la crisis de las instituciones políticas tradicionales –partidos y sindicatos- y en general de las organizaciones populares mixtas, permite ver a los procesos de organización de las mujeres de sectores populares como respuestas políticas. Por un lado, como la autora reconoce, “superaban los sesgos masculino-occidentales reproducidos en los marcos de referencia de las políticas de desarrollo puestas en marcha por las agencias estatales, las organizaciones gubernamentales y otras instituciones para el desarrollo” (Lind, 1994: 224). Por otro

lado, queda implícito que sus procesos de organización impugnaban las formas y culturas políticas de las organizaciones sociales.

Las “estructuras políticas de la ciudad y la comunidad” son resaltadas por Lind como los espacios a los que estas organizaciones dirigieron sus demandas. Del estado señala su falta de apoyo a los procesos de organización y la inhabilidad para generar políticas adecuadas hacia las mujeres de sectores populares, pues se enfocaban en soluciones económicas paliativas.

Solo desde fines de los 80 y durante toda la década de los noventa, el estado es visto por otras autoras como un contexto de oportunidades para los procesos de organización de las mujeres de sectores populares. Según Herrera, paralelamente a la construcción de una institucionalidad de género en el estado y las estrategias para ampliar los derechos formales, las mujeres de sectores populares, especialmente en la costa, estaban organizadas alrededor de veedurías ciudadanas (Herrera, 2007 s/p). Vega plantea que estas mujeres también desarrollaron prácticas ciudadana a través de la interlocución con los gobiernos locales, desde donde trascendieron a un escenario político nacional para mantener políticas sociales de subsidio. Las mujeres de sectores populares ampliaron sus bases organizativas para “garantizar la estabilidad de una política pública que reconoce el derecho a la subsistencia, [lo cual] les permitió ser consideradas interlocutoras de importancia por las instancias políticas del Estado a las que ellas interpelaban” (Vega, 2000: 237).

Los gobiernos locales alternativos que se desarrollaron desde 1996 también fueron vistos como escenarios que provocaron la organización y formas colectivas de participación política en mujeres de sectores populares. En algunas de estas experiencias, la participación de las mujeres se enmarcó en las estrategias de organizaciones indígenas y campesinas para participar dentro del estado. Las Asambleas Cantonales, Consejos Sectoriales y más tarde, ya en la década del 2000, algunos procesos de descentralización de *facto* fueron escenarios en los que ellas desarrollaron estrategias de inclusión que superaron las motivaciones iniciales, pues enfrentaron ciertas desigualdades de género, clase y etnia (Carrión, 2008 s/p; Arboleda, Carrión, Herrera y Santillana, 2010 s/p). Vega observa que, sin embargo, el poder y los gobiernos locales, así como la descentralización han sido debates de los que el movimiento de mujeres ha estado ausente (Vega, 2000: 253), una muestra de la desconexión entre ambos sectores de mujeres.

La trayectoria de ampliación de los espacios públicos de participación para las mujeres de sectores populares también es analizada a través de los liderazgos de mujeres indígenas. Prieto mostraba que estos inician en espacios comunitarios y amplían su radio de actuación hacia organizaciones a nivel nacional y el estado.

Se trata de una suerte de carrera del liderato. Empieza de joven a nivel comunitario o intercomunitario, sin mayor acceso a los espacios de negociación hacia el mundo blanco-mestizo. La experiencia acumulada puede derivar luego en algún tipo de protagonismo mayor (Prieto, 1998: 28).

Podría decirse que estas oportunidades que ofrece el contexto contrastan con los problemas que vimos sobre el feminismo desarrollista y estatal en la misma época, puesto que las prácticas bienestaristas que lo caracterizaron reforzaban roles tradicionales de las mujeres de sectores populares y dificultaban su autonomía. Herrera ve este problema como una contradicción inherente de este feminismo, una política que

[...] se desenvuelve en un terreno múltiple, montado sobre diversos tipos de tensiones, produciendo dinámicas que parecen consolidar procesos de construcción ciudadana más inclusivas, pero que a la vuelta de la esquina parecen estar más bien actuando como un discurso civilizatorio [...] (Herrera, 2007 s/p)

Contradicciones y tensiones han sido señaladas como síntomas de una debilidad que vivió el movimiento debido a dificultades para procesar su diversidad interna, pero también como posibilidades para nuevas expresiones del movimiento (Herrera, 2007 s/p; Rodas, 2007). Así, por ejemplo, Herrera indica que la Coordinadora de Mujeres Negras del Ecuador (CONAMUNE) se formó a partir la (auto)crítica al interior de la CPM sobre cierta confusión de roles entre organizaciones del movimiento (probablemente la misma CPM) y el CONAMU. Por esto, a fines de la década de los 90 la CPM asume la necesidad contribuir al fortalecimiento del movimiento de mujeres desde sus bases y

[...] apoya la conformación de la organización de mujeres negras [Coordinadora Nacional de Mujeres Negras del Ecuador - CONAMUNE], y de frentes sectoriales que puedan más adelante establecer relaciones de colaboración y coordinación con la CPM (Herrera, 2007 s/p).

Rodas (2007: 50) también escribe que la CONAMUNE nació en 1997 con el objetivo de afirmar la identidad y autonomía de las mujeres negras respecto al movimiento negro y el movimiento de mujeres.

Las organizaciones de mujeres indígenas son analizadas por Herrera dentro de los “movimientos desde la periferia” (Herrera, 2007 s/p), que también se desarrollaron

como respuesta crítica a la “institucionalización” del movimiento de mujeres en los años 90. Otras expresiones organizativas aparecieron, según la autora, alrededor de un remarcado énfasis en la problematización de lo que denomina “márgenes”: el cuerpo, los derechos sexuales, el trabajo sexual, el lesbianismo. Entre estas, Herrera destaca a Feministas por la Autonomía, una organización que sin embargo, mantuvo una relación cercana con el estado, a través del CONAMU.

El trabajo de Prieto (1997; Prieto, et. al. 2005) también está movido por las tensiones que el movimiento de mujeres vivía en esta época, especialmente a las que se evidenciaban entre las mujeres indígenas y otros sectores del movimiento. Con el objetivo de indagar en la desconexión entre estos dos sectores –e incluso en las fracturas entre mujeres mestizas, urbanas, de clase media y mujeres indígenas y campesinas empobrecidas-, la autora inicia en 1997 una investigación sobre el liderazgo de las mujeres indígenas en la Sierra y Amazonía. A partir de un recorrido por varios estudios de caso que desde distintos enfoques explican relaciones de igualdad y subordinación de las mujeres indígenas en sus contextos, Prieto encuentra una explicación a sus inquietudes en el liderazgo poco autónomo de las mujeres indígenas. Al recoger el análisis que Harvey (1989) hace para el Perú, quien observa en las mujeres indígenas un “discurso paralelo”, no oficial, que puede funcionar como mecanismo de presión, pero que las excluye de las decisiones políticas, Prieto dice que el liderazgo de las mujeres indígenas del Ecuador está delimitado por las organizaciones étnicas y campesinas. “Tal vez en ello se encuentra una de las grandes rupturas con el movimiento de mujeres de origen urbano [...]. Su falta de competencia bilingüe [...] es solo una razón aparente (Prieto 1998: 26)

En un trabajo realizado siete años después, esta y otras autoras se plantean el mismo objetivo. Esta vez señalan dificultades en el movimiento de mujeres del país –reconocido como el formado por mujeres mestizas, de clase media y urbanas- para vincularse a las mujeres indígenas (Prieto et. al. 2005: 156). A la vez dentro de las organizaciones indígenas ven obstáculos para esta relación, puesto que ha sido señalada como una tentativa colonialista e imperialista (Prieto et. al. 2005). Las autoras también enfatizan en las estrategias propias de las mujeres indígenas en su lucha contra las desigualdades étnicas y de género. La creación de Secretarías de la Mujer dentro de las organizaciones indígenas y del Consejo Nacional de las Mujeres Indígenas (CONMIE) sería una de estas. A la vez analizan el acercamiento al estado, que las mujeres

indígenas organizadas hicieron a través del CONAMU, para elaborar en el año 2004 un Plan de Igualdad de Oportunidades para las mujeres indígenas.

Para Prieto (et. al. 2005) las estrategias organizativas de las mujeres indígenas constituyen un intento por articular las discriminaciones de étnico-raciales y de género en el ámbito privado y público, como problemáticas personales y estructurales. Una de las autoras de este artículo, Andrea Pequeño (2007), señala en otro trabajo que algunos elementos de este discurso podrían dar cuenta de un naciente feminismo indígena. Según ella, las mujeres indígenas habrían desarrollado un “esencialismo estratégico” al identificarse como guardianas de su cultura para afirmar su identidad étnica, reivindicar los roles que les han sido asignados y realzar su lugar como mujeres. A través de luchas interpretativas ellas habrían extendido la importancia de su rol en la reproducción de la cultura hacia el ámbito de la política para defender su mayor participación en la toma de decisiones (Prieto 1997; Prieto, et. al 2005; Herrera 2007 s/p; Pequeño 2007). Sin embargo, las autoras observan una distancia entre las mujeres indígenas organizadas y las organizaciones de mujeres mestizas, urbanas. La razón que encuentran es de nuevo la prominencia de lo colectivo-comunitario y una comprensión de la inequidad más compleja de lo que plantean otros sectores del movimiento de mujeres.

Prieto (et. al. 2005) y Herrera (2007 s/p) reconocen un papel activo de las mujeres indígenas al extender los sentidos de equidad y justicia que demandan sus pueblos y nacionalidades hacia su condición como mujeres para elaborar demandas específicamente de género. Pero las demandas de género estarían insertas en arenas de conflicto, serían “producto de las contradicciones que se presentan en la relación entre la identidad étnica y de género” (Herrera 2007 s/p). Por lo tanto, los espacios organizativos mixtos serían para las mujeres indígenas experiencias de conflicto y posibilidad.

Lind (2005) propone que los procesos de organización desarrollados por mujeres de sectores populares que ella estudia en Quito durante los años 80 también constituyeron una perspectiva crítica de las prácticas del feminismo desarrollista y estatal. Además afirma que, en la confrontación de relaciones de poder a distintos niveles, las mujeres de sectores populares politizaron sus problemas y necesidades, y afirmaron una identidad colectiva (Lind 2005). Los otros análisis que hemos

mencionado permitirían decir lo mismo para las mujeres indígenas. Carmen Tene<sup>1</sup>, da una muestra de esta criticidad:

El movimiento de mujeres no indígenas no ha tenido una estrategia de trabajo con nosotras. Ha replicado la forma desigual, en la cual la sociedad mestiza se ha relacionado con nosotros los indígenas. Hasta ahora se piensa que las indígenas no podemos aportar ni plantear nuestras propias propuestas y, en ese sentido, se trata de hablar a nombre nuestro. Ya que ellas tienen facilidad de conseguir financiamiento para actividades considerando dentro de ello a las mujeres indígenas. No vemos una relación de iguales en las cuales unas aporten a otras para lograr un fortalecimiento mutuo y plantear propuestas en conjunto como mujeres del Ecuador (Tene 2000: 219).

En referencia a este momento de transformaciones, Rodas (2007: 86) dice que “grandes expresiones” del movimiento de mujeres perdieron referencia en el primer lustro del 2000. En las entrevistas que esta autora realizó en el 2007 aparecían críticas que señalaban cierto anquilosamiento del movimiento: poca capacidad de movilización, viejas lideresas acomodadas en nuevos espacios de poder y ausencia de nuevas voces, falta de respuesta a nuevas preocupaciones de las mujeres, falta de representatividad de las estructuras nacionales, entre otras.

Mientras organizaciones como la CPM y el Foro de la Mujer identificadas con este “movimiento general de mujeres” en un proceso de repliegue, la autora reconoce el fortalecimiento de las mujeres indígenas, quienes a través de la CONMIE incluso habían formado redes internacionales. A la vez reconoce una presencia pública mayor de las mujeres afroecuatorianas, especialmente en espacios culturales.

Varias otras organizaciones nuevas son enumeradas por Rodas<sup>2</sup> para afirmar que el movimiento de mujeres estaría en un nuevo momento. Silvia Vega lo define como un momento de reconocimiento interno de la diversidad (cita en Rodas 2007: 89), mientras otras entrevistadas por Rodas lo ven como un momento de repliegue, de reflujo e

---

<sup>1</sup> Al momento de esta publicación, Carmen Tene era Directora de la Escuela de formación de Mujeres Líderes de la CONAIE.

<sup>2</sup> El MMO, la Red de Mujeres de Loja, la Coordinadora Juvenil por la Equidad de Género, la Confederación de Mujeres por el Cambio (CONFEMEC), la Coordinadora de Mujeres Fronterizas (CODEMUF), el Movimiento de Mujeres de Sucumbíos, la Asamblea de Mujeres de Quito, la Organización de Mujeres Lesbianas (OML), Mujeres Luchando por la Vida, el Movimiento de Mujeres de Sectores Populares Luna Creciente, Mujeres de Avanzada, Colectivo Feminista, Mujeres de Frente, la Asociación de Mujeres “Nela Martínez”, Humanas, La Pepa, Anudando, Mujeres, Ideas y Acción (MIA) y los Comités de Usuarias de la Ley de Maternidad Gratuita.

incluso fracaso del intento de hacer del movimiento “una fuerza social de grandes proporciones” (Rodas 2007: 91). Según Rodas, las múltiples organizaciones podrían llegar a confluencias puntuales, pero no a una articulación ni referente nacional único. La nueva identidad del movimiento de mujeres sería fluctuante y con agendas localizadas. El desafío que esta autora y sus entrevistadas veían era el de alcanzar transformaciones que impacten la vida cotidiana de mujeres diversas. ¿Cómo? La sugerencia de esta autora parece ser un retorno a los espacios entre mujeres como comunidades intersubjetivas que permitan ampliar la autoconciencia.

Los procesos de vinculación organizativa más recientes que se han producido entre mujeres de sectores populares y clase media, han sido poco analizados. Manzo (2011) en su tesis sobre el Movimiento de Mujeres de El Oro (MMO) analiza brevemente la articulación de este con otras organizaciones a nivel nacional en la Asamblea de Mujeres Populares y Diversas del Ecuador, durante el año 2010.<sup>3</sup> La autora observa que aunque estas alianzas se establecieron al afirmar la diversidad como identidad común, las agendas políticas de las organizaciones no recogían suficientemente temas que conciernan a la amplia pluralidad cultural, étnica, sexual y a la desigualdad de clase de sus integrantes.

Respecto al MMO plantea que la introducción de figuras “técnicas”, diferenciadas de las militantes por recibir salarios de proyectos financiados por ONGs, desencadenó inconformidades que señalaban relaciones de jerarquía, verticalidad y debilitamiento de la democracia interna. Estas tensiones políticas y la inestabilidad de recursos para mantener el trabajo asalariado de las técnicas lo debilitaron como movimiento social a nivel local. Pero también reconoce que en el mismo proceso el MMO pudo articularse con otras organizaciones feministas del país e instituciones del estado, aumentando su capacidad de incidencia a nivel local. Las tensiones implícitas en la diversidad del MMO y en las relaciones de este con otras organizaciones del movimiento de mujeres, habrían formado identidades colectivas no fijas, que se tejen y destejen discursivamente de acuerdo a las experiencias y de manera estratégica según los intereses (Manzo 2011: 92).

---

<sup>3</sup> La autora realiza su tesis en este año, pero la AMPDE se formó en el 2009, como veremos en el último capítulo.



## **1.6. Puntualizaciones para un nuevo análisis**

El periodo abarco en esta tesis, 1990-2013, se caracteriza por un continuo crecimiento y significativa diversificación del movimiento de mujeres. En él confluyen dos procesos que, aunque son simultáneos, se evidencian con énfasis distintos en dos momentos. El primero, a lo largo de la década de los 90, corresponde al afianzamiento de un movimiento de mujeres de clase media, quienes a partir de una apuesta por el estado como medio para generar transformaciones a favor de la equidad de género, desarrollan un feminismo que ha sido caracterizado como liberal. Este se caracteriza por un enfoque de la política centrado en la consecución de derechos individuales y la participación formal, también individual, de las mujeres en el estado. El segundo se evidencia aproximadamente a partir del año 2000, con la irrupción de un movimiento de mujeres de sectores populares que desafía este enfoque al cuestionar el carácter excluyente de las estrategias – hacia el exterior del movimiento- y tácticas –hacia el interior de él, como principios organizadores del movimiento en tanto espacio social- que lideraron mujeres de clase media.

Es importante mencionar que al diferenciar estos dos procesos no hago una distinción entre movimientos de mujeres y movimientos feministas porque considero que el carácter feminista que encuentro en ambos se produce como un devenir<sup>4</sup>, en el desarrollo de acciones que, de diferentes formas, apuntan a transformaciones a favor de las mujeres, la equidad y la justicia de género.

Aunque por motivos analíticos distingo estos procesos en relación con el tiempo – la década de 1990 de preeminencia de procesos desarrollados por mujeres de clase media y la del 2000 de irrupción de organizaciones de mujeres de sectores populares-, se trata de momentos superpuestos. Organizaciones de mujeres de sectores populares, como lo han mostrado investigaciones ya abordadas (Herrera 2007 s/p; Lind 1994; Lind 2005), se formaron incluso antes del periodo en el que enmarco esta tesis, durante los años 70 y 80. A la vez, mujeres de clase media organizadas no han dejado de ocupar un importante lugar en el movimiento de mujeres, pues continúan desarrollando necesarias estrategias al interior del estado y procesos de diálogo con mujeres de sectores populares. Las interacciones entre uno y otro sector son permanentes y considero que de estas depende la potencia política del movimiento, de ahí que el interés de este trabajo

---

<sup>4</sup> Esta consideración fue planteada por Marisela Scampa, en el Seminario Feminismo Populares, desarrollado por la Fundación Rosa Luxemburg, en Quito, el xxx de 2013.

se oriente a profundizar el análisis sobre esta relación clases medias-sectores populares al interior del movimiento de mujeres.

Las superposiciones en el tiempo entre estos dos procesos y las permanentes interacciones entre sus actoras, supone una frontera permeable entre las perspectivas políticas que uno y otro sector han desarrollado. Por lo tanto, implica la necesidad de analizar los procesos de articulación y hegemonía tomando en cuenta las contradicciones de sus subjetividades políticas que, entendidas como experiencias de sí, extienden estas contradicciones a las relaciones que establecen. Consecuentemente, las tensiones que constituyen el movimiento de mujeres, no serán entendidas como resultado de intereses contrapuestos, derivados únicamente de distintas condiciones de clase, sino como conflictos que aluden a una dimensión subjetiva colectiva de las organizaciones; una dimensión contradictoria, inestable, inacabada.

Este enfoque responde a la concepción del sujeto político de los movimientos sociales que propone Flórez (2010) como “sujeto de deseo”, a partir de su análisis de los feminismos de frontera. Lo adopto porque permite comprender la heterogeneidad como una característica constitutiva de la identidad para abordar al sujeto desde su ambivalencia y comprender tanto su necesidad de inscribirse en el mundo que le ha sido dado tanto como su urgencia por transformarlo o por salir de él. Desde este enfoque, las subjetividades políticas son un punto de referencia imprescindible para comprender las contradicciones sociales más allá de un rígido plano estructural, para abarcar el funcionamiento simultáneo de distintos sistemas de opresión que atraviesan las alianzas y relaciones de solidaridad entre mujeres organizadas.

## **CAPÍTULO 2**

### **El movimiento de mujeres y el neoliberalismo**

En este capítulo ubicaremos históricamente la coyuntura del periodo 1990 - 2010, en el que organizaciones de mujeres de sectores populares (OMSP) se multiplicaron, a la vez que algunas fisuras políticas aparecieron en el movimiento de mujeres. Enmarcaremos este proceso en el desarrollo del neoliberalismo como un proyecto económico y político. A partir de esto, en los próximos capítulos podremos analizar la formación de la identidad de las OMSP reunidas en la Asamblea de Mujeres populares y Diversas del Ecuador (AMPDE) y su relación con este contexto.

Entre 1990 y aproximadamente el 2006<sup>5</sup>, el movimiento de mujeres fue parte de un creciente proceso de movilización social que enfrentaba una problemática compleja, de la que destacamos tres aspectos. El primero, la incidencia de crisis económicas permanentes que golpeaban de modo diferenciado a las clases medias y a los sectores populares en el trabajo y la organización y cuidado de la vida. Otro tiene que ver con el contraste entre el deterioro de la institucionalidad del estado, presentado como un proyecto de modernización, que se desarrollaba paralelamente a la consolidación de la institucionalidad de género en el estado. Finalmente, la configuración de nuevas esferas públicas y modos alternativos de participación se producían en medio de un deterioro de los derechos político-económicos y las condiciones materiales para el ejercicio de la ciudadanía. Tal contexto implicaba una creciente diferenciación social entre mujeres de sectores populares y de clases medias. Los modos de enfrentarlo decantaron culturas políticas distintas en el movimiento de mujeres del Ecuador.

Lo que resaltamos en este periodo es que el neoliberalismo se muestra no solo como un proyecto al que la movilización social en general y del movimiento de mujeres en particular resiste, sino que de cierto modo da forma a los procesos de organización, puesto que atraviesa las subjetividades de los sectores en movimiento –una izquierda tradicionalmente formada por alianzas entre clases medias y sectores populares.

---

<sup>5</sup> A partir de este años se produce una transición hacia un modelo que ha sido denominado como postneoliberal o neodesarrollista. Se caracteriza por medidas que intentan mejorar las condiciones de vida de sectores empobrecidos, desarrolladas sobre la base de políticas extractivistas. En el último capítulo se abordará este momento.

## **2.1. El neoliberalismo y la cultura política**

En 1985 el teórico de la dependencia, Ruy Mauro Marini, planteaba la coexistencia crítica de dos proyectos políticos en torno a la democracia en América Latina: un proyecto burgués que acrecentaba el poder legislativo y el carácter neoliberal del estado; y un proyecto popular, de izquierda, que apostaba por el fortalecimiento de la autonomía del poder popular y su capacidad de presión y control del estado. Ambos planteaban la reducción del estado. El primero, a través de reformas liberales se proponía privatizarlo, usarlo como instrumento de reproducción de la desigualdad social. El segundo, a través de la autogestión y participación directa, se proponía subordinar al estado. Así, decía Marini, “Debilitarlo hoy, restarle fuerza económica y política, no puede, pues, sino interesar en el más alto grado al movimiento popular, siempre y cuando ello implique la transferencia de competencias, no a la burguesía sino al pueblo” (Marini 2008: 15). La problemática crítica que observaba Marini en América Latina consistía en la ruptura con el primer modelo y esfuerzos inconclusos para gestar uno nuevo. Esta tensión marcó la historia política del Ecuador en el periodo que estudiamos. La arremetida del neoliberalismo fue motivo de movilizaciones permanentes y el contexto de dos procesos constituyentes que se produjeron como respuesta a las crisis políticas.

¿Qué crisis? Empecemos por la que inicia en los años ochenta. La recuperación de la democracia se planteaba a la par de una modernización de la economía, con el objetivo de dejar atrás el estado oligárquico y el carácter patrimonialista de la política (Guerrero y Ospina 2003; Vera 2013). Una aparente paradoja gubernamental se mostraba en la intención de consolidar un estado democrático moderno a través de un “esquema recesivo que apuntaba a reducir los índices de consumo e inversión, pero garantizando los procesos de acumulación del capital” (Acosta 2001: 162); la modernización del estado implicaba el desarrollo de procesos de descuidadización (Guerrero y Ospina 2003; Vera 2013). El estado se reducía y el cuidado y reproducción de la vida, especialmente de la población más empobrecida, pasaban a ser responsabilidad de las mujeres, que debían organizar estrategias de supervivencia, mientras discursos sobre su vulnerabilidad social las convertían en objeto de políticas focalizadas, reduccionistas y asistencialistas (Herrera 2001).

En los años noventa las crisis fueron múltiples, provocadas por el aceleramiento del neoliberalismo a través de privatizaciones y mayor flexibilización laboral. En torno

a esta flexibilización se había generado una opinión pública que legitimaba la subocupación femenina y la incorporación de las mujeres a trabajos precarios (León 1993). Los ajustes estructurales provocaron altas tasas de inflación, lo que sumado a la crisis bancaria llevó a la dolarización de la economía en el 2000. Varias movilizaciones sociales a mediados de esta década lograron detener una buena parte de estas medidas (Acosta 2001: 164)

En la segunda mitad de esta década, con la intención de vencer las resistencias que trabajadores públicos y sectores de izquierda organizados oponían a las políticas neoliberales, las reformas neoliberales cambiaron su estrategia, “la solución no estaría en el desmantelamiento del aparato estatal, sino en su reconstrucción” (CLAD 1998) Una tercera vía entre el *laissez-faire* neoliberal y el anterior modelo de estado se abrió paso a través de una segunda generación de reformas que apuntaban a la creación de una cultura política fundamentada en la máxima eficiencia y competitividad<sup>6</sup>. A diferencia de reformas anteriores, éstas se planteaban ejecutarse justamente a través de la participación ciudadana y la gobernabilidad democrática.

La intervención del movimiento de mujeres en el estado exigía desarrollar capacidades técnicas que hicieran más efectiva su intervención para responder a las expectativas que habían definido como movimiento social de mujeres<sup>7</sup> y a la vez a las condiciones que la reforma del estado imponía. Esto implicó la necesidad de contar con una estructura organizativa nacional capaz de coordinar, representar y potenciar las luchas que se habían planteado, articularon definitivamente a la CPM, en el año 1996<sup>8</sup>.

---

<sup>6</sup> Ver el documento “Una Nueva gestión Pública para América Latina”, del CLAD (1998). En éste se plantea la fórmula que ya venía desarrollándose en el Ecuador y que proponía mantener las funciones sociales del estado con la participación de la empresa privada y el tercer sector, estrategia que permitiría la participación de los países en vías de desarrollo en la globalización económica mundial.

<sup>7</sup> A pesar de las afecciones económicas que las mujeres de sectores populares enfrentaron, las prioridades del movimiento no estuvieron marcadas por demandas redistributivas, sino que se enfocaron principalmente en la participación política formal de las mujeres y la lucha contra la violencia de género.

<sup>8</sup> A mediados del 95 varias organizaciones de mujeres se agrupan en el Encuentro Nacional de Mujeres “Mujeres hacia el ejercicio del poder” y a partir de éste se conformó la Coordinadora Política Provisional para que elaborara la Agenda Política de Mujeres y la pusiera en debate con mujeres de las distintas provincias del país. Al año siguiente, por la necesidad de contar con una estructura organizativa nacional capaz de coordinar, representar y potenciar el desarrollo de esta Agenda, se designa representantes de la Coordinadora para los dos siguientes años.

La Coordinadora Política de Mujeres del Ecuador nació de una iniciativa de Mujeres por la Democracia, que en una discusión interna se cuestionó que las mujeres estábamos siempre del otro lado demandando derechos, lo que se estaba poniendo difícil si no estábamos dentro del estado [...] por qué no ocupar espacios de representación para garantizar desde adentro la posibilidad de políticas de género, sin dejar de fortalecer la sociedad civil afuera. (M. C entrevista 2009)

La CPM llegó a cohesionar a mujeres de diversos procesos y tendencias políticas a nivel nacional en una misma estructura organizativa centralizada. Conformaron diecisiete comisiones técnicas bipartitas para ampliar la incidencia en el estado desde la sociedad civil. Éstas estaban constituidas por mujeres profesionales con especialidades técnicas para actuar, junto a funcionarias del CONAMU, en instancias de gobierno relacionadas con salud, vivienda, planificación, etc.

La combinación de capacidades técnicas y políticas, permitió al movimiento una actuación eficiente en la traducción de sus demandas a reformas legales. Desde mediados de los ochenta hasta 1994, el movimiento de mujeres había planteado reformas a las leyes de elecciones y de salud, la creación de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, y la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia, así como transformaciones a los códigos penal, civil y de trabajo.

La CPM y otras que compartían esta apuesta por el estado se pensaban como una instancia de representación política del movimiento de mujeres. Pero paradójicamente, se priorizó una perspectiva técnica-política para incidir en las políticas públicas por sobre el trabajo que procurara mayor cercanía con las mujeres que podían constituir las bases de un movimiento social.

El proceso constituyente de 1998 fue otra muestra importante de esta eficiente capacidad técnico-política y constituyó una oportunidad para acercar coyunturalmente las relaciones entre las mujeres de clase media y las de sectores populares. A través de diálogos con organizaciones sociales, mesas de trabajo, cabildeo y movilizaciones, introdujeron sus demandas reunidas en una agenda unitaria (ver Arboleda 1997). El movimiento de mujeres fue tal vez el movimiento social que más inclusiones de sus propuestas logró en esta nueva Constitución.

Por las acciones y estrategias que el movimiento de mujeres desarrolló en este proceso, Silvia Vega (2000) lo denominó “movimiento ciudadano”. Para este, el ámbito jurídico fue considerado como un medio para producir las transformaciones culturales a

favor de una equidad y justicia de género capaz de sintetizar los procesos políticos abiertos por anteriores luchas (Herrera 2007 s/p)<sup>9</sup>.

Si bien esta tendencia alcanzó significativos logros a favor de las mujeres, también implicó importantes dificultades para el movimiento de mujeres en su dimensión más amplia y heterogénea, constituida por procesos organizativos de mujeres diversas y desiguales –indígenas, negras, lesbianas, jóvenes, mujeres empobrecidas del campo y las periferias urbanas. En la centralidad otorgada al diálogo con el estado y frente a la ausencia de una instancia de coordinación entre las organizaciones de mujeres, el CONAMU jugó un rol de cohesión que implicó su confusión con el mismo movimiento (Vega 2000). La CPM, que tal vez fue la organización social con más cercana al CONAMU en esta estrategia, fue una de las más visibles en la esfera pública hegemónica.

Adicionalmente, el país estaba atravesando la privatización de muchas de las funciones sociales del estado. En tanto estas áreas se concebían tareas femeninas – inclusive en la política-, varias ONGs de mujeres se organizaron para prestar servicios como contraparte de programas sociales. ONGs que hasta entonces concebían al estado como un instrumento de reproducción del orden patriarcal, estaban trasladando significativamente la orientación de su trabajo desde temas relacionados con la sexualidad y la identidad femenina, a la política pública. El 70% de ONGs registradas durante la década de 1990- generaron experticias que profesionalizaron el trabajo desde el enfoque de género (Herrera 2001a; Lind 2005). Esto significó un proceso de oenegeización del movimiento de mujeres (Lind 2005: 4-5) en el que las mujeres de clase media pasaron a ser prestatarias de servicios para las de sectores populares – especialmente en temas relacionados con la violencia de género.

Se difuminaron las incertidumbres que atravesaban el movimiento a principios de los años noventa respecto a cómo construir la unidad en medio de su compleja pluralidad, diferencias y tensiones. Después de varios años de liderar la apuesta por el estado, las mujeres de clase media aparecían como expertas en conocimientos técnico-políticos y poseedoras de una visión política que se veía como carencia en las mujeres

---

<sup>9</sup> Los discursos posicionados entre los años 20 y 60 por las organizaciones de mujeres, muchas veces a través de revistas producidas por ellas, ya interpelaban a la sociedad y el estado sobre la necesidad de ampliar la ciudadanía de las mujeres mostrando la equivalencia de sus cualidades con las de los ciudadanos hombres. Como ya se indicó, las demandas de reconocimiento giraron también en torno al trabajo productivo.

de sectores populares. Es más, los procesos de organización, “lentos”, de las mujeres de sectores populares llegaron a ser vistos como un impedimento para la estrategia por el estado. De este modo, la distancia ya formada por las desigualdades estructurales y diferencias culturales entre mujeres se hizo mayor.

Cuando las jóvenes y las negras empezaron a cuestionar dentro del movimiento la necesidad de tener su propia organización, nosotras dijimos “si nosotras no tratamos que dentro del mismo movimiento hay exclusiones por ser negra, por ser india, por ser lesbiana, por ser pobre, estamos mal... Pero algunas de las que iniciaron con el proceso de la Coordinadora, decían que ese no es nuestro tema, que se hagan cargo las mujeres populares o la organización a la que le interese, pero nosotras no [...], se decía que ese era un proceso más lento, y como que el movimiento estaba avanzando, y hasta que se capaciten a las mujeres populares sobre el tema del feminismo, sobre el tema del género, era un proceso como lentísimo, era como retroceder para algunas de ellas (N.B., CPM, entrevista 2009).

En este contexto, la democracia neoliberal se configuraba sobre mecanismos modernos de concatenación de las desigualdades económicas y las desigualdades políticas que afectarían de modo particular a las mujeres de sectores populares. Intentaremos explicar cómo ocurre este proceso y el papel que en esto jugó el movimiento de mujeres.

Vera (2013) describe al periodo que analizamos como un proceso de desplazamiento de una racionalidad de gobierno de carácter social hacia una neoliberal. El neoliberalismo que se inauguraba en los años 80 partía de una crítica al exceso de estado y adoptaba una tecnología de gobierno frugal al incorporar los mecanismos de mercado al conjunto de la sociedad y no solo al manejo de la economía (Ibíd.: 33). Individuos, organizaciones, empresas, comunidades, eran interpeladas para que asuman el aseguramiento de la vida –la protección social- con criterios de eficiencia y a través de mecanismos de mercado.

Lo social se debilitaba considerablemente, pero entendido no solo como mecanismos de protección para los trabajadores y clase media, sino como un conjunto de tecnologías de gobierno. La ciudadanía individual para esta autora, aunque restringida a una minoría, hasta fines de los años 70 fue socializada por el estado a través de mecanismos de protección social y previsión del riesgo, condiciones que se presentaban como garantías de igualdad y elementos constitutivos de la ciudadanía (Vera 2013: 30). La noción de riesgo funcionó como tecnología de gobierno que esculpió las subjetividades de los sujetos, especialmente en la clase media, y reemplazó el deseo de un estado social de derecho.



Al debilitarse la racionalidad de gobierno de carácter social, se desplaza al individuo-ciudadano la responsabilidad de asegurar por sí mismo su vida y bienestar a través de mecanismos de mercado (Ibíd). Por lo tanto, se puede concluir que también se desplazan al mercado algunas de las posibilidades del ejercicio de la ciudadanía.

Una observación similar hace Troya al reconocer la nueva condición de la ciudadanía en un contexto neoliberal:

[...] estos cambios implicarían una redefinición de la ciudadanía. Esta sería ahora el ejercicio activo de responsabilidades y la exigencia de derechos en un escenario regulado por el mercado, en el cual el Estado se limitaría únicamente a garantizar la libertad de los individuos para que puedan competir en igualdad de condiciones (Troya 2007: 9).

Sin embargo, la agudización de contradicciones sociales como consecuencia del proceso de neoliberalización y la misma formación de una cultura política neoliberal serían límites importantes para la ampliación de la ciudadanía como posibilidad para las mujeres de sectores populares. Para comprender esto, analizaremos primero las contradicciones sociales que el neoliberalismo hizo más evidentes en los años noventa.

## **2.2. Desigualdades económicas, contradicciones sociales**

La composición del trabajo es uno de los síntomas de tales contradicciones. Entre 1994 y el 2000, el desempleo pasó de 6,8% a 14,4%. Las huellas de los ajustes estructurales sobre las mujeres al empezar el nuevo milenio eran notablmente mayores: 69,1% de mujeres aparecían como “población económicamente inactiva” y 41,1% de la PEA femenina se ubicaba en la economía denominada “informal” (INEEC, Censo de población y Vivienda 2001). En estos porcentajes estaban representadas mujeres campesinas y urbanas empobrecidas, cuyos trabajos no eran reconocidos como tales.

Entre trabajadores no calificados y migrantes de la ciudad al campo predominaba el empleo informal, lo que expresaba el recrudecimiento de la exclusión social (Benería y Floro 2006: 143-144) La participación de las mujeres en este tipo de trabajo era mayor, en países en vías de desarrollo las cifras mostraban que el empleo informal representaba el 60% del empleo femenino; trabajos precarios, como el industrial a domicilio, estaban sobrerrepresentados por las mujeres, con un 80% (OIT, en Ibíd.).

Para 1999 la participación del sector más empobrecido en los ingresos nacionales había disminuido a la mitad de lo que representaba en 1995 y las clases medias habían reducido esta participación en un promedio de 1,53 puntos porcentuales. La clase alta,

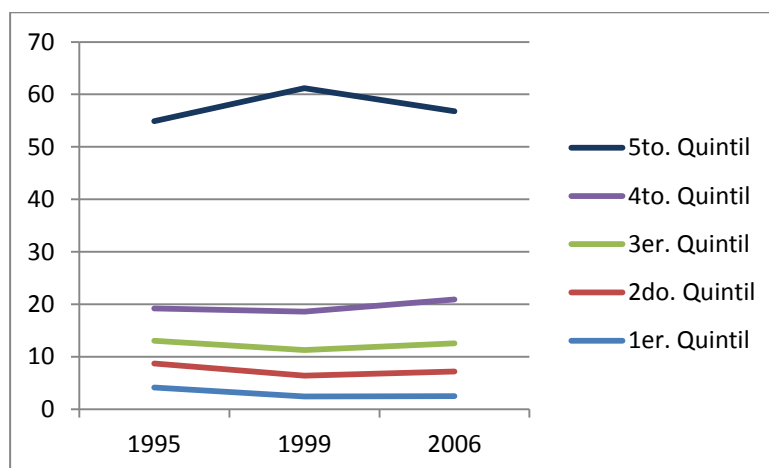
por el contrario, había aumentado su participación en 6,28 puntos, pero representaba casi 25 veces la participación de los sectores más empobrecidos<sup>10</sup>.

**Distribución de ingresos por quintiles  
(% de participación de los ingresos  
nacionales)**

	1995	1999	2006
<b>1er. Quintil</b>	4,13	2,46	2,51
<b>2do. Quintil</b>	8,71	6,43	7,18
<b>3er. Quintil</b>	13,03	11,28	12,57
<b>4to. Quintil</b>	19,19	18,62	20,95
<b>5to. Quintil</b>	54,93	61,21	56,78

Fuente: MCP, UNICEF 2004, a partir de  
INEC – ECV 1995, 1999, 2006; INEC –  
EUED 1995, 1999, 2006

**Gráfico 1. Distribución de ingresos por quintiles**



La polarización entre la clase alta y la clase baja e incluso las clases medias es una de las características más notables de esta crisis. La década de los noventa es el periodo más crítico en este sentido, entre 1990 y el 2001 “la distribución de ingreso entre el quintil más rico y el más pobre [llega] a diferenciarse en más de 60 veces” (Vera 2013: 43).

La disminución a casi la mitad de la participación de la clase baja en los ingresos nacionales tiene más peso si tomamos en cuenta que la pobreza y extrema pobreza en el

<sup>10</sup> De acuerdo al INEC, el quintil 1 corresponden a la clase baja, el quintil 2 a la media baja, el quintil 3 a la media, el quintil 4 a la clase media alta, y el quintil 5 a la clase alta.

2001 alcanzaron al 71,4% y 26,8% de la población, respectivamente. Aunque estas cifras oficiales no permiten ver diferencias de género, varias investigaciones muestran que esta crisis afectó de modo especial a las mujeres más empobrecidas, puesto que sobre ellas recayó la provisión del bienestar que antes estaba más garantizado a través del salario familiar y de la protección del estado. Al trabajo doméstico las mujeres de sectores populares sumaron múltiples tareas generadoras de ingresos precarios y trabajo político-organizativo para acceder a nuevos recursos que contribuían al sostenimiento de la vida familiar (Lind 1994; Lind 2005).

La reducción del estado implicaba una situación de riesgo para las clases medias puesto que en décadas pasadas habían crecido en torno a él (ver Guerrero y Ospina 2003: 3-4; Vera 2013). La afección y riesgo que estaban sufriendo las clases medias estaba marcada por las menores opciones de trabajo y la polarización en la participación en los ingresos nacionales, pero también por el debilitamiento de las protecciones y garantías que ofrecía el estado.

Entre 1996 y el año 2000, la inversión pública anual se había reducido de 86 a 48 USD per cápita y el gasto social bajó del 36 al 29% del gasto público (Vera 2013: 42). Vale la pena traer dos ejemplos de esta reducción que afectaron significativamente a estas clases –y, por supuesto, a los sectores más empobrecidos–: la salud sufrió una disminución de 17 a 8 USD por habitante en solo un año, entre 1995 y 1996; la educación de 52 a 27 USD por habitante entre 1996 y 1999. Estas reducciones implicaban también un deterioro de la calidad de los servicios, más concentrados en zonas urbanas.

Vera observa que mientras esto ocurría, tecnologías de gobierno en el ámbito privado impulsaban el apareamiento de un “sujeto emprendedor”, responsable de asegurarse por sí mismo su bienestar a través del mercado. Esto significaba diferencias cualitativas importantes en las clases medias, entre quienes podían o no acceder a servicios sociales y medios de aseguramiento privados, en reemplazo de los servicios públicos que desaparecían o disminuían de calidad (Vera 2013). Esto sumado a la disminución del empleo implicó una disminución general de las clases medias y fundamentalmente una considerable polarización. Fueron los sectores más bajos, los que sufrieron mayor vulnerabilidad y riesgo.

El distanciamiento de los sectores más acomodados de la clase media respecto de lo público y de los aseguramientos sociales fue posible gracias al uso de su propiedad privada y la colocación de esta en nuevas formas de inversión; en tanto, otros segmentos, sin poder ya potenciar sus capitales económicos,

sociales y culturales sobre la base de su aseguramiento colectivo y derechos sociales, perdieron sus posibilidades de movilidad social y su posición en la estructura de clases se vio amenazada (Vera 2013: 44).

Propondremos en el próximo capítulo que esta polarización de las clases medias y la vulneración de sus sectores más bajos es uno de los factores más importantes que impulsarían el movimiento de mujeres de sectores populares, como una estrategia de recomposición de las fuerzas políticas al interior del movimiento de mujeres. Pero por ahora es necesario profundizar el análisis sobre las consecuencias políticas de esta situación económica general que influirían en el movimiento de mujeres.

El trabajo en la cooperación internacional y ONGs fue, para las clases medias que mayor capital social habían acumulado, una alternativa a las oportunidades laborales que antes encontraban en el estado. Para las mujeres no fue distinto, por eso en este contexto de crisis, Benería y Floro observan que “un grupo reducido de mujeres, con altos niveles de educación, [entró] al mundo profesional antes predominantemente masculino” (Benería y Floro 2006: 147). Tal alternativa laboral tuvo también un sentido político para el movimiento de mujeres, pues significó la apertura de relaciones con el movimiento feminista latinoamericano e internacional y, a partir de esto, la ampliación de las posibilidades de incidencia. Como reconoce Alvarez, el cabildeo global de las mujeres durante esta década –articulado principalmente a través de ONGs y fondos de la cooperación internacional–, permitió que las sociedades civiles y políticas, los estados latinoamericanos y el *establishment* internacional del desarrollo absorbieran las exigencias y propuestas feministas (Alvarez 2001: 348).

Sin embargo, recalamos que la apertura al mundo de la cooperación y espacios de encuentro con feministas organizadas a nivel internacional, especialmente de Latinoamérica y Estados Unidos, fue una posibilidad restringida. El contexto neoliberal provocaba que el tránsito de las mujeres empobrecidas entre el espacio privado y público se hiciera en condiciones precarias, con tiempos atravesados de múltiples ocupaciones, mayor carga de trabajo y escasas posibilidades de autonomía. Los procesos colectivos que desarrollaron las mujeres de sectores populares serán analizados en el siguiente capítulo, puesto que antes es necesario mirar cómo el neoliberalismo perfiló subjetividades políticas específicas entre quienes tuvieron mayor acceso al estado.

### 2.3. El neoliberalismo y la organización social

Como vimos en el capítulo 1, las organizaciones que apuntaron a fortalecer la participación política formal de las mujeres en el estado fueron Mujeres por la Democracia y la CPM, organizaciones que de alguna manera hegemonizaron el movimiento de mujeres en los años 90. De manera similar a lo que ocurría en otros países latinoamericanos, los discursos de ciudadanía fueron tomados como marcos referenciales de las luchas feministas. Se planteaba ir más allá de la defensa de derechos específicos para mujeres hacia una agenda feminista más general para la política pública, como garantía de una ciudadanía plena para las mujeres (Alvarez 2001: 355).

Sin embargo, el ejercicio de la ciudadanía que se planteó en Beijing<sup>11</sup> y que marcó el horizonte político del movimiento de mujeres en el Ecuador estaba concebido como una forma efectiva de integración al desarrollo, necesaria entre otras cosas para modernizar las economías<sup>12</sup>. La concreción de esta apuesta, por lo tanto, estaría marcada por las desigualdades estructurales que el neoliberalismo acentuaba y delimitada por las posiciones jerárquicamente diferenciadas que el estado y el aparato de desarrollo permitía a mujeres de clase media y de sectores populares.

La apuesta por el estado, las políticas públicas y el desarrollo que hizo el movimiento de mujeres del Ecuador se produjo a la par de que los efectos del neoliberalismo sobre las mujeres de sectores populares dificultaron su participación en las apuestas organizativas. El encuentro con mujeres de sectores populares era para mujeres de clase media, ex militantes de organizaciones tradicionales de izquierda, algo imprescindible en cualquier estrategia de transformación. Pero la precarización de la vida de las mujeres de sectores populares hizo que cada vez su participación en los procesos de organización fuera más difícil. Ya desde fines de la década de los 80, el deseo de las clases medias de encontrarse políticamente con las otras era insuficiente para sostener apuestas colectivas.

A la vez, el contacto con mujeres de distintas tendencias políticas en escenarios distintos al barrio o la comunidad profundizó estos desencuentros. Las nuevas esferas públicas entre mujeres evidenciaban más las diferencias de clase y dificultaban la

---

<sup>11</sup> Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Naciones Unidas, realizada en 1995.

<sup>12</sup> Esto es especialmente claro en el Capítulo 1, Declaración de objetivos, numeral 4, donde se plantea que el desarrollo social y la justicia social requieren de un crecimiento económico amplio y sostenido, en el marco de un desarrollo sostenible.

horizontalidad política, en tanto demandaban capacidades técnico-políticas que difícilmente podían tener las mujeres de sectores populares.

En esta cuestión de la Acción por el Movimiento de Mujeres [AMM] queríamos involucrar al liderazgo de las mujeres de sectores populares y eso no se pudo. Es decir, había como un choque. Cuando nosotras íbamos y apoyábamos en los barrios, normalmente íbamos nosotras y a veces hacíamos reuniones en el CEPAM, y ahí no había tanto choque, pero cuando por ejemplo, empezaron a aparecer las mujeres de los otros partidos, a veces unas muy emperifolladas, llenas de joyas, llenas de cosas, se sintió muy fuerte la diferencia. Entonces nosotras no pudimos lograr que en la AMM pudieran incorporarse mujeres de sectores populares. Directamente no acudían. (L.E., entrevista diciembre de 2012)

La AMM se creó en 1987, en un contexto en el que junto a otras organizaciones de mujeres del país estaban abriendo debates sobre el vínculo entre el género la clase y la etnia, para comprender las particulares condiciones de la subordinación y explotación de la las mujeres en el país. Pero a la vez, ya se consideraba la intervención en el estado como estrategia privilegiada para provocar transformaciones a favor de la equidad de género. Por esto, la AMM construyó el Programa Básico de las Mujeres, que fue entregado en el año 1988 a los candidatos a Diputados y apuntó a crear la Comisión de la Mujer en el Congreso.

Estas acciones son la base de la apuesta por el estado que toma fuerza en los años 90. Pero para comprender mejor este momento es necesario enmarcarlo en el contexto de movilización social, en el que tensiones políticas entre las mujeres de sectores medios y populares se manifiestan como síntomas de intereses que apuntaban a distintos proyectos políticos. Esta década estuvo marcada por múltiples movilizaciones sociales, la revocatoria de dos mandatos presidenciales (Abdalá Bucaram en 1997 y Jamil Mahuad en el 2000) y una Asamblea Nacional Constituyente en 1997. Arboleda (1998: 67-68) dice que estos acontecimientos nacionales expresaban la aspiración a una democracia más participativa y directa, puesto que mujeres y otros actores se proponían pasar de ser objetos de la política pública a sujetos de una democracia más radical. Ejemplo de esto son la formación del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakitik como brazo político de la CONAIE y de dos listas de mujeres –una en Quito y otra en Guayaquil- para las elecciones de representantes ante la Asamblea Nacional Constituyente.

A nivel local, las mismas aspiraciones impulsaron varias experiencias de gobiernos locales alternativos que se desarrollaron a partir de 1996, promovidos por

sectores sociales históricamente excluidos de la participación política formal – especialmente indígenas, afroecuatorianos y mujeres (Vid. Arboleda, et al. 2009 s/p).

Noticias, documentales y otros registros de las movilizaciones, así como investigaciones sobre los gobiernos locales alternativos dan cuenta de una presencia amplia y activa de mujeres de distintos sectores sociales en estos procesos de movilización social. Además, la construcción y sostenimiento de las Comisarías de la Mujer, a partir de 1994, fue un motivo de movilización específicamente femenina. Adicionalmente, investigaciones que ya hemos mostrado (Lind 2001, 2005; Carrión 2008 s/p; Arboleda, et. al. 2009 s/p) han planteado que las mujeres de sectores populares estaban desarrollando modos alternativos de movilización y participación política en esferas públicas subalternas, más adaptados a sus roles de género, formadas en torno a estrategias de supervivencia y el sostenimiento de algunas de las funciones sociales del estado.

Visibilidad y autonomía fueron los objetivos que impulsaron los distintos modos de organización y movilización de las mujeres. Mujeres mayoritariamente profesionales y de clase media agrupadas en la CPME apuntalaban estrategias para enfrentar el sexismo de los partidos políticos tradicionales y del sistema político en general. Los mismos objetivos guiaban acciones distintas de mujeres de sectores populares, orientadas más a la sociedad civil y la transformación de esferas cotidianas como la familia (Troya 2007) y las esferas públicas locales (Carrión 2008 s/p; Arboleda, et. al. 2009 s/p).

El Ecuador atravesaba por un momento en que aquella tensión planteada por Marini, entre un proyecto burgués y un proyecto popular de democracia, estaba en un punto álgido. El proceso constituyente sintetizaba los intereses de una izquierda, cohesionada en este momento por el movimiento indígena, que proponía un estado plurinacional como una ruptura con el primer proyecto político.

Sin embargo, el mismo proceso fue escenario para la introducción de un enfoque (neo)liberal de la política. Por ejemplo, los gobiernos locales y los procesos de descentralización de facto que se habían desarrollado en distintos municipios del país, estaban escindidos entre las propuestas de democracia alternativa y propuestas neoliberales. Aunque la democracia y la participación eran elementos comunes en los discursos de todos los partidos políticos, la izquierda ponía mayor énfasis en la justicia socioeconómica, la centro izquierda en la efectividad de las políticas públicas y la derecha en la eficiencia técnica para la administración de los recursos del estado con la

participación de la empresa privada, bajo parámetros de gobernabilidad, control y seguridad ciudadana (Carrión 2008 s/p).

En el movimiento de mujeres, a pesar de los deseos de izquierda por una democracia más radical, el modo cómo desarrollarían su estrategia para la inclusión de género estaría atravesado por prácticas que limitarían la democracia interna del movimiento y que se adaptaría a un proyecto democrático neoliberal, incluso para sacar de él el mejor provecho posible. Al mismo tiempo que desarrollaban y posicionaban capacidades técnicas para actuar en el estado, y adaptaban los modos de organización política para esto, mantenían el interés por la autonomía del movimiento. Una de las integrantes de la CPME muestra elementos de esta complejidad que queremos analizar:

Como CPM impulsamos la conformación de las Comisiones Técnicas Bipartitas. Pensábamos que había que entrarle al estado, que había que conformar el Consejo Nacional de las Mujeres (CONAMU), donde el movimiento de mujeres tenga participación en las decisiones. O sea, ese era el asunto, no que nos coopten y que hagan cualquier cosa con el movimiento de mujeres. Lo que queríamos era tener poder de decisión a alto nivel dentro del CONAMU, y desde entonces la Coordinadora siempre fue parte del directorio. Nosotras decidimos “participar”, exigirle al estado otro tipo de cosas que creíamos posibles porque, en los gobiernos que había..., pensábamos que podíamos entrarle desde el plano técnico [...] bipartitas era movimiento de mujeres - estado. Nuestra idea era que en ese momento que ya teníamos una agenda consensuada en la CPM, podíamos incidir desde la sociedad civil en la política pública, con independencia (P.P., entrevista 2009).

Este plano técnico desde el que este sector del movimiento decidió incidir estaba formado por un conjunto de experticias, procedimientos, conocimientos y discursos de género, que para el estado eran cada vez más necesarios a fin de responder a las interpelaciones de Naciones Unidas y distintos organismos de cooperación internacional. Pero la capacidad de incidencia que efectivamente lograron no coincidió del todo con el fortalecimiento del movimiento. Por un lado, las capacidades técnicas implicaron también un modo de organización jerárquica, en el que la representación pasó a construirse no a través de mecanismos de consenso sino en función del conocimiento y de los vínculos influyentes –capital social- que algunas mujeres tenían. Por otro lado, esta estrategia tampoco contribuyó, como esperaban, a mantener la autonomía del movimiento, pues las estrategias y acciones que desarrollaban seguían pautas marcadas por la cooperación internacional y organismos multilaterales. Aunque estas bien fueron oportunidades para avanzar en la ampliación de derechos para las



mujeres, implicaban adoptar un modo de organización del trabajo en el que procesos colectivos y sus ritmos más lentos tenían que ser sacrificados.

La neoliberalización del estado atravesaba también la política y este era el contexto al que el movimiento de mujeres se adaptaba; el contexto que marcaría el carácter de su estrategia. El documento “Una Nueva Gestión Pública para América Latina”, producido por el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD)<sup>13</sup>, sintetiza el enfoque en el que se inscribe la estrategia técnica-política del movimiento de mujeres en los 90. Con el nombre de “reforma gerencial” este organismo proponía, entre otras cosas, “flexibilizar la administración pública” al considerar “la capacidad de la sociedad para actuar en asociación con el estado en el suministro de servicios públicos, ya sea en el control, ya sea en la producción” (CLADEM 1998: 18) La asociación con el tercer sector era considerada como beneficioso para los estados por la posibilidad de contar con conocimientos especializados. Se pensaba que de este modo la prestación y gestión de los servicios públicos sería más democrática, pero a la vez se consideraba que el suministro de servicios debía orientarse hacia “ciudadanos-usuarios”, que sean tratados como consumidores (Ibíd.: 18-19)

Varios problemas implica este planteamiento. Uno se refiere a los límites que impone a la democracia misma. Lo que Bobbio planteaba para la sociedad industrial, es válido para este momento:

La democracia y la tecnocracia son antitéticas [...] La democracia se basa en la hipótesis de que todos pueden tomar decisiones sobre todo; por el contrario, la tecnocracia pretende que los que tomen las decisiones sean los pocos que entienden de tales asuntos (Bobbio 1996: 41-42).

La opción que las mujeres de clase media hicieron por la incidencia en el estado las colocaba tanto como expertas, cuanto como representantes de las mujeres de sectores populares frente al estado, aunque también frente a la cooperación internacional. Las posibilidades de participar y tomar decisiones de las mujeres de sectores populares estaban mediadas por las mujeres de clase media.

En el conjunto de mujeres diversas y desiguales que formaban el movimiento esta estrategia instaló un sistema de diferenciación asimétrica fundado en el vínculo conocimiento-poder. Para Foucault, las relaciones de poder están íntimamente

---

<sup>13</sup> Institución cuyo Consejo Directivo estaba formado por las máximas autoridades gubernamentales responsables de la modernización de la administración pública y de la reforma del estado en 25 países miembros.

vinculadas con la producción, acumulación, circulación y funcionamiento de los discursos de verdad, vale decir con la producción de conocimiento. “Estamos sometidos a la producción de verdad desde el poder y no podemos ejercitar el poder más que a través de la producción de verdad” (Foucault 1980: 140). El género, entonces, fue un discurso de verdad que, al marcar relaciones asimétricas entre mujeres de clase media y de sectores populares, dificultó que estas pudieran desarrollar una praxis política a partir de su propia conciencia sobre los problemas y necesidades que vivían. Los privilegios de las mujeres de clase media les habían permitido producir, acumular y poner a circular el género en la esfera pública como un discurso de verdad en el que se aseguraban para sí mismas un lugar comparativamente ventajoso; un lugar desde el que se reproducían relaciones de poder de estas sobre las mujeres de sectores populares.

De esto se desprende otro de los problemas que presentaba la concepción de un modelo de estado y una política para ciudadanos-usuarios. Antes planteamos que las reformas neoliberales habían desplazado al mercado algunas de las posibilidades para el ejercicio de la ciudadanía. Con el planteamiento que colocamos ahora, la ciudadanía misma era impregnada por criterios de mercado. En conjunto ambos asuntos significaban también enormes dificultades para que las mujeres de sectores populares, empobrecidas y marcadas por desventajas estructurales acumuladas, pudieran constituirse como un sujeto político. Frente al contexto neoliberal, la ciudadanía de las mujeres de sectores populares no podía ser sino restringida, y no solamente por las condiciones materiales precarias que marcaban su vida, sino por una reforzada relación entre el conocimiento y el poder que las colocaba en desventaja.

Al decir esto no dejo de estar de acuerdo con el reconocimiento que Alvarez (2001) hace de las feminista latinoamericanas que “han entrado al Estado o al *establishment* internacional del desarrollo” para ser autoras de “luchas por nuevos significados de nociones predominantes de ciudadanía, desarrollo y democracia” (Escobar, et. al. 2001: 25). Considero que la estrategia política de las mujeres de clase media en la década de los noventa fue ciertamente eficiente y muestra de ello es la importante institucionalidad de género en el estado y varias leyes que fueron mencionadas en el Capítulo 1, muy importantes para las mujeres. Pero también es cierto que la eficiencia de su estrategia estuvo dada por una habilidad para el cabildeo político o *lobby*, un modo de hacer política que privilegiaba los vínculos con los sectores que detentan el poder político y la posibilidad de tramitar propuestas cuyo carácter técnico disfrazaba o incluso eliminaba la politicidad más radical del feminismo.

La estrategia por el estado en un contexto económico y político neoliberal creaba importantes asimetrías al interior del movimiento de mujeres. Siguiendo a la conceptualización de Moser, se encasilló a muchos de sus intereses como “necesidades prácticas”, opuestas a los “intereses estratégicos” que las expertas sí sabían formular para apuntar correctamente hacia la transformación de las relaciones de poder que debía importar al movimiento. Implícitamente, este enfoque planteó que las estrategias organizativas de las mujeres de sectores populares no eran capaces de retar al orden social (Lind 1994: 209).

El acceso al estado y a las esferas públicas hegemónicas quedó fijado como empoderamiento, como uno de los intereses más estratégico. Así, fue disminuida la importancia que las mujeres de sectores populares daban a la transformación de sus propias subjetividades y las relaciones de poder en las esferas cotidianas, que además del género tenían que ver con la clase, la raza y la cultura. Otros modos de entender y construir la política a partir de dinámicas más colectivas y conocimientos situados en la vida cotidiana fueron de este modo marginados en el movimiento de mujeres, y otros horizontes de transformación fueron coartados a través de mecanismos ideológicos neoliberales instalados en el enfoque de género de la planificación de la política pública y el desarrollo.

Como vimos en el capítulo I, varias autoras observaron que este proceso de institucionalización se expresó como una “profesionalización de la causa feminista” (Rodas 2007), o la formación de “sistemas interpretativos institucionalizados” (Herrera 2001) de las expertas sobre las demandas de las mujeres y que llegó incluso a poner al movimiento en riesgo de desaparición (Vega 2000). A esto habría que agregar que la profesionalización estatal o cuasi estatal –en ONGs- significó también la pérdida de autonomía y por lo tanto de su potencial crítico.

Para Gargallo (2004), la acriticidad con la que el movimiento feminista latinoamericano adoptó la categoría de género y el trabajo en las políticas públicas tuvo que ver con la crisis política que el movimiento estaba teniendo por no poder tramitar la enorme diversidad de posiciones políticas. Alvarez también observa en torno al proceso de Beijing que se hicieron visibles nuevos feminismos que problematizaban la identidad de género a partir de la raza/etnia, la clase, la edad y la sexualidad y posicionaban el carácter plural, multicultural y pluriétnico del movimiento de mujeres latinoamericano. Mujeres autoproclamadas como feministas *populares*, se diferenciaban de las feministas *históricas*, de clase media, blancas (o mestizas) y con educación universitaria (Ibíd.:

256-357). Estas dos posiciones son planteadas por Alvarez como facetas del movimiento de mujeres de Latinoamérica y el Caribe, que expresarían una tensión entre lo que denomina como un feminismo de pabellón y otro feminismo de cabildeo.

Según Gargallo (Ibíd.: 43), “fue un asunto de primera necesidad para ellas [las feministas institucionalizadas] que perdieran su radicalidad y que, además, desacreditaran el activismo y las bases sociales del feminismo como sujetos de la construcción de las demandas económicas, políticas y culturales de las mujeres”. Decir que esta transformación que vivió el movimiento de mujeres en el Ecuador y América Latina fue un asunto de conveniencia económica y política, a modo de cálculo racional de intereses por parte de las mujeres de clase media que habían apostado por el estado, me parece limitado, por lo menos para el caso ecuatoriano.

La trayectoria de una de las organizaciones ecuatorianas más importantes en el trabajo militante que vinculó a mujeres de clase media y de sectores populares a inicios de los 80, y que en los 90 fue una de las principales actrices en la construcción de la institucionalidad de género en el estado, es solo una muestra de que esta problemática es más compleja:

[...] la definición del CEPAM era trabajar con las mujeres de sectores populares, desde el inicio, pero después la historia cambió un poco. [...] Primero trabajamos con mujeres a nivel sindical y después con mujeres que estaban trabajando en barrios en proceso de consolidación. [...] queríamos que se reconociera el liderazgo de las mujeres dentro de esos procesos, y también queríamos que se pudiera lograr una suerte de movimiento. Se logró durante algunos años formar lo que era el Movimiento de Mujeres del Sur. [...] Queríamos liderazgos diferentes, horizontales, liderazgos que de alguna manera pudieran mostrar la fortaleza de las mujeres. Era una época interesante, porque se conjugó toda la cuestión de la lucha por las Comisarías de la Mujer y la Familia, y muchas de las mujeres que acudían a las Comisarías eran compañeras de los barrios, que pugnaban porque se mantuvieran las Comisarías, porque era muy inseguro que esta propuesta se mantuviera [...] Era toda una lucha todo el tiempo, y las mujeres [de los barrios] se movilizaban y nosotras, lógicamente, también apoyábamos esa movilización, también hacíamos que las mujeres se movilizaran. Había un contenido reivindicativo propio y político [...] Decíamos que era importante que haya un colectivo de mujeres que pudiera conversar de las mismas cosas si queríamos tener influencia en el Congreso, porque decíamos “solas no vamos a lograrlo”, ahí fue que trabajamos para que se cree en el Congreso la Comisión de la Mujer (L.E., entrevista diciembre 2012).

Si tomamos en cuenta trayectorias militantes como esta, de procesos de feministas de izquierda que buscaban transformaciones que incluyeran a las mujeres de sectores populares –en respuesta incluso a los intereses de estas-, tendríamos que buscar

herramientas que nos permitan ahondar más en las complejidades que atravesaban al movimiento y que no se agotan en el cálculo racional de unas. Podríamos preguntarnos cómo este fenómeno de institucionalización y todos los efectos problemáticos en el movimiento se produjeron cuando en la misma estrategia en cuestión –la actuación en el estado- una motivación importante era el compromiso con las mujeres de sectores populares.

El trabajo de Ong nos da algunos elementos de análisis. Esta autora observa que el vínculo conocimiento-poder y la eficiencia técnica son características fundamentales de una política de carácter neoliberal. La gubernamentalidad neoliberal redefine las actividades de gobierno y la ciudadanía como asuntos fundamentalmente técnicos, no políticos ni ideológicos (Ong 2006: 3-4). Derivado de esto, podemos agregar como característica de la política el tratamiento de asuntos de carácter público-político a través de mecanismos restringidos, privados o no visibles ni accesibles a todos.

Como propuso Vera (2013), el neoliberalismo pudo ser instaurado en el Ecuador a partir de la producción de sujetos neoliberales, especialmente entre las clases medias. Su propuesta vale como pauta de análisis de la estrategia por el estado que desarrollaron las mujeres de clase media, pero requiere de herramientas de análisis para el campo político más que el económico.

Al analizar la imposición de ajustes estructurales en América Latina, Hinkelammert afirma que se ha producido “de la mano de la propagación de la ideología de la competitividad y la eficiencia”, según la cual las organizaciones populares son percibidas como distorsiones para el orden neoliberal (Hinkelammert 2002: 19). Paradójicamente, el estado transformado por estos ajustes, para no intervenir en el mercado, tiene que ser “altamente intervencionista en las relaciones humanas y en las relaciones con la naturaleza” (Ibíd.: 20).

El neoliberalismo implicó el desarrollo de lo que Foucault llamó biopoder, un poder de estructura capilar. “Gubernamentalidades patriarcales”, dice Coba (2007 s/p) redefiniendo el concepto de Foucault para entender las formas de gobierno –no únicamente del estado- y poder que, adaptadas al orden capitalista, reinventan el orden patriarcal sobre el control del cuerpo de las mujeres como población o territorio de gobierno. Siguiendo a Gupta y Ferguson, Coba plantea la verticalidad como una de las características de esta gubernamentalidad que, incluso con un rostro proteccionista, ordena desde arriba las jerarquías de un territorio –en este caso el movimiento. Las reformas que desde arriba modifican lentamente las relaciones de fuerza forman, en

términos de Gramsci, una revolución pasiva, cuya función es impedir transformaciones radicales, revolucionarias.

El abandono de la radicalidad feminista no fue un asunto de necesidad individual sino de adaptación a un contexto que presentaba escasas oportunidades, como la misma Gargallo reconoce al nombrarlas como “amigas de lo posible”. Efectivamente, en el Ecuador y el resto de América Latina, los movimientos feministas no fueron los únicos movimientos sociales que abandonaron su radicalidad para adoptar una perspectiva política pragmatista, de manera que para entender este giro es necesario analizar el contexto más amplio.

Para esto, pondremos este análisis en diálogo con Gramsci por la preocupación que mantiene sobre las posibilidades y estrategias de transformación –pensadas como revolución socialista-, así como los obstáculos que se presentan por la capacidad de reciclarse a sí mismo que tiene el capitalismo. Para este autor, tanto la dominación o dirección de una clase sobre otra, cuanto la dirección dentro de un grupo social con una identidad común, es producto de la división del trabajo pero fundamentalmente es algo que se crea a través de procesos de hegemonía –entendida como conducción política, intelectual y moral. En ambos casos, el factor que otorga a cada parte su lugar es un proceso cultural, formado de coerciones, consensos y disputas de sentido, en el que la existencia y racionalidad de la relación –dominación/gobierno o dirección- llega a ser vista como necesaria. Si la cultura es para Gramsci fundamental para entender los procesos de transformación, también es necesaria para comprender lo que impide la producción acontecimientos (Ver Gramsci 1981: 47).

Mirado desde esta perspectiva el proceso del movimiento de mujeres durante los años 90, surge la pregunta de cómo se creó la necesidad de la estrategia por el estado y a la vez la necesidad por la mediación y representación que asumen las mujeres de clase media de otras mujeres en la relación con el estado. Me inquieta más cómo de la apuesta por relaciones militantes horizontales se llega a una apuesta por la cual estas mismas relaciones tienen que convertirse en lo opuesto. Para indagar en esto, retrocedamos un poco a los procesos anteriores que dieron lugar al movimiento de mujeres.

Carrión (2009) muestra que desde los años 30 existieron en el Ecuador procesos de organización entre mujeres de distintos sectores sociales y que desde entonces, su carácter como movimiento social crece cuando se fortalece la articulación militante entre ambos sectores y entra en crisis cuando las mujeres de clase media abandonan la militancia. En la crisis que vive el movimiento en los 90 aparecen procesos de

institucionalización –organización vertical- que además sacrifican la autonomía a favor de la profesionalización estatal o cuasi estatal (de ONG). La militancia, entendida como una relación que se basa en una voluntad de horizontalidad, que atraviesa el plano intelectual y moral, es el elemento clave.

En el movimiento de mujeres, una de las formas en que se desarrolló esta voluntad de horizontalidad fue a través de los grupos de autoconciencia y procesos de educación y comunicación popular. Esta constituía una puesta política, puesto que se consideraba un modo de generar un proceso dinámico y crítico de reflexión-acción, algo que Gramsci llamaba “filosofía de la praxis”. La posibilidad de modificar y transformar la realidad estaba ligada a la posibilidad de que las mujeres, desde sus condiciones concretas de vida, pudieran interpretar tal realidad. Esta apuesta político-pedagógica constituyó una estrategia de cohesión, en tanto le permitía al movimiento construir una identidad común en medio de las desigualdades estructurales y las diferencias culturales. A partir de la adopción de la estrategia por el estado esta apuesta desaparece como eje articulador, se mantiene únicamente en algunos casos locales, como el Movimiento de Mujeres de El Oro y otras organizaciones en Quito, y en una experiencia nacional, el Movimiento de Mujeres de Sectores Populares Luna Creciente, que sin embargo no son las organizaciones hegemónicas en el movimiento de mujeres en los 90.

Entonces, la verticalidad que adopta el movimiento en torno a la relación de conocimiento-poder de género, además de dejar a las mujeres de sectores populares en una posición subordinada, impide la creación de una cultura política adaptada a las necesidades de las mujeres de sectores populares. Ya hemos planteado esto al observar aquella división entre intereses estratégicos y necesidades prácticas que adopta el movimiento para fijar la estrategia por el estado como sinónimo de empoderamiento. Pero para Gramsci la cultura no es erudición ni únicamente adquisición de saber, sino la construcción de una subjetividad política propia, por lo que esto remite a la construcción de los sujetos políticos. Es preciso recordar que para Gramsci la hegemonía entendida como dominación es un proceso por el cual unos logran la dirección política y moral de otros, pero no solo en el plano de la política sino también en la vida cotidiana, a través de la interiorización de los valores de los dominantes. Pero este proceso también está atravesado de relaciones de coerción y violencia, inherentes al capitalismo.

Por lo tanto, el proceso de hegemonía que logra el sector de las mujeres de clase media que apostaron por el estado, al haber estado inscrito en un contexto neoliberal, estuvo atravesado de mecanismos de coerción y violencia propios del capitalismo neoliberal y patriarcal. ¿Cuáles serían estos mecanismos? Recordemos que la estrategia en cuestión se desarrolla en un estado en crisis, en medio de reformas político-administrativas orientadas a reducir su tamaño y debilitar su función social, primero, y a aplacar la oposición de sindicatos y grupos de izquierda que se vieron afectados, después. La actuación del movimiento de mujeres aquí tuvo que pasar por una adaptación político-cultural que volvió a sus expertas en un actor fundamental para el sostenimiento del estado neoliberal. La capitalización de los discursos sobre el género y el conocimiento-poder técnico-político por parte de un sector de mujeres de clase media significó a la vez el despojo –violencia simbólica– de la cualidad política de las mujeres de sectores populares.

Este proceso de despojo y asimetría política debilitó también las posibilidades de que el conjunto de organizaciones de mujeres –de sectores populares y clases medias– orientara acciones hacia un proyecto democrático popular, que privilegiara la autonomía del movimiento para una presión y control orientada a la transformación del fundamento capitalista, patriarcal y colonial del estado.

En el capítulo 1 vimos que en buena parte de la bibliografía sobre el movimiento de mujeres del Ecuador, la década de los 90 es vista como uno de los mejores momentos del movimiento de mujeres, incluso como el momento de surgimiento del mismo. Desde la perspectiva de análisis que hemos construido en este capítulo, este mismo momento representa más bien una crisis del movimiento, dado por la hegemonía de una política neoliberal que aplaca los procesos de organización y movilización social que las mujeres de sectores populares estaban desarrollando en dirección contraria al neoliberalismo económico.

Finalmente, vale resaltar el carácter *neoliberal* de esta política, en lugar de *liberal* como ha sido planteado en algunos espacios críticos a esta corriente, porque en una perspectiva histórica de las ideas políticas latinoamericanas, el liberalismo “estaba orientado hacia el exterior, mirando a Europa, y consideraba a la tradición nacionalista de las sociedades latinoamericanas como un impedimento para una necesaria modernización” (Wertz 1995: 88). Por supuesto, el neoliberalismo conserva algunas características del liberalismo político, especialmente la concepción de que los derechos de ciudadanía constituyen el modo formal de integración a la comunidad política, pero



desarrolla una forma particular de traslapar la política y el mercado, como ya ha sido analizada.

### **CAPÍTULO 3**

#### **Las organizaciones de mujeres de sectores populares como disensos**

En este capítulo analizaré la emergencia de procesos organizativos de mujeres de sectores populares que se produjo como respuesta crítica a un ordenamiento político neoliberal en el movimiento de mujeres. Aunque varias de estas organizaciones se formaron en torno a las crisis de los años 80 y 90, ubicaré la década del 2000 como el periodo de su emergencia en el movimiento de mujeres. Propondré que su autodenominación como “mujeres de sectores populares” constituye un cuestionamiento a formas de desigualdad que recayeron sobre ellas como consecuencia del contexto neoliberal, del cual la política que hegemonizó el movimiento de mujeres durante los años 90 era un elemento importante.

En este capítulo analizaré la identidad popular como una construcción social dinámica relacionada con la politización de los procesos colectivos. Al implicar la construcción de una voluntad colectiva o procesos de hegemonía, propongo entender lo popular como un campo político formado en la dialéctica entre dinámicas de dominación y de emancipación. Parto de la idea de que para mantener el dinamismo transformador de las organizaciones de mujeres de sectores populares, es necesario identificar las relaciones internas de poder en las que se definen y representan las diferencias que constituyen el campo popular.

Entre 1996 y 2008, el periodo en el que se desarrollan varias organizaciones de mujeres de sectores populares, las crisis económicas causadas por ajustes estructurales y las movilizaciones de distintos sectores de la sociedad marcaban la dinámica política del país. Lo popular en este escenario apareció como un lugar común de la exclusión y explotación, pero también como un significante de luchas antineoliberales y anticoloniales. Desde diversos lugares, mujeres autodenominadas “de sectores populares” crearon durante todo este periodo —e incluso antes— varios escenarios públicos y procesos organizativos localizados que fueron la base desde donde reconfiguraron el movimiento de mujeres ecuatoriano y renovaron su política.

Los distintos conocimientos-experiencias de las organizaciones de mujeres de sectores populares ampliaron los sentidos de sus luchas y los límites que definían al movimiento. Esto implicó la formación de disensos, que se expresaron como resistencia a los dispositivos neoliberales que organizaban el movimiento de mujeres. La irrupción

de lo popular en el movimiento es por esto un momento de crisis dinámica, que lo repolitiza al producirse como un movimiento emancipador respecto a lo ya instituido.

Como en otros momentos del movimiento, mujeres de clase media, precarizadas por los efectos del neoliberalismo, desempeñan un papel importante en este proceso. Pero esta vez, la distinción entre mujeres de sectores populares y de clase media llega a ser difusa. La ética y el compromiso militante se colocan como características que distintivas de una relación nueva entre mujeres de clase media y de sectores populares. Sin embargo, las relaciones de poder que se producen en este proceso dejan preguntas abiertas respecto a las estrategias y tácticas que permitirían el desarrollo de una experiencia diferente a la que ya vivió el movimiento de mujeres en los años 90; una subjetividad y una política en la que las mujeres de sectores populares encuentren modos de constituirse como un actor colectivo y de autorepresentarse.

### 3.1. La categoría de pueblo

*La política es el lugar por excelencia de la eficacia simbólica, acción que se ejerce por signos capaces de producir cosas sociales y en particular grupos.*  
Bourdieu

La categoría “pueblo” y su adjetivo “popular” varían, en tanto son construcciones sociales históricamente situadas, aunque de modo muy general pueden hacer referencia a un grupo mayoritario dentro de una sociedad (Samuel 1984). Por supuesto, distintos enfoques analíticos determinan distintos modos de entender esta categoría, aunque según Samuel, versiones de derechas e izquierdas de la historia popular han compartido una visión primitivista y romántica de lo popular, que “celebra lo natural, lo ingenuo y lo espontáneo” (Ibíd.: 25). *Grosso modo*, en distintos análisis sobre lo popular es posible encontrar una tensión entre construcciones hechas desde arriba –generalmente en enfoques estructuralistas- y dinámicas producidas desde abajo –observadas generalmente desde enfoques postestructuralistas en la historia y la sociología crítica o la historia oral, entre otras. Los análisis útiles para esta tesis abordan esta tensión como una relación dialéctica entre, por un lado, procesos de dominación y sistemas políticos instituidos, y, por otro, procesos de autonomía, rupturas políticas y construcción de sujetos colectivos.

El caso que analizaremos en el siguiente capítulo, el proceso de la AMPDE, está formada por mujeres con largas y distintas trayectorias de militancia y diferencias estructurales significativas, a partir de las cuales, sin embargo, se construye una

identidad común como mujeres de sectores populares, generalmente planteada como sinónimo de mujeres empobrecidas y excluidas. Para comprender este proceso, será útil establecer conexiones entre las propuestas de Laclau (2009), Gramsci (1975) y Bourdieu (1990) respecto a la formación de procesos colectivos, debido a la atención que prestan al funcionamiento de aquella dialéctica entre procesos de dominación y de autonomía, y sus esfuerzos por comprender las dinámicas que en estos procesos se producen entre las subjetividades individuales y colectivas. De este modo, será posible analizarlos tanto desde la construcción de la unidad de sus integrantes cuando desde los disensos, conflictos y tensiones internas.

Laclau y Gramsci tienen en común un uso de la categoría pueblo que hace referencia a dos paradójicas definiciones: como autoridad política fundacional y población marginada (Cielo 2006 s/p). En cualquier caso, ambos autores plantean que el pueblo es siempre una construcción social y política, históricamente situada, en la que se pone en juego una tensión dinámica entre lo particular y lo universal, a la vez que entre subjetividades individuales y colectivas.

Para Laclau, lo popular se construye como un “agrupamiento equivalencial de una pluralidad de demandas democráticas” generalmente insatisfechas (Laclau 2009: 57). Tal lógica de articulación de demandas, operada desde el populismo resulta en una operación homogenizadora, que vacía la particularidad de las mismas y elimina sus diferencias. Para poder construir la representación de estas equivalencias ya sin contenido, el populismo construye un opuesto también totalizado y contra quien el líder populista pasa a representar la cadena equivalencial “pueblo”. Su lógica, entonces, se organiza en torno a la construcción dicotómica de la sociedad, entre lo popular (los de abajo), y el poder (los de arriba). Así, lo popular aparece como una *subjetividad* que “es posible solo sobre la base de la producción discursiva de significantes *tendencialmente* vacíos” (Ibíd.: 60) y como un *campo*, resultado de las operaciones que construyen una cadena equivalencial y la sustituyen (Ibíd.: 70).

La misma lógica de articulación basada en la equivalencia, según este autor, puede desarrollarse en cualquier movimiento político si apela al pueblo como una amplia generalización, a la que opone otra construcción discursiva totalizante. “[L]os discursos basados en esta lógica articuladora pueden comenzar en *cualquier* lugar de la estructura socioinstitucional: organizaciones políticas clientelistas, partidos políticos establecidos, sindicatos, el Ejército, movimientos revolucionarios, etc.” (Ibíd.: 65). Pero el autor precisa que, cuando la representación de una cadena equivalencial es asumida

por un miembro identificado como parte de esta misma cadena, la operación toma la forma de “hegemonía”, el proceso en el que la voluntad colectiva es creada.

Lejos de plantear que esta operación de hegemonía implica una ausencia de relaciones de dominación, Laclau afirma que tales relaciones son constitutivas de las demandas populares y de la política misma. A diferencia de la operación equivalencial populista, la articulación hegemónica planteada por Laclau y Mouffe “no supone la aniquilación absoluta de las diferencias entre quienes participan en una lucha, sino su suspensión temporal [...N]o espera que los disensos desaparezcan [...]; tan solo espera que sean estratégicamente puestos entre paréntesis” (Flórez 2010: 129).

Algunos autores han considerado que el concepto de hegemonía, propuesto por Gramsci, plantea cierta ambivalencia entre la *dirección* intelectual y moral –a través del convencimiento o consenso- de la clase obrera sobre otras clases subalternas, y la *dominación*, entendida como dirección cultural de la burguesía sobre las clases subalternas (Vid. Guerrero y Ospina 2003: 8-9). Tal ambivalencia está relacionada con su concepción del poder del estado capitalista, en la que la violencia (fundamento de la dominación) y el consenso (fundamento de la dirección) se superponen. Los contextos y procesos actuales tienen una complejidad mayor que la que observó Gramsci, por eso es necesario replantear las herramientas de análisis de los procesos de hegemonía en torno a lo popular.

[la teoría marxista de las clases] ignora al mismo tiempo las posiciones ocupadas en los diferentes campos y subcampos, en particular en las relaciones de producción cultural, y todas las oposiciones que estructuran el campo social y son irreductibles a la oposición entre propietarios y no propietarios de los medios de producción económica; construye así un mundo social unidimensional organizado simplemente en torno a la oposición entre dos bloques (con lo cual uno de los problemas mayores pasa a ser el del *límite* entre esos dos bloques, con todos los problemas conexos, de eterna discusión, en relación con la aristocracia obrera, el aburguesamiento" de la clase obrera, etcétera) (Bourdieu. 1990: 301).

La propia historia del movimiento de mujeres (y de varias organizaciones de izquierda) muestra un papel importante de sectores de clase media en la cohesión y conducción de procesos, pero también relaciones de poder construidas en torno al conocimiento y su vínculo con instituciones sociales y políticas, como mostré en el anterior capítulo. Son procesos colectivos en los que las diferencias de clase tienden a ser poco claras y permeadas por otros ejes de diferencia y desigualdad como la cultura, la sexualidad, los capitales simbólicos, entre otras. Por esto, si ha de observarse sus procesos de hegemonía y la relación entre sectores populares –subalternos- y las clases medias, será

necesario hacerlo por lo menos desde la complejidad del poder que propone Gramsci en la superposición de mecanismos de violencia y consenso.

La filosofía de la praxis que este autor plantea, fundamentada en la unidad entre teoría y práctica, nos conduce al rol de los intelectuales en la construcción de hegemonía (Cielo 2006 s/p). La voluntad colectiva que se formaría a través de un proceso de hegemonía solo es posible, para Gramsci, a través de la formación de una unidad intelectual y moral que “tiene sus bases reales (surge de y se expresa en) las prácticas socialmente compartidas como las inherentes al lenguaje y las artes, la religión y la educación” (Ibíd.). Por lo tanto, tal unidad no es coercitiva, sino que alude al rol político-educativo de los intelectuales (y del partido comunista) como vanguardia del pueblo, quienes le otorgan una conciencia crítica de su rol.

Este punto nos lleva de vuelta a la problemática que plantea la relación conocimiento-poder que, como vimos en el capítulo anterior, en un contexto neoliberal resulta crítica para un movimiento compuesto por mujeres con enormes desigualdades. Vale recordar que quedó planteado que las autonomías de las mujeres de sectores populares desarrollaron como respuesta crítica a la imposibilidad de procesar las diferencias políticas que surgieron a consecuencia de la política neoliberal en torno a la cual se construyó la hegemonía del movimiento de mujeres.

Ahora bien, Gramsci define a los intelectuales a partir de su función político-educativa, pero precisa su relación de pertenencia con el grupo social al que dirigen su actividad: “El modo de ser del nuevo intelectual aparece insertado activamente en la vida práctica [...]; a partir de la técnica-trabajo llega a la técnica-ciencia y a una concepción humanística histórica, sin la cual se es □especialista□ y no se llega a ser dirigente (especialista + político)” (Gramsci 1975 [1930]: 15). En la heterogeneidad del movimiento de mujeres del Ecuador, es posible identificar distintos procesos de hegemonía que responden a los distintos modos en que se desarrolla la vida práctica, el trabajo político de las organizaciones locales y los conocimientos que de ellos se derivan. Por lo tanto, para comprender los modos en que estos distintos procesos se articulan, es necesario observar la complejidad del campo social en el que se insertan; un campo que, al estar compuesto por desigualdades y antagonismos, no puede ser entendido por fuera del poder y el conflicto.

Considerando esto, los movimientos sociales pueden ser comprendidos como campos de fuerza, contruidos a partir de la distribución de distintos capitales o poderes –económico, cultural, social y simbólico (Bourdieu 1990: 184-185). Bourdieu piensa en

las agrupaciones que se establecen sobre una identidad de clase como construcciones políticas formadas a través de procesos colectivos largos, en los que el poder de nominar que asumen intelectuales, productores culturales o portavoces, funda su autoridad (Ibíd.: 287, 302). Son procesos en los que, incluso a pesar de la voluntad de sus miembros, las relaciones de poder implican la desigualdad y jerarquía entre los distintos modos de conocer y acceder a la palabra. El análisis de los procesos de hegemonía, por lo tanto, tendría que poner atención a los sentidos comunes que, formados en la acción colectiva y en procesos históricos que la preceden, naturalizan estas relaciones de poder o, por el contrario, las develan y transforman.

Desde el análisis del movimiento de mujeres negras, formado a fines de los 70 en Gran Bretaña, Avtar Brah (2004) plantea esta complejidad de los procesos colectivos organizados en torno a identidades diferenciales. En este se desarrollaron esfuerzos por trabajar a partir de la particularidad de distintas experiencias y demandas locales (de migrantes de África y Asia, y mujeres negras nacidas en Gran Betaña), muchas de las cuales eran diferencias políticas respecto a cómo se concebía la identidad común, a partir de distintos modos de articulación entre las estructuras de clase, racismo, género y sexualidad. A la vez que desarrollaban modos de comprender cómo se articulan las opresiones que se derivan de tales estructuras, también se planteaban formas de comprenderlas lineal y acumulativamente, estableciendo jerarquías de opresión.

Estas observaciones llevan a la autora a plantear el concepto de articulación tanto para referirse a la conexión y efectividad de las estructuras de opresión, cuanto para nombrar la práctica que busca explicar críticamente tales conexiones. De tal manera, el movimiento feminista negro, como el blanco, es definido por Brah como un *campo contingente de lucha* entre distintos modos de entender políticamente el mundo y relacionarse con él (Brah 2004: 112-114). En la contingencia que da forma a estos procesos, la autora propone que lo importante es identificar “quién define la diferencia, cómo se representan los distintos sectores de las mujeres en los discursos de la «diferencia», y si la «diferencia» *diferencia* horizontal o jerárquicamente” (Ibíd.: 120) Estas consideraciones guiarán el análisis del proceso de constitución de la AMPDE.

### **3.2. La irrupción de lo popular en el movimiento de mujeres**

¿Cómo se define y qué representa la identidad popular en el movimiento de mujeres del Ecuador? En el anterior capítulo vimos que las políticas neoliberales implantadas desde los años ochenta a través de medidas de ajuste estructural afectaron principalmente a los sectores más empobrecidos. El aumento de la inflación y el desempleo pesó más sobre las mujeres ya empobrecidas, puesto que la posibilidad de satisfacer varias necesidades básicas familiares pasó a depender fundamentalmente de ellas. Sus trabajos –en plural-, también desarrollados a través de procesos de organización para hacer posible la subsistencia familiar, permitieron subsidiar la subsistencia del país en un modelo de desarrollo inequitativo y desigual, que se sostenía sobre el trabajo no pagado de las mujeres, dentro y fuera del hogar (Lind 2005) y altos niveles de explotación y precariedad. Las clases medias también fueron golpeadas –especialmente en los años 90- y se marcaron diferencias importantes según la capacidad de acceso al mercado para satisfacer para satisfacer ahí los servicios sociales cuya cobertura y calidad ya no estaban garantizados como derechos por el estado.

Algunas autoras han planteado que las crisis económicas y los procesos de organización que desarrollaron para enfrentarla formaron el contexto de oportunidades del que emergieron las organizaciones de mujeres de sectores populares (Lind 2005; Herrera 2007 s/p). Las movilizaciones antineoliberales que se desarrollaron en esta década, también son una parte importante de este contexto puesto que para las mujeres de sectores populares significaron espacios de encuentro y diálogo político desde donde se perfilaron nuevos horizontes de sentido para sus luchas.

Los procesos organizativos producidos para enfrentarla constituyen experiencias colectivas que han contribuido a la construcción de sí mismas como sujetos de transformaciones. Estos permitieron a las mujeres de sectores populares vincularse a diversas organizaciones sociales, instituciones públicas y privadas –muchas dedicadas a la atención de mujeres desde programas con enfoque de género- para ampliar su radio de acción e incidencia. Aquí un ejemplo:

Nuestra organización, la Federación de Organizaciones Populares de Ayora – Cayambe (UNOPAC), nace a raíz del cismo de 1987, donde las que participaban en las mingas para la reconstrucción de las casas eran las mujeres [...] Después, las mujeres ¿qué iban a hacer? estaban acostumbradas a estar reunidas, a estar saliendo a las mingas. A raíz de eso se creó el área de las mujeres dentro de la organización mixta [...], empezaron con proyectos productivos, con donaciones de instituciones, con la crianza de las gallinas ponedoras, con los huertos integrales. Y el otro eje fundamental de formación y



capacitación de autoestima, porque más antes a las compañeras se les preguntaba si trabajaban y decían que no, no ponían valor al trabajo que realizan en el hogar, al trabajo del cuidado de los wawas, al participar como comuneras. Entonces, estos espacios de capacitación se transforman en un área de política y género, ahí se capacita sobre diferentes problemáticas que están pasando a nivel local y más que todo a nivel nacional [...], como incidencia política. Como mujeres organizadas, fuimos partícipes en la creación del Consejo Cantonal de Mujeres, CONMUJER. (E.U., UNOPAC, Luna Creciente. Entrevista 2009).

Especialmente en los sectores más alejados de las principales ciudades del país, las organizaciones se constituyeron a sabiendas de la indiferencia e ineficacia de los gobiernos y agencias de desarrollo para dar respuesta a sus problemas. Junto a otros actores sociales, las mujeres levantaron importantes cuestionamientos al modelo económico y al tipo de estado que se estaba construyendo sobre la explotación de su trabajo y la naturaleza de su entorno, excluyéndolas luego de la repartición de la riqueza generada. Desde ahí, también construyeron estrategias de presión a los gobiernos de turno y de interpelación a distintos actores sociales para asegurar servicios e infraestructura. En medio de esto, algunas organizaciones también denunciaban la ausencia de corresponsabilidad de hombres de su medio en los trabajos que se veían obligadas a asumir.

En Orellana, por la década de los ochenta hay inquietud de mujeres, sobre todo las que eran jefas de hogar, porque por esta situación petrolera, los esposos que tienen son temporales, porque tienen doble hogar [...], las mujeres van quedando ahí llenas de hijos. Entonces la organización surgió en la inquietud de ver alternativas de trabajo y sobrevivencia económica [...] Se avanzó bastante, muchas llegaron a ser presidentas barriales, o sea ya no quedarnos en lo cotidiano, en lo casero, sino tratar de incidir en nuestra propia sociedad, porque ahí empezamos a darnos cuenta que nos faltaba la luz, el agua, tener una cancha bonita, espacios recreativos para los mismos hijos... tenemos derecho a otras cosas. Entonces, en la organización nosotras hemos avanzado en pensamiento, en criterio, y vemos, por ejemplo, que las políticas de gobierno que se aplican no están bien, no van a intereses del pueblo, sino a intereses de las autoridades [...]. Por eso algunos han intentado frenarnos, anularnos políticamente, diciendo que “estas mujeres ya piensan, ya cuestionan”... (L. C., Federación de Mujeres de Orellana, Luna Creciente. Entrevista 2009).

A partir de gobiernos locales alternativos contruidos en el país desde 1996, organizaciones de mujeres populares formadas sobre una base territorial, encontraron oportunidades de participar políticamente a través de mecanismos alternativos que permitían su presencia colectiva como consejos y coordinadoras cantonales de mujeres. Estos espacios fueron especialmente importantes en la ampliación de las esferas de participación para ellas, e implicaron más y nuevas relaciones con distintos actores sociales. Su participación en los gobiernos locales se presentaba como garantía de una

justa distribución de los fondos públicos, que llegara a los sectores tradicionalmente excluidos. También promovieron procesos de descentralización de facto en áreas sociales con los que ampliaron sustancialmente la participación de las mujeres organizadas desde la sociedad civil en procesos de veeduría y control de la política pública (Vid. Arboleda, et. al. 2013).

Las organizaciones formadas a partir de las crisis económicas en los años 80 y 90 y de los gobiernos locales alternativos en esta última década, han caminado un trayecto en el que han ampliado sus objetivos y espacios de intervención o acción, se han vinculado a varias otras organizaciones de mujeres a nivel nacional y han construido una autonomía importante en relación a las ONGs, la iglesia, los gobiernos de turno y expresiones diferentes del movimiento de mujeres. Pero algo que marca significativamente sus procesos es el contexto nacional de movilizaciones durante la década de los 90, que estaba impregnado por debates abiertos por el movimiento indígena sobre el contenido colonialista de la ciudadanía y de la política misma.

Andrés Guerrero observa que en este momento el movimiento produce una ruptura de la relación de protección y tutelaje que con ellos había establecido el estado liberal (Guerrero 1994) y de la ventriloquía que caracterizaba la relación de la izquierda militante e intelectuales progresistas –entre otros sectores sociales- con los indígenas y varios otros grupos sociales no reconocidos como ciudadanos (Guerrero 1997). Así explicaba el funcionamiento de esta relación rota:

No es que la población indígena no hable, no diga cosas; es que el Estado requiere una descodificación, una recodificación de esas palabras, y ese es justamente el papel [de] los "intermediarios ventrílocuos". Su función no es solo la de poner en español el lenguaje de los indígenas, sino en el código de funcionamiento que la representación ciudadana establece, para que pueda canalizarse en lo público estatal. El intermediario, al hacer hablar, establece también una estrategia de poder para que esta población pueda ser representada (Guerrero 1997: 62).

El campo de la política que definía a los indígenas y otros “no ciudadanos” –entre los que incluyo a las mujeres de sectores populares- como aquellos a quienes había que liberar asimilándolos a una ciudadanía blanco mestiza y colonial, estaba cambiando según Guerrero (1994, 1997) por una presencia política con voz propia.

Procesos políticos locales sumados a este contexto nacional de permanente movilización social y nuevos debates políticos, facilitaron que a lo largo de la década de 1990 organizaciones de mujeres empobrecidas y precarizadas por las políticas neoliberales –especialmente campesinas, indígenas, negras- evidenciaran diferencias

estructurales, culturales y políticas al interior del movimiento de mujeres. A mediados de esta década, el movimiento de mujeres era un lugar de encuentro entre mujeres con diferencias estructurales significativas, distintas trayectorias políticas y proyectos políticos diferenciados.

Las crisis económicas, las organizaciones localizadas que las mujeres formaron para enfrentarlas y un contexto nacional de movilizaciones y debates críticos constituyen lugares desde donde las mujeres de sectores populares organizan otra experiencia de sí como sujetos colectivos. Las narraciones de sus procesos de organización generalmente hacen referencia a trayectorias que parte de los espacios comunitarios o barriales, pasan por la organización con otras mujeres y alcanza espacios públicos más amplios y el estado. Mujeres de sectores populares de varias provincias del país que participaron en varios talleres sobre memoria y política realizados durante el 2009 y 2010 dan cuenta de un modo de hacer política que trasciende la división público-privado de la filosofía política occidental. Sabiéndose sujetos marginales en la construcción histórica del estado y la noción de ciudadanía, reivindican su participación política como resultado de una trayectoria larga de resistencia y aprendizajes heredados a través de varias generaciones. Por eso, en estos talleres y entrevista a integrantes del Movimiento Nacional de Mujeres de Sectores Populares Luna Creciente, de la AMPDE, de organizaciones indígenas y campesinas de Cayambe, Cotacachi, Guamote y mujeres diversas de El Oro, muestran que mujeres como Lorenza Abemañay, Magdalena León, Felipa Apucha, María Ester Morocho, Dolores Cacuango, Tránsito Amaguaña, Luz Victoria Rivera, Chabelita Rambay, entre otras, son figuras presentes en la memoria de sus organizaciones y a ellas vinculan procesos colectivos de reivindicaciones materiales y simbólicas.

Las historias personales, actuales, se entrelazan con estas largas trayectorias para simbolizar modos de hacer política en un tránsito permanente entre lo privado y lo público, entre la experiencia comunitaria y la relación con el estado.

La COMICG<sup>14</sup> hemos formado para conseguir la participación o los derechos de las mujeres. En sí, también por ejemplo, la participación también debería ser en todas las entidades públicas, privadas, en la participación del cabildo, en la familia, en el hogar. Entonces, por lo tanto, hemos logrado bastante para que haya la participación de la mujer. Y siempre esto, venimos manifestando, debe

---

<sup>14</sup> Corporación de Organizaciones de Mujeres Indígenas y Campesinas del Cantón Guamote, organización que tiene como base a 26 organizaciones de mujeres, de diferentes comunidades. Fue creada en el año 1998.

ser desde la familia, desde las organizaciones de base, para llegar a la equidad e igualdad de las mujeres con el esposo, con las autoridades, en todas las dignidades públicas y privadas (Hilda Ayol, entrevista, marzo 2012).

Los procesos de organización de las mujeres populares muestran formas de entender la participación política en las que el movimiento de mujeres de los 90, al enfocarse en la participación formal individual que proponía la ley de cuotas, poco había pensado. La participación que estaban desarrollando, incluso en el estado, era fundamentalmente colectiva y llevaba la marca de los procesos de organización social de los que venían, en donde primaban lógicas de correspondencia con las organizaciones de base.

La apuesta por el estado llevada desde una política de carácter neoliberal, hacía que sobre la diversidad se construyera desigualdades al interior del movimiento y que las diferencias no pudieran ser manejadas sino a través de relaciones verticales, cuestionadas desde los márgenes. Algunas críticas se dirigían a expresiones del movimiento como la CPM u ONGs específicas, pero se extendían al movimiento en general. Estas daban cuenta de que diferentes experiencias se habían desarrollado a partir del tratamiento de temas comunes para el movimiento.

Había muchos grupos que se sentían excluidos y nos cuestionaron: “yo no quiero ser de la Coordinadora, no quiero ser de las Autónomas [Mujeres por la Autonomía], ni del Foro [Permanente de la Mujer], pero quiero que mi expresión esté representada [...] Como se iba construyendo política pública e iban apareciendo temas que estaban súper escondidos –políticas de género, derechos sexuales y reproductivos, violencia, derechos políticos-, las ciudades empezaron a tener procesos, en la misma Coordinadora, la Rosa López, con el Movimiento de Mujeres de El Oro, que estaba ligado a las trabajadoras sexuales, empieza a levantar cosas; y del sur, desde Loja, empiezan a levantarse cosas; y desde Cuenca a levantarse cosas con otras actoras. Y entonces las trabajadoras sexuales, las lesbianas, las pobladoras, las negras, [empezaron] a decir que el movimiento de mujeres era elitista, que son académicas, intelectuales, de clase media-alta y no las populares, por eso también aparece Luna Creciente... Empezaron a resurgir desde abajo, no era nacional la cosa, a tal punto que la Coordinadora empieza a tener una división “natural”, donde las compañeras empezaron a cuestionar la visión cupular y patriarcal de la Coordinadora Política de Mujeres (M.C., CPM. Entrevista 2009).

El cuestionamiento al centralismo de este proceso planteaba también los límites de sus estrategias para responder a las demandas que hacían las diferentes mujeres, según su condición de clase y su cultura. Pero también denunciaban la reproducción de estructuras de dominación en base a las desigualdades de clase y etnia. Al respecto, Carmen Tene, entonces directora de Escuela de formación de Mujeres Líderes de la

CONAIE, escribió: “El movimiento de mujeres no indígenas no ha tenido una estrategia de trabajo con nosotras. Ha replicado la forma desigual, en la cual la sociedad mestiza se ha relacionado con nosotras y nosotros los indígenas” (Tene 2000: 219).

La identidad genérica que se había formado a través de los espacios de encuentro y algunos criterios políticos comunes no significaba que el movimiento fuera unívoco. En el movimiento se producían debates cada vez más complejos y cargados de conflicto sobre las diferencias y desigualdades entre mujeres. Se levantaron críticas a la visión instrumental que respecto a las mujeres de sectores populares tenían las mujeres de clase media vinculadas al estado, ONGs y la cooperación internacional; a la identidad unívoca de mujer que estas pretendían representar; a la dinámica de trabajo que habían establecido con las mujeres de sectores populares, marcada por una clara distancia y el supuesto de que su condición económica, su cultura y su vinculación con organizaciones mixtas implicaba que eran oprimidas; al hecho de que las desigualdades entre unas y otras se siguieran reproduciendo en la lógica institucional en donde unas cobraban salarios por representar a otras que debían trabajar de manera voluntaria.

### **3.3. La desujeción de las mujeres de sectores populares**

Como resultado de la complejidad de los debates, las consecuentes tensiones y la distancia crítica que algunas agrupaciones de mujeres ganaron, se produjeron procesos de disenso. La autonomía que durante los años 70 había sido defendida para construir espacios exclusivamente femeninos –independientes de los partidos y organizaciones de izquierda- o para fomentar procesos de individuación, pasó a ser un nudo de conflictos al interior del mismo movimiento de mujeres. En este nuevo momento la autonomía se planteaba como una reivindicación e incluso como un proceso emancipador de mujeres que se identificaban como de sectores populares respecto a las clases medias que hegemonizaron el movimiento en los 90.

El Movimiento de Mujeres de El Oro y Luna Creciente se separaron de la CPM; otras como la Coordinadora Nacional de Mujeres Negras del Ecuador (CONAMUNE) se constituyeron como nuevos e independientes espacios organizativos; y otras, como las mujeres indígenas, continuaron sus procesos al interior de organizaciones mixtas. Por ejemplo, al interior de la CONAIE, la Dirigencia de la Mujer y el Consejo nacional de Mujeres Indígenas del Ecuador – CONMIE, fueron creados como resultado de las organizaciones y secretarías de mujeres que venían constituyéndose en las

organizaciones de base a partir del Primer Encuentro de Mujeres Indígenas, en 1979 en Santa Cruz de Riobamba. En 1996, al interior de la ECUARUNARI, se creó la Escuela de Formación de Mujeres Líderes Dolores Cacungo. Estos procesos también establecían enlaces con mujeres indígenas a nivel continental (Rodas 2007: 48-49, 88). Adicionalmente, en la Central Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL), crearon el Frente Nacional de la Mujer Trabajadora.

Los lugares desde donde actuaban estas organizaciones adoptaban el discurso de derechos que construyeron feministas durante la década de los 90, pero los reinterpretaron y ampliaban los sentidos de las luchas abiertas por el movimiento de mujeres. Procesos como el de Luna Creciente se formaron con el objetivo de levantar una política situada en la particularidad y complejidad de sus experiencias de discriminación y opresión de género, clase y etnia. Lo mismo plantearon mujeres indígenas y negras respecto a sus procesos, y las mujeres que posteriormente se reunirían en la AMPDE.

Trabajadoras sexuales organizadas impregnaban a la lucha contra la violencia de género de sentidos distintos a la perspectiva de la violencia “intrafamiliar” de la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia impulsada por el movimiento. El testimonio de una exdirigente de Flor de Azalea, organización de trabajadoras sexuales que es miembro del Movimiento de Mujeres de El Oro y a su vez de la AMPDE, muestra una reapropiación del debate planteado por el movimiento de mujeres, con una perspectiva crítica que lo desborda.

[...] la policía las cogía, se las llevaba, las violaban, les quitaban el dinero; se las llevaban hasta Pasaje y ahí las dejaban botando sin dos reales, y desde allá muchas veces les tocaba venir a pie, porque no les dejaban absolutamente nada; y cuando eran detenidas las llevaban de 15 a 20 días. Siempre las perseguían, si ellas estaban comiendo, ahí iban y las sacaban, si las encontraban en el mercado comprando con sus hijos, tampoco les importaba y las subían en el carro con sus niños. Había una serie de discriminaciones y violencia contra sus derechos.

Cuando empezamos a hablar, a ver que estos problemas teníamos todas, comenzamos a armar estrategias para parar la violencia, porque la cosa que más les afectaba era la policía, la que les perseguía, les pegaba, maltrataba, sin importar si estaban embarazadas ni nada. Así se comenzó a armar Flor de Azalea, un 14 de febrero del 2002. A partir de eso hubo un impulso cuando empezamos a visibilizar mucho más estos problemas. Fue la primera vez que las trabajadoras sexuales salieron a las calles sin máscaras, sin nada; son las que han hecho consignas en contra de la policía, en contra de las autoridades, en contra de los explotadores sexuales; ellas son las que salen a la calle a marchar (Karina Bravo, 2009: 72-73).

A la vez que ampliaban significativamente el debate frente a la violencia de género y otros temas emblemáticos del movimiento, interpelaban a sus integrantes por discriminaciones que se manifestaban en gestos para no ser “confundidas” con ellas.

Otro ejemplo se encuentra en organizaciones de trabajadoras remuneradas del hogar, como la Asociación de Empleadas Domésticas Aurora de la Libertad (ASEDAL) y Asociación de Trabajadoras Remuneradas del Hogar de Guayaquil, que han cuestionado la poca empatía de mujeres clase media del movimiento como una “contradicción conveniente”. Explican que el poco apoyo que han encontrado en mujeres del movimiento es resultado de que estas les han delegado el trabajo doméstico y de cuidados. De esto derivan que del sostenimiento de las relaciones de inequidad entre unas y otras depende la libertad de las mujeres de clase media para el trabajo productivo y organizativo.

Mientras la relación conocimiento-poder dejaba a mujeres de sectores populares en un lugar subordinado en el tratamiento de los temas y las agendas que el movimiento colocaba como prioritarios, su conocimiento-experiencia era el lugar desde donde reivindicaban la diferencia. Tales experiencias permiten identificar la irrupción de lo popular en el movimiento de mujeres como una afirmación de la diferencia, hecha a través del posicionamiento de experiencias y conocimientos situados; una táctica de desujeción, diría Flórez (2010), o una desidentificación, Rancière (1998).

Rancière dice que los procesos de desidentificación o desclasificación se producen como respuesta a un espacio u orden social que le ha negado a alguien un lugar dentro de una determinada comunidad. Para Flórez las tácticas de desujeción tienen que ver con la posibilidad de controlar la experiencia de sí, lo que a su vez significa devenir en actor. En ambos casos, se trata de procesos de subjetivación en el que los actores despliegan narraciones de sí mismos que dan sentido político a sus procesos organizativos.

Barbarita Lara, excoordinadora de la CONAMUNE, muestra con claridad una narración de sí desde la que construye la diferencia de organizaciones de mujeres negras respecto a otros sectores del movimiento de mujeres. Definía su rol de dirigente como “un trabajo lento, de un compromiso propio, porque nosotras nos comprometimos a gastar plata y persona”. Y explicaba que sus organizaciones se desarrollaban vinculadas a la experiencia, desde trabajos y lugares cotidianos.

Nos reuníamos aprovechando las coyunturas que teníamos [...]. Las que estábamos en educación aprovechábamos el espacio de nuestras instituciones

educativas, como colegios y escuelas; las que estaban trabajando en la pastoral [...], aprovechaba[n] el espacio de la pastoral afro en la Conferencia Episcopal [...]

Hubieron espacios para hablar de la educación, que cómo estábamos nosotras en nuestros derechos sociales, que en ese entonces no los pensábamos como derechos, sino como algo de lo cotidiano, de la educación en la cotidianidad, de la vivienda, de las inequidades, de la participación, de la falta de espacios que teníamos las mujeres, del racismo que siempre teníamos que enfrentar, hablábamos del maltrato y de la violencia familiar. Ahí discutimos sobre la participación de las mujeres y, bueno, algunos aspectos que estaban ahí dentro de la cotidianidad. Con esas discusiones, que fue muy rico, porque todas participamos, todas con esa expectativa y la esperanza de abrir un nuevo espacio para las mujeres (Barbarita Lara Encuentro Mujeres Diversas, Casa feminista de Rosa, 15 de julio de 2009).

La irrupción de lo popular llevó a pensar el movimiento de mujeres ya no desde “la aspiración de verlo como un movimiento nacional de fuerte envergadura, capaz de movilizar multitudes de mujeres a las calles” (Rodas 2007: 89), sino como un conjunto de procesos descentralizados, con una identidad inestable, proyectos políticos y representaciones en disputa.

Cuando las jóvenes y las negras empezaron a cuestionar dentro del movimiento la necesidad de tener su propia organización, nosotras dijimos “si nosotras no tratamos que dentro del mismo movimiento hay exclusiones por ser negra, por ser india, por ser lesbiana, por ser pobre, estamos mal...” Pero algunas de las que iniciaron con el proceso de la Coordinadora, decían que “ese no es nuestro tema, que se hagan cargo las mujeres populares o la organización a la que le interese, pero nosotras no” [...], se decía que ese era un proceso más lento, y como que el movimiento estaba avanzando, y hasta que se capaciten a las mujeres populares sobre el tema del feminismo, sobre el tema del género, era un proceso como lentísimo, era como retroceder para algunas de ellas (M.C., CPM. Entrevista 2009).

A finales de la década, varias organizaciones planteaban la necesidad de descentralizar el movimiento y cambiar sus estrategias, para poner más énfasis en la relación con mujeres de barrios, provincias y distintos sectores sociales. A la vez, algunas mujeres seguían sosteniendo la idea de que el movimiento debía prioritariamente mantenerse como una instancia de representación política para mediar la relación de las mujeres en general con el estado. Mientras las primeras apostaban por un movimiento que contribuyera a la afirmación de procesos localizados, las segundas priorizaron estrategias que posibilitaran transformaciones desde arriba. Las diferencias correspondían a concepciones opuestas del poder y la política.



En estas disputas, las apuestas de mujeres de sectores populares se desarrollaron a pesar de la racionalidad colocada por las segundas. Fue una irrupción o movimiento emancipador que se desarrolló a través de una apropiación y resignificación de sus luchas. Flórez (Ibíd.) define a los movimientos sociales como lugares de resistencia constituidos por relaciones antagónicas, pero no solo respecto a actores que quedan fuera; son lugares en los que se recrea relaciones de poder. La apertura de los movimientos a los disensos es, desde este enfoque, una condición necesaria para mantener su dinamismo; su unidad solo puede existir en la medida en que desarrolle una continua negociación de los sentidos de las luchas comunes. Por esto retomo de un trabajo anterior (Carrión 2009 s/p) la idea de que, si hubo una crisis del movimiento de mujeres del Ecuador a fines de los 90, fue una crisis dinámica que diversificó y amplió los límites del movimiento de mujeres e implicó, por lo tanto, su repolitización.

Para mediados del 2000, pero especialmente en torno a los procesos preparativos para la Asamblea Nacional Constituyente del 2008 que realizaron diversas organizaciones sociales del país, la perspectiva política de las organizaciones de mujeres de sectores populares había permeado el movimiento de mujeres. Además de la reivindicación de derechos específicos en razón del género, estas mujeres habían colocado en el movimiento la necesidad de impulsar derechos económicos e insertarse en diversos debates nacionales que apuntaban a enfrentar la desigualdad de las mujeres desde una perspectiva más compleja.

Ha ido levantándose una voz más popular, más diversa, en la que mujeres que lideraba el movimiento de este país, por sus mismas condiciones económicas y su posicionamiento social o cultural, no tomaban en cuenta. Decían “no al bono de desarrollo humano”, “no a los microcréditos y las cajas comunitarias”. El tema de derechos económicos no ha sido un tema fundamental, siendo un tema que tiene que ver con el desarrollo, con la estructura, con el modelo de estado, las mujeres no topábamos esos elementos. Ahora sí los topamos. Tema del agua y hablamos las mujeres, tema de soberanía alimentaria y hablamos las mujeres, tema de finanzas solidarias... estamos hablando, aunque sea dispersamente estamos hablando, pero creo que el reto mayor ahora es consolidar un compromiso de unidad (Rosa López, Encuentro Mujeres Diversas, Casa feminista de Rosa, 15 de julio de 2009).

Lo popular había pasado a ser una subjetividad política más visible en el movimiento. Parafraseando a Laclau, estaba formada por una amplia articulación de demandas no democráticas no satisfechas; demandas que no solo estaban dirigidas al estado y la sociedad en general sino a las propias integrantes del movimiento. De cierto modo se

había producido un desplazamiento desde un movimiento dirigido a afirmar la diferencia a la vez que la equivalencia política de mujeres de sectores respecto a otras (especialmente de clase media), hacia un movimiento que abordaba la relación entre la diversidad que abarcaba lo popular.

En este punto, lo que interesa de esta identidad es el modo en que los diversos lugares de lo popular se articulan y la posición que ocupa la clase media. La voz “más popular” que se identificaba en este momento denotaba fronteras imprecisas que incluían a sectores de clase media. Luna Creciente, por ejemplo, se organizó por iniciativa de mujeres indígenas y campesinas, con el acompañamiento de una mujer de clase media, militante, y más tarde un pequeño grupo de apoyo político que adoptó la figura de fundación. Su estructura organizativa se basa en mecanismos que permiten una democracia interna, puesto que los cargos de dirigencia son rotativos y siempre elegidos en asamblea. Sus integrantes siempre son parte de procesos locales de organización que se comunican a través de algunos espacios de encuentro –las mismas asambleas y escuelas de formación política. Aunque sus integrantes plantean que la representación del movimiento y las decisiones siempre están a cargo del movimiento, tensiones internas han evidenciado que no es muy clara la distinción entre el movimiento y el grupo de apoyo político, y sus respectivas atribuciones.

En el caso que analizaré, la AMPDE, se formó a partir de la iniciativa de mujeres que, aunque podían ser identificadas como mujeres de clase media por sus condiciones materiales y capitales sociales y simbólicos de una clase media, se definieron a sí mismas como mujeres de sectores populares:

[...] uno de los acuerdos que tenemos, por eso es el nombre, es que somos mujeres pobres, nos reconocemos por eso como Asamblea de Mujeres “Populares” y Diversas, nos reconocemos como mujeres pobres –o empobrecidas en realidad- en el Ecuador. Entonces, acordamos que tenemos un encuentro de clase, o sea estemos en el campo, en la ciudad, en el páramo, en el manglar, pero somos mujeres pobres. [...] somos mestizas aquí en la ciudad, pero no somos las mestizas que dominamos, que estamos en los espacios de poder. Desde ese reconocimiento es que entablamos la posibilidad de un encuentro [...] en mi caso, yo trabajo en una ONG y para muchas de las compañeras, los espacios de trabajos son las ONGs o son las consultorías. ¿Cómo desde nosotras asumimos estos debates? No necesariamente apuntamos a construir una coordinación o la gran estructura que se dispute representatividad. Creemos que es vital en este momento abrir canales para encontrarnos entre las diversas, comunes y corrientes, para ir cuajando un proceso más desde abajo, no solamente desde arriba. (Judith Flores, Encuentro “Mujeres Diversas”, Casa feminista de Rosa, 15 de julio de 2009).

La identidad popular fue asumida por la presencia mayoritaria de mujeres de estratos económicos bajos y de distintos sectores geográficos en los que la presencia del estado como garante de derechos era escasa o nula. Adicionalmente, mujeres de clase media que impulsaron este proceso, tenían trayectorias de militancia en otros movimientos sociales y partidos de izquierda que de alguna manera influyeron en su cultura política. Estas también asumieron en primera persona la identidad popular al plantear la inseguridad de su situación económica, cierta precariedad de sus trabajos –contratos esporádicos, de corto tiempo y sin seguro social- y en algunos casos la pobreza que tuvieron que enfrentar sus padres o abuelos al migrar del campo a la ciudad. En este caso –AMPDE-, la autodenominación como mujeres de sectores populares se planteó como una identidad política que no en todos los casos coincidía con la situación económica de sus integrantes.

Las críticas que en esta organización se planteó en relación a las mujeres que hegemonizaron el movimiento de mujeres en los 90 fueron de distinto tipo, pero fundamentalmente cuestionaban las relaciones jerárquicas e instrumentales que establecieron con las mujeres de sectores populares. La identidad feminista que las clases medias de la AMPDE asumían, volvía a colocar la “ética” y el “compromiso militante” como fundamento, diferenciando esta identidad del conocimiento académico o técnico sobre asuntos de género. “No somos esta élite de generólogas y de feministas que... siempre hacían el lobby” (Flores, en Hill 2012: 49).

De esta construcción identitaria quedaba claro que significaba un modo de diferenciarse de feministas de clase media que, en el contexto neoliberal, habían acumulado mayores privilegios y apostado por un modo de hacer política sobre la base de la eficiencia técnica y relaciones verticales con otras mujeres. El proceso de la AMPDE era expresión de los disensos que desde fines de los 90 evidenciaban las exclusiones sobre las que se formó el movimiento de mujeres. La identidad “mujeres de sectores populares” irrumpía como resistencia a frente a los dispositivos de poder neoliberales que atravesaban el movimiento de mujeres y al mismo tiempo como una táctica que ampliaba el horizonte de sentido de las luchas del movimiento.

Integrantes del Movimiento de Mujeres de Sectores Populares Luna Creciente ya han manifestado esto al plantear que el carácter popular de su organización está dado por la articulación de género, clase, etnia y diversidad sexual en sus luchas (entrevistas 2007). En varios espacios de encuentro y formación de la Asamblea de Mujeres Populares y Diversas del Ecuador, lo popular también ha sido articulado a la resistencia

histórica de los pueblos indígenas, negros y de sectores urbanos con trayectorias de desarraigo provocadas por la migración (Taller de memoria AMPDE, 2008).

Por ahora nos queda por observar con mayor detenimiento la interioridad de la AMPDE para comprender de qué modo las relaciones entre las diversas y desiguales mujeres al interior de la organización definen en su carácter. Las dinámicas internas de una organización son una ventana privilegiada para observar la subjetividad de un movimiento social, entendida como experiencia del sí mismo –no únicamente su dimensión emocional (Flórez 2010: 20). La gestión de estas dinámicas –específicamente las que tienen que ver con las asimetrías de poder en la cotidianidad de un movimiento– es para Flórez la clave de la dinámica de la acción colectiva, un movimiento en “la ambivalencia entre el poder que limita al sujeto y la agencia que el mismo sujeto debe desplegar para mover esos límites” (Ibíd.: 20). Considero que esto es importante para comprender hasta qué punto la ética y el compromiso militante permiten enfrentar o subvertir el orden de las cosas en el que las dinámicas y conocimientos-experiencias de mujeres de sectores populares quedaban signadas como carentes de estrategia y eficiencia política.

## **CAPÍTULO 4**

### **La Asamblea de Mujeres Populares y Diversas del Ecuador**

Este capítulo tiene como objetivo analizar el proceso de organización de la Asamblea de Mujeres Populares y Diversas del Ecuador como una posibilidad de comprender mejor cómo en el movimiento de mujeres se articula el campo de lo popular. En el capítulo anterior mostré la emergencia de organizaciones de mujeres de sectores populares como una respuesta crítica a un ordenamiento neoliberal en el movimiento de mujeres. Esto ocurrió en un contexto nacional de movilizaciones en el que el movimiento indígena colocaba en el escenario público un debate sobre el contenido colonial de la política y establecía una ruptura en la relación ventrilocua que la izquierda militante, intelectuales progresistas y otros sectores sociales y políticos habían establecido con ellos – indígenas- y otros sujetos a quienes se les había negado la cualidad plena de ciudadanía. Es en este contexto que las mujeres de sectores populares dotaron a sus procesos de organización de sentidos de resistencia y transformación desde donde desafiaron las relaciones de poder-conocimiento que en el movimiento de mujeres desconocían su carácter político. Y es a través de este desafío que la AMPDE se organiza.

A partir de esto, la afirmación la identidad mujeres de sectores populares significó una afirmación de la diferencia que cuestionaba en el movimiento de mujeres la reproducción de desigualdades estructurales de clase y etnia. Al mismo tiempo, reivindicaban otros modos de hacer política, en correspondencia con procesos organizativos de base, localizados; modos que trascendían la división privado-público. Los procesos de varias organizaciones dejan ver un papel importante de mujeres de clase media, quienes al plantear una ética y compromiso militantes con las mujeres de sectores populares diferencian su posición de las “generólogas” que homogenizaron el movimiento de mujeres en los 90.

La AMPDE comparte todas estas características y muestra un elemento particular: la presencia de mujeres de clase media que han asumido la identidad “mujeres de sectores populares”. De esto nacen varias interrogantes respecto a la articulación de lo popular en el movimiento de mujeres. ¿Qué implica esto para el movimiento de mujeres cuando la relación clases medias - sectores populares ha sido un factor fundamental de su dinamismo político?

Si partimos de la idea de que los movimientos sociales no están exentos de reproducir las relaciones de poder de su contexto (Flórez 2010), ¿qué tácticas desarrolla

la AMPDE para desestabilizar las relaciones de desigualdad que se producen a partir de las diferencias de clase, etnia, identidad sexual, edad?, más precisamente, ¿qué tácticas desarrollan las organizaciones de mujeres de sectores populares para desestabilizar las jerarquías políticas que se produjeron en el movimiento a través de una política neoliberal?, ¿hasta qué punto la ética y compromiso militantes dinamizan los espacios organizativos al facilitar el desarrollo de tales tácticas?. Si tengo que hacer una precisión para iniciar este recorrido, es que parto de concepción de sujeto político definido por Flórez (Ibíd.) como sujeto del deseo; un sujeto sin contenido esencial, inestable.

Para analizar más a fondo estas interrogantes en el proceso de la AMPDE, observaré primero en dónde se ubican las organizaciones de mujeres de sectores populares –inclusive por fuera de la AMPDE- y qué hacen. Esto es necesaria no porque pretenda analizar la AMPDE como representación de la totalidad de organizaciones de este sector, sino porque estas constituyen una parte fundamental del contexto desde donde crea su accionar político, su lugar de enunciación y el horizonte de sentido que hace posible comprender su proceso. De este modo se podrá elaborar comprensiones mayores sobre lo popular en el movimiento de mujeres.

#### **4.1. Las organizaciones de mujeres de sectores populares**

En el capítulo anterior quedó planteado que lo popular no puede ser identificado como una sustancia o contenido fijo, puesto que es una construcción social históricamente situada. Respecto a la identidad colectiva de los movimientos sociales de mujeres en el Ecuador, se presenta como adjetivo y lugar; como un modo de hacer política vinculado estrechamente a lo local. El nombre “mujeres de sectores populares” fue planteado en oposición a la relación de representación que establecieron mujeres de clase media respecto a mujeres de sectores populares, a razón de su mayor experticia en el conocimiento-poder que demandaba el trabajo en el estado y la cooperación internacional. Para que más adelante se pueda comprender un proceso colectivo concreto, atendiendo a cómo se definen, organizan y representan diferencias en su interior y qué lugares ocupan las diferencias que se articulación, es necesario mirar qué hacen estas organizaciones.

Algo que hay que tomar en cuenta es que varios de estos procesos se han desarrollado con el apoyo de ONGs e instituciones del estado que han trabajado con enfoque de género (Lind 2001). Es decir, en relación con actoras del movimiento de

mujeres respecto a quienes se construyeron tácticas de desujeción. Sin embargo, también es importante considerar que según organizaciones de mujeres de sectores populares, los acompañamientos de ONGs han consistido en apoyos cada vez más esporádicos y puntuales. Consideran además que estos apoyos son resultado de sus propias gestiones. Por esto, en el sentido que ellas construyen de las distintas actividades que realizan con ONGs y varios otros actores, sus procesos son concebidos como resultado de su propia capacidad de organización.

Las organizaciones de mujeres de sectores populares han desarrollado identidades contingentes, que se articulan según el contexto y los actores frente a quienes desarrollen su acción. Pueden identificarse por desplegar:

- Reivindicaciones étnicas y culturales, planteadas por organizaciones como la Coordinadora Nacional de Mujeres Negras del Ecuador, otras mujeres negras, la CONMIE y otras mujeres indígenas que, siendo parte de organizaciones mixtas, han construido espacios de autonomía y alianzas con organizaciones femeninas a nivel nacional y regional.
- Estrategias para la defensa y conservación de la naturaleza, a través de la resistencia a actividades extractivistas y depredadoras, y la generación de alternativas locales de desarrollo.
- Economías y finanzas solidarias que se perfilan a través de cajas de ahorro y crédito, modos de producción y sistemas de comercio alternativos.
- Iniciativas relacionadas con el bienestar comunitario y cuidado de la vida, especialmente de niños y mujeres. Entre estas encontramos comités barriales y comunitarios para la gestión de servicios básicos e infraestructura, “madres cuidadoras” del Instituto Nacional de la Niñez y la Familia (INNFA) y los Comités de Usuarias de la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia (CUS), entre otros.
- Reivindican la identidad lésbica y transexuales, que en relación con sus identidades de clase y etnia.
- Veedurías y estrategias de control social del estado, a nivel local, regional y nacional.

En el país existen aproximadamente 700 organizaciones de mujeres, feministas y organizaciones mixtas que trabajan con un enfoque de género, la mayor parte se

autodefinen como mujeres de sectores populares<sup>15</sup>. La educación o capacitación es, entre estos distintos tipos de organización, una de las principales demandas, en respuesta al poco acceso que han tenido a la educación formal y las pocas oportunidades de profesionalizarse (Hill, et. al. 2013 s/p)<sup>16</sup>.

La mayor concentración de organizaciones de mujeres de sectores populares está en Pichincha, seguida de Guayas, provincias cuyas capitales son dos de las principales ciudades del país, en cuanto a presencia de instituciones de gobierno y movimiento económico se refiere. La provincia de Esmeraldas cuenta con un importante número de organizaciones que probablemente responden a los importantes conflictos socioambientales derivados de la explotación maderera y reivindicaciones del pueblo afroecuatoriano. Provincias como Imbabura, Azuay, Carchi, Cotopaxi, Tungurahua y Loja constituyen junto a Pichincha un eje en la Sierra que permite identificarla como la región con mayor concentración de organizaciones de mujeres de sectores populares, posiblemente por una presencia histórica de organizaciones indígenas y campesinas<sup>17</sup>.

En general, las organizaciones actúan apuntando a varios intereses u objetivos a la vez. Estos se complementan y sus integrantes los organizan de modo contingente, según el contexto y los actores frente a quienes despliegan su acción. Con todo, sus principales actividades son a favor de la equidad de género –mayoritario en la Sierra-, la ampliación y garantía de los derechos de las mujeres y la creación de fuentes de ingresos. Un segundo grupo de intereses de estas organizaciones tiene que ver con la incidencia política –mayoritaria en la Costa- y cultural, pensadas como estrategias para transformar el reconocimiento social de sus derechos e identidades. Las actividades orientadas a enfrentar problemáticas socioambientales, que comúnmente está relacionado con la defensa de sus modos de vida, también son de las más importantes.

---

<sup>15</sup> Este dato fue construido a partir de la información que proveyeron organizaciones de mujeres que participaron del diagnóstico sobre necesidades de formación de organizaciones de mujeres de sectores populares, desarrollado por el Instituto de Estudios Ecuatorianos en el 2012. En el proceso participaron 220 organizaciones de mujeres, con organizaciones autónomas o pertenecientes a organizaciones mixtas –especialmente indígenas y campesinas. Por necesidades del proyecto para el cual se realizó este diagnóstico, se incluyó a algunas ONGs que han acompañado a los procesos de mujeres de sectores populares. Los datos que tomo del mencionado diagnóstico son útiles para analizar la composición de las organizaciones de mujeres de sectores populares en la Sierra y Costa del Ecuador. El diagnóstico también levantó información de la Amazonía, pero de manera menos exhaustiva. Por la poca representatividad de la información en esta región, no la tomaré en cuenta en esta sección.

<sup>17</sup> Ver Anexo 1, Mapa de distribución y concentración de territorial de organizaciones de mujeres y organizaciones con trabajo en género. Instituto de Estudios Ecuatorianos, 2012.



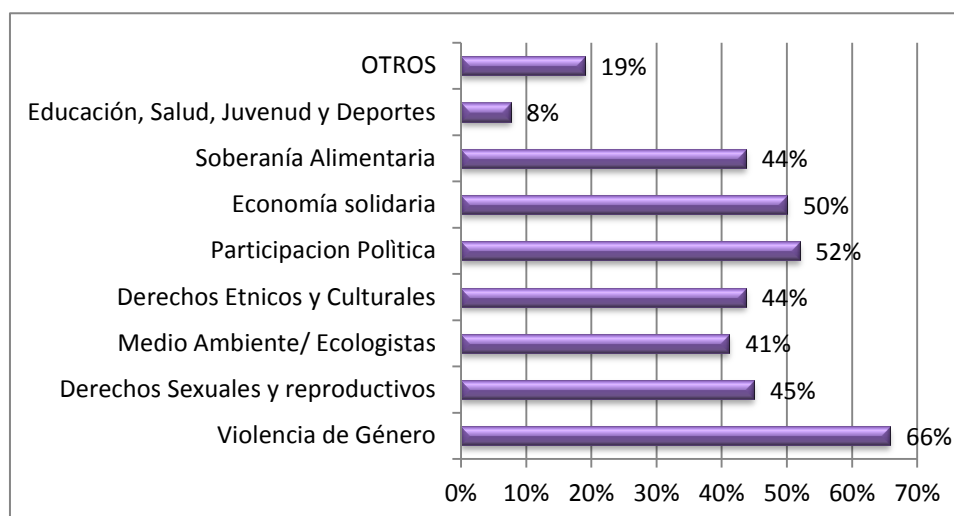
El trabajo por la erradicación de la violencia de género es común en todas las organizaciones y es concebido como una de las principales condiciones de la equidad de género. Para ello desarrollan actividades orientadas al conocimiento de los derechos que formalmente garantizan a las mujeres una vida libre de violencia. Al mismo tiempo dirigen esfuerzos para comprender los modos particulares en que esta violencia se ejerce según su entorno social y cultural, y desarrollar estrategias más a su alcance para enfrentarla. Así, por ejemplo, las iniciativas económicas también suelen pensarse como un modo de garantizar autonomía a las mujeres y así disminuir su vulnerabilidad frente a la violencia de género.

Son de especial importancia las estrategias que mujeres indígenas de Cotacachi – Sumak Kawsaypa Katikamachic o Reglamento de Buena Convivencia-, Cotopaxi, Chimborazo y Sucumbíos –Ley(es) del Buen Trato- han desarrollado para incluir reglamentos en la administración de la Justicia Comunitaria que les permitan garantizar sus derechos a una vida libre de violencia (Vid. Carrión 2010; Carrión y Aguinaga 2012). En los tres casos, las organizaciones de mujeres indígenas han trabajado al interior de sus organizaciones mixtas, con la perspectiva de que la justicia propia sea un modo de construir y actualizar los sentidos de comunidad que integran a sus miembros e innovar de este modo sus culturas.

La participación política que es la segunda área de trabajo, hace referencia a la trayectoria que siguen en la formación de sus liderazgos políticos. Incluye la participación en la toma de decisiones en sus comunidades o barrios y la formación y sostenimiento de sus organizaciones de mujeres, el vínculo con otras organizaciones sociales a nivel nacional, su presencia activa en espacios institucionalizados de participación social a nivel municipal y su posicionamiento en puestos de representación política en el estado.

La economía social y solidaria, que incide en el 50% de organizaciones, incluye producción y comercialización asociativa, cajas de ahorro y crédito solidario, sistemas de intercambio y comercio solidario, entre otras. En general, son procesos económicos que cuya finalidad no es la acumulación sino la reproducción de la vida humana y de la naturaleza.

**Gráfico 1**  
**Principales Áreas de Trabajo de las Organizaciones**



Fuente y elaboración: Instituto de Estudios Ecuatorianos IEE 2012

Lo que muestran los intereses y las áreas de trabajo es que las organizaciones de mujeres de sectores populares desarrollan actividades similares, muchas veces vinculadas con las agendas de la cooperación y el estado. Pero, al situarse en contextos específicos, sus procesos adquieren identidades diferentes. Las identidades de estas organizaciones son, como decíamos antes, contingentes. Las organizaciones articulan las narraciones de sí, dan sentido a sus experiencias colectivas, se posicionan de acuerdo al contexto y los actores a quienes se enfrentan. La articulación de la diferencia de género, clase, etnia, opción sexual se construye en referencia al conocimiento-experiencia que ancla los deseos (utópicos) de transformación a la vida concreta. De este modo activan una politicidad feminista, cuya potencia transformadora radica en el tránsito permanente de lo personal y lo político, y la articulación contingente y situada de la diferencia.

## **4.2. La Asamblea de Mujeres Populares y Diversas del Ecuador**

En este apartado haré una revisión de algunos puntos de la historia de la AMPDE referentes a la formación de su identidad, los discursos que la articulan y la paulatina construcción de una estructura organizativa. Es un análisis limitado de su historia en el que me remitiré a los aspectos que considero pertinentes para reflexionar sobre cómo lo popular se construye en medio de complejas relaciones entre mujeres desiguales. Por supuesto, reconozco que la AMPDE no es la única ni la más representativa entre las

distintas organizaciones del movimiento que han adoptado esta identidad. La AMPDE tiene una historia particular y mucho de su proceso no puede ser generalizado a otras organizaciones. Sin embargo, reflexionar sobre su proceso es necesario para comprender una parte de la historia del movimiento de mujeres.

La AMPDE se inauguró formalmente el 8 de marzo del 2009, en un contexto postconstituyente, clave para muchas organizaciones sociales porque en el país se estaba construyendo el cuerpo jurídico que, esperaban, hiciera efectivos los derechos de la nueva Constitución. Demandas históricas del movimiento indígena en torno a la tierra, el agua y los derechos colectivos se releían a la luz de nuevas problemáticas como la soberanía alimentaria. Este fue el debate a partir del cual organizaciones de mujeres de varias provincias del país se reunieron en la AMPDE. Demandaban al estado y a los movimientos sociales la inclusión de su presencia y perspectiva política.

Desde el año 2007 varias organizaciones sociales habían desarrollado espacios de encuentro y debate para construir propuestas hacia la Asamblea Nacional Constituyente. Estas acciones se enmarcaban en el inicio de una transición hacia un modelo que ha sido denominado como postneoliberal o neodesarrollista, caracterizado por medidas que apuntan a mejorar las condiciones de vida de sectores empobrecidos, desarrolladas sobre la base de políticas extractivistas. Como otros gobiernos de izquierda de Latinoamérica, el gobierno ecuatoriano desarrollado esta transición a través de un discurso nacionalista y populista que legitima estrategias neocoloniales en relación con comunidades, pueblos y sus territorios, así como respecto a la naturaleza.

En este contexto, la Casa Feminista de Rosa, un espacio social autogestionado por colectivos feministas de Quito, fue escenario de un proceso de diálogo denominado “Mujeres Autoconvocadas”, formado por integrantes de diversas organizaciones sociales y mujeres con trayectorias profesionales y políticas en ONGs y el estado. En él se analizó los logros que el movimiento de mujeres había alcanzado en la Constituyente de 1997 y se planteó desafíos frente al nuevo proceso constituyente. El fortalecimiento de derechos económicos –reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados como productivo y seguridad social universal- y la ampliación de derechos sexuales y derechos reproductivos –familias alternativas y despenalización del aborto- fueron dos de los principales ejes en los que actuaría el movimiento de mujeres. En varias otras provincias se desarrollaban procesos parecidos y las reflexiones de los distintos espacios circulaban a través de redes de trabajo y encuentros, varios de ellos financiados por ONGs o por el estado, bajo la convocatoria del CONAMU.

Una vez instalada la Asamblea Constituyente en Montecristi, fue un espacio de encuentro entre mujeres que se movilizaban desde distintas provincias para plantear sus propuestas y desarrollar estrategias que les permitiera incluirlas en el nuevo mandato constitucional. La Constitución que resultó de este proceso ha sido reconocida como una de las más progresistas de América Latina y el mundo por sus contenidos en derechos sociales y derechos de la naturaleza.

Sin embargo, el cuerpo jurídico y la política pública que se empezó a construir en el periodo postconstituyente disminuía las posibilidades de que tales derechos pudieran ser garantizados por el estado. El escenario político empezó a dividirse entre los movimientos sociales y el gobierno, en una disputa por los sentidos políticos de la nueva institucionalidad del estado, el ejercicio de la ciudadanía, la participación social y el modelo económico.

Diversas esferas públicas fueron activadas por un proceso de movilización constante, especialmente durante el año 2009. El 10 de junio, por ejemplo, 80 delegadas de 29 organizaciones de mujeres de varias provincias del país se autoconvocaron como AMPDE en la ciudad de Machala para analizar problemas sociales y ambientales relacionados con el agua y los modos en que afectaba a mujeres campesinas, usuarias del manglar, pescadoras, trabajadoras de la agricultura industrial y mujeres de las periferias urbanas. De este encuentro y otro que se organizó paralelamente con organizaciones mixtas, incluyendo la CONAIE, nacieron los “Mandamientos del agua”. Entre varias demandas las organizaciones planteaban al estado reconocer el trabajo de las mujeres en la conservación, manejo y cuidado del agua y establecer un Consejo Plurinacional del Agua, con representantes de organizaciones sociales a nivel local, regional y nacional, y que incluya un enfoque de género e intercultural para permitir la participación de las mujeres diversas.

Otros temas respecto a la economía popular y solidaria, y especialmente la soberanía alimentaria fueron motivo de múltiples encuentros, debates y propuestas. El interés por la Ley de Soberanía Alimentaria respondía a que en ella confluían varios problemas relativos a la desigualdad de las mujeres. Entre algunos otros, el acceso y la titularidad de la tierra para las mujeres, su participación en los procesos y estrategias para la distribución y control del agua, el reconocimiento material y simbólico de sus trabajos para garantizar la soberanía alimentaria. En definitiva, sus perspectivas tenían en común el reconocimiento de los distintos tipos de trabajo de las mujeres, a partir de lo cual proponían la creación de mecanismos de redistribución de la riqueza y de

participación efectiva en distintos espacios sociales y políticos. Además, hacían referencia a las posibilidades de levantar una matriz económica diferente a la neoliberal, que colocara como objetivo concreto el cuidado y reproducción de la vida.

Mientras tanto, varias organizaciones sociales veían que el proyecto político impulsado por los movimientos de izquierda tenía que ser disputado con el gobierno de turno. Se decía que bajo el lema de la “revolución ciudadana”, el gobierno estaba vaciando el contenido política de las transformaciones que los movimientos de izquierda habían propuesto. Adicionalmente, varias organizaciones y movimientos sociales, incluyendo el de mujeres, se veían debilitados a partir la entrada al estado de varios de sus dirigentes e integrantes.

Es en este contexto que se forma la AMPDE como un espacio de encuentro y debate político. “Ni una ley más sin nosotras” fue el lema que inauguró este proceso, con la I Asamblea de Mujeres, desarrollada en el salón del ex Senado de la Asamblea Nacional. Este era un lugar simbólico que representaba el deseo de construir estrategias para que las mujeres pudiesen tener voz y voto en este momento político. La constitución de la AMPDE era la manifestación de la voluntad de mujeres de sectores populares de ser parte de las transformaciones que atravesaban el país.

algunas de nosotras nos juntamos para hacer una especie de presión dentro de la Asamblea pero luego empezamos a darnos cuenta de que la Asamblea no cumplía nada y que las leyes que estaban saliendo eran una cosa más desde arriba [...Éramos] organizaciones que veníamos más de formaciones locales, el movimiento de El Oro, mujeres de Cotacachi, compañeras de la Casa Rosa, compañeras de la Red de Mujeres del Chimborazo, el CODEMUF de Loja [...] entre todas decidimos hacer una convocatoria por el 8 de Marzo y presentar una especie de planteamientos desde las mujeres al gobierno, desde el tema de la soberanía alimentaria y desde el planteamiento más económico [...N]o nos planteamos nunca formar “el” movimiento de mujeres, sino una asamblea, o sea una especie de encuentro entre organizaciones [...] para activar políticamente. (M.A., entrevista D.H., 2009)

La invitación para este primer encuentro decía:

Somos mujeres del campo y la ciudad; de los páramos, de los bosques, de la selva y del manglar; de la costa, de la sierra y amazonía; indias, negras, mestizas, cholas; campesinas, obreras, maestras, concheras, pescadoras, artesanas y muchas más [...] Mujeres que hemos estado invisibilizadas y marginadas de las decisiones que tienen que ver con nuestra vida misma. [...] Nuestro afán es disputar el sentido y el poder de la Asamblea Legislativa encargada de elaborar leyes que materialicen los avances constitucionales. En nuestra Asamblea conoceremos, debatiremos y tomaremos resoluciones sobre las leyes de minería y soberanía alimentaria. Sabemos que una ley por sí sola no

cambia la vida, pero también sabemos que son herramientas que nos sirven en la pelea para demandar y exigir nuestros derechos. Esta es una convocatoria a la unidad de las mujeres pobres de nuestro país, a las mujeres que día a día estamos defendiendo la vida (Convocatoria pública a la I AMPDE, febrero de 2009).

La AMPDE abre asambleas itinerantes de mujeres con el objetivo de debatir los temas de una coyuntura política marcada por las disputas de sentido entre los distintos partidos que formaban la Asamblea Nacional, y especialmente entre el partido de gobierno, Alianza País, y varias organizaciones sociales. Pero además de los contenidos de las leyes y los debates en torno a estas, lo que planteaban estas organizaciones de mujeres al levantar un proceso organizativo era una interpelación al contenido patriarcal, clasista y colonial de la ciudadanía y la política, y que en un ordenamiento neoliberal las dejaba fuera. Esto ha sido sugerido al mostrar que las organizaciones de mujeres que se autodenominan como de sectores populares han insistido en la necesaria construcción de una voz propia, diferenciada, pero en diálogo con los otros movimientos sociales de izquierda; autorepresentada; con una voluntad de construir una politicidad feminista distinta a la que había predominado en el movimiento de mujeres del país.

¿Cómo desarrollaría la AMPDE esta voluntad política?, ¿cómo la construcción de su identidad política se relacionaría con esa voluntad de una política feminista y popular? Indagaré en la memoria de sus integrantes para comprender las conexiones entre sus historias personales y colectivas con el momento de emergencia de este proceso. Luego observaré la organización de esta memoria en una ideología política común, el feminismo popular, que la AMPDE ha construido y finalmente, la relación que esto tiene con su estructura organizativa.

### **4.3. La identidad popular desde la memoria de las mujeres**

Pocos meses antes de la primera Asamblea de Mujeres Populares y Diversas del Ecuador, varias mujeres reunidas con el pretexto de una escuela de educación popular entre mujeres de organizaciones sociales de la Sierra desarrollaron un taller para construir las historias de sus procesos de organización a partir de su propia memoria. Después de reflexionar sobre cómo estaba construida la historia convencional de las mujeres, qué aspectos, procesos y personajes se resaltaba, y qué otros quedaban marcado por el silencio, las participantes se agruparon por regiones para desarrollar el objetivo que se habían propuesto.

Prontamente las mujeres de Cotacachi decidieron unirse con las de Cayambe, planteando que tenían historias muy comunes, por la cercanía geográfica, múltiples intercambios comerciales y antiguas relaciones políticas de las principales organizaciones de sus territorios. Las mujeres del Valle de El Chota, Salinas y La Concepción se reunieron diciendo que aunque sus territorios estaban atravesados de divisiones políticas, sus poblaciones estaban unidas por una historia común y una cultura actual compartida. Varias mujeres urbanas de Quito y dos de Machala estaban dispersas en el espacio, como queriendo unirse a las mujeres que ya se agrupado o conversando en grupos de amigas. Al momento de compartir las historias locales estas mujeres urbanas, confesaron sus dificultades: “es que muchas de nuestras historias son de desarraigo, nos obligaron a olvidar de dónde venimos nosotras o de dónde vinieron nuestros padres [...] nos obligaron a olvidarnos del kichwa, a tener vergüenza de nuestras costumbres”, dijo una de ellas como explicación de la resistencia inicial que tuvieron para trabajar juntas.

Las mujeres de Cotacachi-Cayambe narraron su historia intercalando experiencias personales de discriminación que ellas, sus padres y abuelos habían vivido, y experiencias colectivas de marginación que habían enfrentado como mujeres indígenas. Las mujeres de El Chota hicieron lo mismo. “Yo recuerdo...”, “Mi abuelo sabía contar...”, “Cuando era niña veía...”. Los procesos colectivos también fueron narrados como experiencias personales, a pesar de que la juventud de muchas de ellas evidenciaba que no estuvieron en muchos de los momentos que narraban. Las mujeres de Cayambe y Cotacachi dijeron:

Hemos recogido la historia más o menos desde 1930, en donde empieza la lucha de los pueblos indígenas de nuestro sector y se funda la FEI, la Federación Ecuatoriana de Indios, en 1930. A partir esa fecha hemos tenido un proceso de lucha muy sentido, muy fuerte, más o menos hasta el 2000 [...].

La historia de nosotros también es bastante fuerte. Estamos ya en lo último, en lo último, en lo último, en donde está la cordillera y más allá ya no hay nada, solo monte, monte, monte...huidos de la hacienda. Lo que cuenta mi papá, siendo pequeño fue muy triste, porque dice que los hacendados tenían todo y decía que cosechaban papas y decía mi papá que en la choza donde vivían no tenían nada, nada que comer. Por eso fueron a chugchir, a recoger las papas que sobran después de la cosecha y ahí le coge, ni siquiera es que era el dueño de la tierra, sino el que manda, el capataz, entonces le coge a mi papá y le pega hasta reventarle todito, todito, todito, todito... o sea desde el caballo es que tenía unos aciales así tan grandes y amarrados unas bolas, y desde el caballo, dice, “me hizo revolcaba así bastaaante fuerte [...] Y mi abuelo que ha sido un poco rebelde, dice que se rebela contra el capataz. [...] Entonces por eso es que ver

que tanto maltrataron se fueron, por eso mi comunidad está en lo último, porque fueron a esconderse de los hacendados. De ahí ya no les pudieron traer. Somos de ahí, huidos. “Tan malos eran”, mi papá cuenta... (L.O., taller Memoria, grupo Cotacachi-Cayambe, 2008)

Las mujeres del valle de El Chota y Mira contaron:

Nuestra historia comienza cuando nos trajeron en barcos desde Africa... había veces, que a los dos o tres meses salían, pero para hacer la limpieza y botar los muertos al mar... así algunos de la angustia ellos mismos se lanzaban y no soportaban más porque realmente esto sí era horrible. [...] las haciendas estaban ubicadas en La Concepción, que es Cuajara y el Valle de El Chota. La líder de las mujeres en ese tiempo se llamaba Angelina Chota [...] los esclavos se escapaban de las haciendas y formaban unos pequeños palenques, ahí donde ellos aprovechaban el tiempo que tenían y formaban música al ritmo de las cadenas.

[...] antes pocos iban a los hospitales porque la economía era bien baja, todo arreglaban ahí con las parteras. Si alguien iba enfermo, usaban las yerbas, cualquier solución para poder salvar, pero así mismo había enfermedades que ni ellas conocían y ahí es cuando fallaban y se morían. Por ejemplo, había el tallo del zapallo, que qué íbamos a saber nosotras que era para que endure, por ejemplo si estoy embarazada y quiero abortar, el agua de eso es para que le endure y le acomode la barriga. Y la ruda era para abortar.

De ambos lugares también contaron que los liderazgos femeninos se construyeron al cuestionar la exclusión de las mujeres de la educación y de los cargos de representación de las organizaciones mixtas (construidas con su participación).

La formación y sostenimiento de organizaciones comunitarias fue uno de sus hilos conductores. Otro fue el de los procesos de movilización por la “recuperación” de la tierra y la educación, y la defensa de su autonomía a través del acceso y control del agua. Ambos procesos fueron ubicados desde los años 30 y los puntos de mayor fortaleza organizativa fueron explicados como respuestas a la violencia que vivieron en las haciendas, primero, y más recientemente en instituciones del estado.

En el caso de Quito y Machala, mujeres urbanas, destacaron los procesos desarrollados por mujeres organizadas a nivel de barrios populares, en una amplia gama de actividades, especialmente en la gestión de infraestructura y servicios, las movilizaciones contra la subida de precios y la construcción de alternativas económicas y financieras. También hicieron referencia a figuras femeninas destacadas en la historia política nacional. Aunque planteaban problemáticas en torno a la clase y, en menor medida, a la sexualidad, reflexiones sobre aspectos relacionados con la etnia y cultura eran ausentes.



En los tres grupos, las organizaciones de mujeres fueron narradas como estrategias para enfrentar la falta de reconocimiento de su trabajo en la construcción de procesos de transformación y organización social, y ese fue el lugar desde donde plantearon sus demandas y reivindicaron su lugar. Por esto, la amplitud de expresiones y trayectorias organizativas se manifestó inicialmente como una declaratoria de existencia:

Somos mujeres del campo y la ciudad; de los páramos, de los bosques, de la selva y del manglar; de la costa, de la sierra y amazonía; indias, negras, mestizas, cholitas; campesinas, obreras, maestras, concheras, pescadoras, artesanas y muchas más... mujeres diversas, unidas por las ganas de vivir, de vivir bien, de vivir con dignidad. Mujeres que hemos estado invisibilizadas y marginadas de las decisiones que tienen que ver con nuestra vida misma (Invitación I Asamblea de Mujeres Populares y Diversas del Ecuador, 8 de marzo de 2009).

La articulación tenía en común el lugar de lo invisibilizado y marginado, pero también el deseo por la dignidad, una condición pensada como posibilidad de decidir sobre sí mismas, de perfilar su propio destino. En medio de los esfuerzos compartidos por formar una identidad que diera cabida a todas, la construcción la memoria organizativa de quienes integraron la AMPDE y su reactualización, es decir el diálogo entre los distintos procesos a lo largo de la experiencia colectiva de la AMPDE, evidenciaba algunas tensiones relacionadas con la propia producción de los sentidos comunes. Una de estas es la representación de lo popular, un proceso que ha implicado negociaciones permanentes entre distintos modos de concebirlo.

Para hacer posible el encuentro con esta identidad popular, mujeres de clase media recurrieron a una memoria que activó historias familiares de migración y desarraigo, de trabajos precarios que sus padres, abuelos o ellas mismas han tenido que desarrollar. Pero las historias de carestía y pobreza que podían encontrar en su memoria, difícilmente podían negar las condiciones materiales y simbólicas que las ubica en un sector de clase media. Sin embargo, asumieron la identidad popular a partir de concepciones que desdibujaban los límites que convencionalmente definen la clase.

[...] para mí la condición de clase está muy cruzada con el tipo de trabajo que haces, con que tienes un salario, un ingreso, con dónde estás tú incluida dentro de las relaciones económicas del mercado laboral y, en el caso de las mujeres, con la relación económica con el marido. [...] Las mujeres somos generadoras en la casa de plusvalía indirecta, [...] ¿entonces una ama de casa podría ser considerada trabajadora? Claro que se define como trabajadora,

pues. Hemos reconocido sus categorías de trabajadora y si queremos decir si las mujeres son de lo popular, claro que sí, sobre todo desde mi punto de vista aquellas que tienen doble y triple ocupación [...].

Pero también el sentido de lo popular, desde mi punto de vista, está vinculado a la opción que tú haces de si eres o no trabajadora invisible, la opción si estás en la economía del cuidado netamente o no, o si estás en el mercado de la alternativa remunerada, o la opción si estás en la economía del cuidado, o si estás en el mercado de lo alternativo remunerado, o la opción de si vos en ese proceso de clase, aún siendo de un origen de clase media, de la pequeña burguesía, haces un intento por desestructurar tu condición de clase. En el caso nuestro, nosotras decidimos ser mujeres proletarias por opción y condición [...L]o popular para mí tiene que ver con una condición de clase, en donde sí define el hecho de venir de una clase social pobre, pero también define el hecho de hacer opciones políticas de proletarización, define el hecho de identificar los procesos de organización, define el acto de las rupturas ideológicas y materiales (A.B., entrevista 2013).

En esta concepción de clase, las mujeres, por el hecho de estar vinculadas a los trabajos reproductivos y de cuidado, y como consecuencia tener con el trabajo asalariado un vínculo relativamente precario –o nulo en algunos casos–, encuentran un lugar común con la clase trabajadora, entendida también como proletariado o como sectores populares; conceptos usados indistintamente. Queda claro que este modo de concebir la clase se produce desde el deseo de encontrar un nexo. Más adelante (en el punto 2.2) veremos que para la AMPDE ha dado lugar a una importante estrategia de cohesión desde la que han elaborado una ideología común.

A diferencia de concepciones como ésta, de mujeres de clase media, mujeres de sectores más empobrecidos, suelen poner énfasis en el lugar de la resistencia, más que en el de la exclusión, marginación u opresión. Cito solo como ejemplo, la intervención de una de las integrantes de la AMPDE en referencia al discurso de una de sus compañeras, una mujer de clase media que asumía para sí la identidad popular al identificarse con las otras como mujer explotada y marginada:

No lamentemos que somos pobrecitas, pobrecitas... porque somos ricas. Quiero decir que 500 años hemos soportando hablando de la economía, porque vamos luchando, buscando proyectos productivos, cajas de ahorro. Es importante que las compañeras jóvenes vayan impulsando la producción, hemos demostrado que somos capaces como mujeres, porque siempre hemos estado sosteniendo la economía. Hemos buscado proyectos con otras organizaciones, el gobierno no nos ha dado crédito ni atención, las cajas de ahorro y crédito las hemos impulsado desde nuestros bolsillos (V.V., entrevista 2013).

Este modo de afirmar la identidad popular a través de la reactualización de la memoria de resistencia se ha desarrollado como una táctica –conjunto de acciones dirigidas hacia el interior de la organización- a través de la cual procuran construir en el espacio colectivo cierta horizontalidad política. Deshacen de algún modo las jerarquías en las que estaban organizadas sus diferencias en el mundo exterior al establecer otros criterios desde donde lo que importa es la historia de lucha. Evidentemente, esto implica que la diferencia y la desigualdad en el espacio de la AMPDE sí son percibidas, de ahí que se desarrolle este tipo de tácticas.

En discursos de algunas mujeres de clase media, a pesar del deseo por construir relaciones horizontales, opera una la racionalidad propia de la articulación equivalencial que plantea Laclau (2009). Esto es, una operación ideológica que parte de la equiparación de la diferencia y que supone el problema de cómo se establece la representación legítima de la cadena equivalencial. Las observaciones de Bourdieu (1990) respecto a la formación de las clases sociales son pertinentes. Dice que las concepciones marxistas de clase suelen no abordar el problema político de que esta es una construcción hecha a través de un trabajo concreto en el que sus miembros crean la clase al organizarla como espacio social conforme a una definición teórica “objetiva”. Este es un “*trabajo de representación* (en todos los sentidos del término) que [agentes de representación, intelectuales, teóricos] efectúan sin cesar para imponer su propia visión del mundo o la visión de su propia posición en ese mundo, de su identidad social (Bourdieu 1990: 287). Este autor reconoce la capacidad creadora de este trabajo de producción simbólica que permite la existencia de un grupo a partir de la construcción de un sentido común. Pero advierte también el riesgo de abusos de lenguaje, incluso de poder, que pueden producirse en los procesos de creación de un grupo social.

Por esto, replanteo las interrogantes de Brah (2004) colocadas en el anterior capítulo. Lo que importa es quién define la diferencia y la igualdad, cómo se representan los distintos sectores de las mujeres en los discursos de la diferencia y en la identidad común, y cómo la identidad común da cabida a la diferencia de manera horizontal. Por ahora se puede decir que el deseo de horizontalidad que impulsó el encuentro de distintos sectores de mujeres en la AMPDE, encuentra límites en la racionalidad discursiva –creadora de realidad- que no ha logrado todavía poner en diálogo las múltiples diferencias de quienes la constituyen y las relaciones de poder que la atraviesan.

#### **4.4. El feminismo popular**

Quedó planteado que la identidad popular de la AMPDE es una construcción movida por el deseo de encontrar una identidad común y que está vinculada a la formación de una ideología compartida tanto como a la formación de la propia organización. De esto resalto la idea implícita de que los procesos políticos de organización y de representación de las ideas que se construyen sobre el mundo social son inseparables. En estos se pone en juego negociaciones o luchas simbólicas entre distintos puntos de vista o sentidos sobre lo popular y lo que implica para un proceso organizativo denominado de esta manera. A través de la asignación de lugares y roles, organizados en función de objetivos definidos como comunes, la propia organización toma forma.

Como dice Bourdieu, la ideología está íntimamente relacionada con la materialidad que estructura las probabilidades de percepción de los actores y con la que producen a partir de sus sistemas de representación del mundo. A la vez está relacionada con la subjetividad que los actores han formado en los espacios sociales por los que han transitado y las luchas simbólicas que ahí se han desarrollado (Bourdieu 1990: 287-289). Por esto, interesa entender al feminismo popular como una ideología más que como un cuerpo teórico acabado y estable, esto es, como la enunciación de una postura política, de una comprensión del mundo que es producto de luchas simbólicas y que está vinculada a los modos de organización que se producen paralelamente.

Procesos de organización previos a la AMPDE, como Luna Creciente, la CONAMUNE y alianzas de mujeres indígenas a nivel nacional, así como varios procesos locales han definido el sentido de sus organizaciones como una posibilidad de desarrollar luchas que articulen los ejes de género, clase y etnia. Un estrecho vínculo con los procesos previos de organización por los que integrantes de la AMPDE han pasado o con los cuales han tenido alguna relación<sup>18</sup>, forman parte del feminismo popular a través de la subjetividad de sus integrantes y la cultura política que en estas trayectorias formaron. Además, este feminismo se alimenta de corrientes de pensamiento como el feminismo comunitario, construido en Bolivia por Mujeres Creando, el feminismo marxista y los feminismos de frontera.

---

<sup>18</sup> Organizaciones partidistas de izquierda, comunidades eclesiales de base, organizaciones indígenas y campesinas, Comités de Usuarias de la Ley de Maternidad Gratuita y atención a la infancia, grupos ecologistas, colectivos juveniles, entre otras.

Desde esta complejidad, se plantea una concepción de la realidad de las mujeres a partir de distintos modos de articular el patriarcado y el capitalismo, como sistemas de explotación, apropiación del cuerpo y la naturaleza, y colonización del pensamiento y de los mundos de vida de las mujeres en su diversidad. Pero, por la diversidad de lugares desde donde se ha construido este feminismo popular, propongo que debe ser entendido como una posición multilocal de sujeto. Intentaré por esto recoger las ideas planteadas por integrantes de la AMPDE respecto a la visión de mundo con la que entienden y explican el problema de la articulación de ejes de opresión, marginación y explotación de las mujeres.

Una de las características de este feminismo es su atención a la relación de las mujeres con la naturaleza. Aquí encontramos algunas tensiones. Por un lado, mujeres indígenas de la Sierra y Amazonía han posicionado la relación con la naturaleza como eje en la construcción de otro mundo. De acuerdo a varias de ellas, la naturaleza es una matriz nutricia, pero también una fuente de conocimiento. Esto lo plantean a partir de prácticas en las que desarrollan usos medicinales y espirituales de las plantas y una relación de comunicación y reciprocidad con la naturaleza para regular la vida social y biológica. La “crianza del agua” es una de las nociones comunes que dan cuenta de esta relación. En comunidades indígenas esta es una relación que la establecen las mujeres al cuidar y hacer crecer el agua para que esta cuide y satisfaga las necesidades humanas. Desde varios trabajos manuales e intelectuales, de producción material y simbólica, la naturaleza aparece como una construcción que se convierte en lugar de enunciación política. Varias experiencias de organización que integran la AMPDE dan cuenta de esto a través de luchas ambientales en las que su participación como mujeres ha sido mayoritaria y a veces única, por considerarse más estratégico<sup>19</sup>.

Mujeres de sectores urbanos han puesto atención más bien a la compleja identificación de las mujeres con la naturaleza, como sujetos de equivalente explotación e inferioridad, lo que configura una relación de contradicción que solo podría ser transformada a través de un cambio de la economía y la cultura (Vid. Aguinaga 2010; 2012: 10-11). Del diálogo entre una y otra visión, del feminismo popular emerge la necesidad implícita de reconocer a la naturaleza en plural –naturalezas- como

---

<sup>19</sup> Mujeres de Intag y Manduriacus, por ejemplo, han desarrollado movilizaciones y estrategias para emboscar y desarmar a grupos paramilitares pagados por empresas mineras. Según plantean, el ser mujeres implica menos riesgo de enfrentamientos violentos.

construcciones históricas, vinculadas a la sociedad en una relación de interdependencia y retroalimentación (Carrión 2013: 69).

Otro ejemplo está en los distintos modos de concebir lo popular, que puestos en diálogo, en relación dialéctica, afirman lo popular como lugar de otros conocimientos-poderes y plantean el deseo de reparación frente a una histórica exclusión política de mujeres empobrecidas y precarizadas, una demanda que poco ha podido ser atendida por las instituciones del estado y la comunidad política nacional. Establecen de este modo una suerte de giro decolonial frente a la matriz neoliberal que atravesaba el movimiento de mujeres.

#### **4.5. La estructura de organización**

En oposición a los mecanismos de invisibilización y marginación que mujeres de la AMPDE cuestionaban en el movimiento de mujeres y en la esfera pública en general, desarrollaron algunas pautas para establecer una lógica opuesta. La primera se fundamenta en estrategias de la pedagogía crítica para desarrollar asambleas y varios otros espacios de encuentro de modo que permitan a las mujeres dar cuenta de sus experiencias y conocimientos de la realidad. Esto ha significado poner atención a la relación entre las distintas mujeres, por lo que las metodologías se han pensado como herramientas para que ellas, desde sus diferentes condiciones, planteen su posición frente a los temas que se abordan. La segunda plantea un modo itinerante de desarrollar las asambleas, para permitir a las distintas organizaciones reunidas en la AMPD conocerse mutuamente e intercambiar experiencias y conocimientos sobre sus trayectorias políticas. Esta además ha sido pensada como una estrategia de descentralización del poder. La tercera consiste en el desarrollo de procesos de formación política propios, también fundamentados en la pedagogía crítica, como estrategia para consolidar un pensamiento crítico colectivo y fortalecer las relaciones entre las participantes de distintas provincias.

Todas estas, al orientarse por nociones de educación popular, han apuestas para reposicionar los conocimientos tanto como el poder de sus integrantes. “No queremos que vengan las □expertas□ a hablarnos de los problemas nuestros”, decía una de las integrantes en la apertura de la primera asamblea de la AMPDE mientras invitaba a representantes de las distintas provincias a pasar frente a las demás para hablar desde su propio conocimiento sobre la situación de las mujeres en sus territorios. Otra integrante,

organizadora de esta primera asamblea explicaba que se habían convocado en el salón del Senado de la Asamblea Nacional para declararse “asambleístas populares, con voz y voto” y decía que la AMPDE debía ser un espacio de horizontalidad en donde se debía reconocer la presencia y participación de todas por igual.

Sin embargo, las diferencias entre las integrantes también empezaron a ser evidentes pronto, en la manera en que circulaba la palabra, y los roles que unas y otras asumían. Las mujeres campesinas tomaban la palabra mucho menos que las mujeres urbanas, las jóvenes menos que las adultas. La mayor parte de veces mujeres mestizas y urbanas asumían la coordinación, presentaban los problemas que se iba a discutir, facilitaban las discusiones y enunciaban las conclusiones colectivas. Mujeres indígenas, y a veces negras, conducían los momentos rituales de apertura o cierre de los espacios; espacios para los que en varias ocasiones reclamaron respeto y atención.

Pero al mismo tiempo, con la idea de permitir que la asamblea fuera un espacio de encuentro horizontal, se propuso no crear una estructura centralizada, sino permitir que la coordinación se diera de manera espontánea, para que pudieran participar todas quienes quisieran. Se argumentaba además que este era un modo de construir su proceso por fuera de las estructuras patriarcales de organización (Hill 2012). En los cuatro años de vida de la AMPDE, sin embargo, esta apuesta encontró obstáculos para realizarse plenamente. Sutiles mecanismos de diferenciación y jerarquización comunes en la exterioridad del espacio organizativo atravesaron el proceso de la AMPDE, a pesar del deseo de organizarse de otro modo. Una integrante de la AMPDE, dirigente de una organización indígena, explicaba cómo veía estas limitaciones:

[...] ha sido demasiado difícil ir entendiendo ese proceso, porque no es fácil llegar a 1 ó 2 reuniones y entender todo lo que está ahí, al menos cuando no se socializa bien desde nuestro lenguaje.

También es que a veces abarcamos muchas cosas, empezamos a discutir demasiado, y vamos de un tema a otro tema, a veces nos perdemos, se hablamos de todo y como que cosas concretas no quedan. Yo misma luego no sé qué socializar. Sería mejor hablar un punto o dos y de eso quedar en cosas, que todas podamos hacer.

Cosas así parece que fallamos a veces, o a veces no decimos. A veces manejamos palabras muy técnicas o sofisticadas, y a veces no se logra entender qué queremos decir. Por ejemplo, hay violencia, existe muchos tipos de violencia, en base a eso, qué vamos a hacer en las comunidades. Y no solo de las compañeras diversas, sino de nuestras comunidades mismo, a veces le chumamos a la compañera de las bases. El tiempo pasa, hablamos rápido, rápido y una misma se queda sin entender y sin tomar una resolución.

Yo no he visto como las del CONAMU a las diversas, como que hay más apertura, a que participen más mujeres de comunidades, todo eso. Pero cómo que no asumimos responsabilidades. A veces pensamos que alguien está en Quito y que nos va a dar solucionando. [...] Estamos acostumbradas a que siempre haya una cabeza, vamos a la reunión, proponemos algo y como que dejamos que otras hagan... ellas estaban ahí, ellas organizaron y como que ahí dejamos a que hagan y no damos seguimiento (A.E., entrevista 2013).

Otras integrantes, urbanas y de clase media, explicaban que en los espacios de diálogo y debate político existe un sobrepeso e incluso exclusividad de actividades intelectuales en las que relaciones de poder se reproducen en el espacio organizativo a partir de una circulación desigual de la palabra; un problema que se producía de modo inconsciente.

No todo es tan rígido, pero en la mayoría de espacios en los que he estado, las de clase media siempre tendemos como a hablar más, a proponer más lo que se quiere hacer en ese espacio de encuentro, como que somos las que más estamos diseñando cómo serán esos encuentros... Y no hay una mala intención, sino que es en ese querer ser con la otra... tal vez hay una falta de entendimiento en cómo comunicarnos con las otras (M.R., entrevista 2013).

Una integrante de la Casa Feminista de Rosa y la AMPDE consideraba que se habían producido jerarquías a través de este acceso diferenciado a la palabra y, por lo tanto, a las oportunidades y modos de participación, debido a una cultura y una subjetividad política vanguardista, heredada de la izquierda tradicional ecuatoriana<sup>20</sup>. Los espacios de autoconciencia que mujeres de clase media de la AMPDE desarrollaron en procesos previos a este proceso, permitieron, su punto de vista, reflexionar sobre esta relación inconsciente entre clases medias y sectores populares.

Me acuerdo que cuando estábamos en la Casa Rosa siempre tuvimos no solo una puesta política racional, sino un deseo de encontrarnos entre mujeres que veníamos de historias distintas. En la Casa, una cosa de la que siempre estuvimos debatiendo es en la necesidad de enfrentar las desigualdades entre mujeres, y eso fue clave para frenar un poco estos deseos históricos de la clase media de ser la vanguardia, quien conduce, quien representa, quien es la voz de los sin voz. Creo que cuando desaparece la Casa Rosa, que también llegaba a ser un referente ético-político para nosotras mismas y una contención de ese deseo, esa necesidad de la clase media de ser vanguardia de los sectores populares, perdemos la perspectiva de cómo establecer efectivamente una relación con los sectores populares que sea horizontal (M.B., entrevista 2013).

---

<sup>20</sup> Para un amplio análisis sobre la producción de intelectuales y artistas de la izquierda ecuatoriana, véase Polo Bonilla, Rafael 2012: *La crítica y sus objetos. Historia intelectual de la crítica en Ecuador (1960-1990)*. Quito: FLACSO - Sede Ecuador.



Varias entrevistas a integrantes de la AMPDE coinciden en que los espacios y las dinámicas de coordinación se formaron a partir de las condiciones que había, en donde las mujeres más empobrecidas y generalmente de sectores rurales, tenían menos oportunidad de participar. Mientras, mujeres de clase media tenían mayores posibilidades de involucrarse, incluso al combinar actividades de sus trabajos remunerados con actividades de la organización. Tal vez por esto, la coordinación del espacio organizativo de la AMPDE a veces se ha combinado, pero también confundido, con la coordinación de los proyectos. A pesar de que varias de sus integrantes manifestaban oposición a formar una estructura de organización, esta se produjo en la práctica, con el inconveniente de los mecanismos de representación eran arbitrarios y algunas dinámicas contradecían de cierto modo a los objetivos propuestos.

Durante los primeros tres años de la AMPDE, quienes asumieron este lugar de coordinación-conducción fueron mujeres cuyas condiciones, desde un punto de vista económico, difícilmente podían ser vistas como mujeres de sectores populares; mujeres que reconocían trabajar en ONGs o tener vínculos significativos con la cooperación internacional, haber tenido estudios universitarios; mujeres que, en definitiva, tenían un capital social y simbólico propios de la clase media, aunque precaria en la mayor parte de casos.

Varias críticas surgieron al interior de la AMPDE sobre las dificultades para reconocerse horizontalmente y establecer mecanismos de participación y representación más igualitarios. Mujeres indígenas reclamaron la poca atención y respeto a los momentos de espiritualidad a ellas encargados; mujeres jóvenes cuestionaron la concentración de la palabra en las mismas figuras; mujeres urbanas discutieron los criterios arbitrarios con los que se diferenciaba el ser técnicas de una ONG y el ser dirigentes de la organización.

En respuesta a estas tensiones, en el año 2010 se propuso formar una Colectiva Nacional, un espacio de coordinación que idealmente estaría conformado por dos mujeres de cada organización en cada provincia. Pero las dificultades se mantuvieron, las representaciones de las organizaciones de base no eran fijas y los acuerdos y compromisos no siempre eran comunicados. Muchas organizaciones tampoco tenían mecanismos establecidos para delegar a sus representantes. Mientras unas organizaciones no asistían a las reuniones de la Colectiva, otras organizaciones estaban sobrerrepresentadas a causa del interés que sus integrantes tenían en mantener la organización.

A mediados del 2012, una buena parte de la colectiva estaba constituida por mujeres que desde sus trabajos en ONGs financiaban proyectos para la AMPDE o por quienes, siendo militantes de la organización, eran coordinadoras de estos mismos u otros proyectos de la Asamblea. Varias integrantes de la organización explicaban que los fondos de cooperación eran necesarios para construirse como organización nacional, pues habían facilitado la participación de mujeres en movilizaciones nacionales, talleres, asambleas, escuelas de formación, etc. Una de ellas decía: “de hecho a nosotros nos junta todo este proceso pero también nos junta que hay un proyecto, o sea, no podemos negar eso, porque del proyecto viene la posibilidad de lograr el financiamiento para las asambleas y todo eso” (M.G., entrevista D.H., 2009).

¿Qué haría la AMPDE para escapar al camino que anteriores proceso de organización entre mujeres recorrieron cuando sus agendas pasaron a ser determinadas por los temas y dinámicas de la cooperación? Los procesos de educación popular y formación entre mujeres, guiados por una pedagogía popular y un enfoque feminista, constituyeron una de las apuestas orientadas por el deseo de construir una política desde abajo y relaciones militantes horizontales que les diferenciaría de anteriores procesos en el movimiento de mujeres. Pero hay que considerar que gran parte de las mujeres que hegemonizaron el movimiento en torno a la apuesta por el estado también habían desarrollado apuestas como estas en los años 70; la educación popular parece haber sido una herramienta todavía insuficiente para enfrentar las desigualdades entre mujeres que conforman un mismo espacio de organización.

En algunos espacios de encuentro de la AMPDE se evaluó a estos procesos como contribuciones al fortalecimiento de los liderazgos locales de las mujeres, pero insuficientes para construir un espacio organizativo que hiciera efectivas esas aspiraciones de horizontalidad entre las mujeres de clase media y las de sectores populares. Al respecto, dos integrantes de la AMPDE decían en una entrevista grupal:

Siento que hay cosas que se imponen como prácticas políticas y que sí ha habido intenciones de querer construir esa horizontalidad y vivir la vida junto a las otras en sus quehaceres, pero que hay algo que no logra darse. Siempre es como un querer, un intento, un no sé qué, que lo pensamos, lo reflexionamos, lo dejamos ahí, pero no logramos. [...] Y ahora ves la colectiva nacional y ¿cómo así son quienes son?, ¿cómo así no están las que no están?, ¿cómo así...? No entiendo [...] me duele que pasen cosas que una ni se entera y luego una no se siente convocada y luego, o sea de cuándo acá una ya no es parte de ese espacio, y no es porque una no lo haya decidido [...] Algunas han decidido ser ellas las que de pronto van dirigiendo ese espacio y luego ya no te incluyen. Entonces es

complejo, porque me sale la rabia [...] y decir “me excluyen” también me cuesta [...] (F.S., entrevista 2013).

Me acuerdo que cuando se decide formar una colectiva fue justamente porque ya empezaban a producirse críticas “¿quiénes hablan más?”, “¿por qué hablan más?” [...] Cada provincia iba a tener 2 representantes, pero de repente casi todas eran compañeras que estaban en ONGs, y no todas. Si había compañeras que nunca antes habían estado en la Asamblea, o que estuvieron muy distantes durante un buen tiempo, y fueron llamadas a ser parte al colectiva porque eran quienes financiaban proyectos desde las ONGs en donde trabajaban. [...] Entonces, ¿cómo generas otras dinámicas?! (M.E., entrevista 2013).

Entonces, aunque el criterio de representación territorial con el que debía formarse la Colectiva quedó bastante debilitado al transcurrir el tiempo, el reconocimiento de asuntos relativos a las desigualdades económicas, importantes para las mujeres empobrecidas, da cuenta de una relación de mayor reconocimiento de sus intereses. Sin embargo, este reconocimiento no se traduce en mecanismos y dinámicas políticas que signifiquen el reconocimiento de ellas –las mujeres de sectores populares– como sujetos políticos iguales a las otras en la AMPDE y al interior del movimiento de mujeres más amplio.

Por el contrario, las estructuras organizativas que se formaron en la práctica, sumadas a los discursos identitarios elaborados por algunas integrantes de clase media que asumían roles de representación, han sido cuestionadas por constituir relaciones de poder más complejas, encubiertas por discursos que, por el deseo de construir una identidad común, opacan las diferencias y desigualdades. La identificación como mujer popular y pobre, asumida por mujeres de clase media, de acuerdo a varias de sus integrantes dificulta la autorepresentación de las mujeres de sectores populares y, por lo tanto suplanta su lugar. Como he dicho antes siguiendo a Flórez (2010) y Bourdieu (1990), la narración de sí es un aspecto fundamental en la construcción de los sujetos políticos; un trabajo de producción simbólica del que depende su propia existencia.

[...] en mi cabeza está lo popular mucho más que antes, porque antes era “veamos qué pasa y cómo se van dando las cosas con las compañeras y qué reflexiones se van dando”, como dejarse llevar por lo que va ocurriendo que era algo que me encantaba. Pero ahora que hay cosas que ya no me gustan, sí digo “¿qué mismo es ser popular?” porque sí veo compañeras que tú les ves y las conoces de bastante tiempo y sabes que en cuestión clase social no son populares [...] no sé si sea suficiente reflexionar sobre lo popular para decirse “soy popular” [...] o sea, estoy asumiendo una postura en el mundo que no me corresponde, sino que tal vez tomo de otras una condición para yo identificarme así para... no sé (P.Q., entrevista 2013).

El proceso organizativo de la AMPDE, por lo tanto, se ha desarrollado a través de tácticas –generalmente a través de herramientas de educación popular- orientadas a generar condiciones para una relación de horizontalidad política en medio de las desigualdades sociales que atraviesan a sus integrantes. Su articulación ha significado para el movimiento de mujeres un proceso de renovación, en tanto ha aportado con nuevos modos de entender y desarrollar sus luchas políticas, articuladas a experiencias localizadas de mujeres diversas. Esta capacidad de locución política multilocal ha dado lugar a un feminismo popular capaz de realizar distintas articulaciones –modos de comprender y explicar- entre el patriarcado y el capitalismo como sistemas de explotación, apropiación y colonización del cuerpo y el trabajo de las mujeres, sus mundos de vida y la naturaleza.

Sin embargo, al interior de su proceso se han reproducido relaciones de poder en razón de sus desigualdades estructurales y diferenciados capitales simbólicos. Esto es visible en la estructura de organización que se ha formado, a pesar de la voluntad de horizontalidad política, y en el modo como se producen los discursos sobre su identidad política, como “mujeres de sectores populares”. Los modos en que tales desigualdades se han reproducido están relacionados con las subjetividades políticas de sus integrantes, formadas en esferas públicas previas o paralelas al proceso de la AMPDE; una historia en la que cuenta la tendencia vanguardista de la izquierda de clase media.

Si se toma en cuenta las observaciones planteadas respecto a que la identidad es una construcción simbólica y, que como tal, está atravesada de luchas interpretativas, políticas, se concluye que la identidad “mujeres de sectores populares” no puede estar exenta de tensiones políticas; su politicidad, su dinamismo, depende de que estas tensiones puedan tener lugar en el proceso organizativo. La propia historia del movimiento de mujeres en la década de los 90 lo ratifica.

Una tensión particular en la AMPDE está en torno a la definición de lo popular, a cómo y quiénes lo definen. Su politicidad, por lo tanto, depende de que mujeres de sectores populares encuentren en el espacio organizativo la posibilidad de autorepresentarse. Del mismo modo, depende de que mujeres de clase media problematicen su condición de clase y otros ejes de identidad en relación con su identidad política. Ya que la emergencia de las organizaciones de mujeres de sectores populares fue un momento que reactivó y amplió la riqueza política del movimiento de mujeres, el sostenimiento de este dinamismo político para el movimiento de mujeres y para la AMPDE exige evidenciar las diferencias al interior del campo popular y cómo

estas se convierten en jerarquías. Esta es una condición necesaria para construir tácticas –internas- adecuadas a los objetivos de justicia y equidad a los que apuntan sus estrategias políticas.

## CONCLUSIONES

Investigaciones sobre el movimiento de mujeres del Ecuador han mostrado una tensión una tendencia que se centra en la trayectoria de mujeres urbanas de clase media, marcada por una política liberal, de carácter ciudadano y otra que lo concibe como un proceso social más amplio y descentralizado en el que los vínculos y alianzas entre mujeres de diferentes sectores sociales y lugares del país han sido fundamentales. Durante los 90, la historia del movimiento de mujeres del Ecuador, construida mayoritariamente desde la primera tendencia, devela una mirada autoreferencial de mujeres de clase media, quienes como autoras de análisis e investigaciones sobre el movimiento de mujeres o como voceras del mismo prestaban una escasa o nula atención a los procesos de mujeres de sectores populares.

Pero, finalizada la década de los 90, autoras como Vega (2000), Herrera (2001a) y Balladares (2003) señalaban dinámicas excluyentes e instrumentalistas en el movimiento de mujeres, desarrolladas por un feminismo caracterizado como liberal (Herrera 2001a; Rodas 2003). Un proceso de “profesionalización de la causa feminista” (Rodas 2007: 24) y de “cooptación de intelectuales y activistas” (Vega 2000: 251) fueron mencionados como causas del debilitamiento del movimiento y sugerían que este tenía dificultades para procesar las desigualdades y diferencias políticas entre mujeres. En sus trabajos y en los de otras autoras (Goetschel, et. al 2007; Lind 1994, 2005) se reconoce que la relación entre mujeres de sectores populares y de clase media fue fundamental desde los inicios del movimiento y que alianzas interclasistas permitieron el desarrollo de un pensamiento político y demandas propias. Sin embargo, no se profundiza en el lugar ni la agencia de las mujeres de sectores populares dentro del movimiento, ni en su relación con mujeres de clase media. Por esto, esta perspectiva crítica deja varias inquietudes abiertas en torno a la complejidad del movimiento.

Otras investigaciones específicamente sobre organizaciones de mujeres de sectores populares identifican sus procesos con una “lucha por lograr la autonomía ideológica” frente a relaciones de poder en la vida cotidiana, las instituciones políticas, las instituciones de desarrollo, y organizaciones sociales y políticas (Lind 1994: 205-207). Pero respecto a otros sectores del movimiento se reconoce poco esta voluntad de autonomía. Más bien, la apuesta hegemónica del movimiento de mujeres por trabajar de cara al estado es generalmente vista como un contexto de oportunidades para los procesos de organización de las mujeres de sectores populares. Investigaciones sobre

mujeres indígenas plantean que su distancia respecto a organizaciones de mujeres urbanas se debe a la limitada autonomía de aquellas y el peso mayor que dan a los tejidos comunitarios de los que forman parte serían. Aunque estas reconocen dinámicas desacertadas desarrolladas por parte de mujeres de clase media, sus análisis no abordan mayormente la compleja, pero fundacional relación entre estas mujeres y las de sectores populares.

El neoliberalismo de los años 90 implicó una creciente diferenciación social y política entre estos dos sectores de mujeres, puesto que al atravesar sus subjetividades dio forma a sus procesos de organización. Las de clase media vivían una situación de riesgo provocada por la reducción de servicios sociales públicos, la disminución de fuentes de empleo y la polarización de la participación en los ingresos nacionales. La cooperación internacional y las ONGs fueron alternativas laborales y oportunidades políticas para las clases medias que mayor capital social habían acumulado, que beneficiaron al movimiento de mujeres con la ampliación de las posibilidades de incidencia. Sin embargo, esta posibilidad y las estrategias que desde aquí se construían eran restringidas para las mujeres empobrecidas.

En la segunda mitad de esta década, una cultura política neoliberal fundamentada en la máxima eficiencia y competitividad se empezaba a ejecutar a través de la participación ciudadana y la gobernabilidad democrática. La intervención del movimiento de mujeres en el estado se desarrolló bajo esta línea, a través de estrategias que privilegiaron los conocimientos técnicos-políticas, que solo mujeres de clase media tenían, por sobre los “lentos” procesos colectivos de las mujeres de sectores populares que llegaron a ser considerados como un obstáculo en la urgente tarea del frente al estado.

Su estrategia se fundada en la habilidad para el cabildeo político o *lobby* y la construcción de propuestas cuyo carácter técnico ablandaba y hasta eliminaba la politicidad más radical del feminismo. Instaló en el conjunto de mujeres diversas y desiguales que formaban el movimiento un sistema de diferenciación asimétrica fundado en el vínculo conocimiento-poder, en el que el género se instaló como discurso de verdad. Así, se dificultó que mujeres de sectores populares desarrollaran una praxis a partir de sus problemas y necesidades, orientadas a la transformación de sus propias subjetividades y las relaciones de poder en las esferas cotidianas, que además del género tenían que ver con la clase, la raza y la cultura.

Al mismo tiempo que se desplazaba la racionalidad social de gobierno hacia una neoliberal, se agudizaban contradicciones sociales que limitaban dificultaban el

ejercicio de la ciudadanía para las mujeres de sectores populares y otros modos de entender y construir la política a partir de dinámicas más colectivas y conocimientos situados en la vida cotidiana. La sobrecarga de distintos tipos de trabajo hacía que las mujeres empobrecidas tuvieran que ocupar el espacio público en condiciones precarias, con escasas posibilidades de autonomía. .

Pero esta diferenciación jerárquica que se crea en el movimiento de mujeres, no puede ser vista como un asunto de simple conveniencia para los intereses por parte de las mujeres de clase media. Muchas venían de trayectorias militantes y desde su posición de izquierda buscaban transformaciones que incluyeran a las mujeres de sectores populares. La diferenciación se produce incluso a pesar de la voluntad consciente con que desarrollaban sus estrategias, como un modo de adaptación pragmática a un contexto que presentaba escasas oportunidades. La actuación del movimiento de mujeres en un contexto económica y políticamente neoliberal tuvo que pasar por una adaptación político-cultural que volvió a sus expertas en un actor fundamental para el sostenimiento del estado neoliberal; un proceso de coerción y violencia inherente al capitalismo que atravesó el movimiento. Como resultado, la capitalización de los discursos sobre el género y el conocimiento-poder técnico-político por parte de un sector de mujeres de clase media significó el despojo de la cualidad política de las mujeres de sectores populares.

Tal proceso debilitó además las posibilidades de que el movimiento de mujeres en su pluralidad y diversidad política se orientara hacia la transformación del fundamento capitalista, patriarcal y colonial del estado. Por esto, la década de los 90 representa una crisis del movimiento, dado por la hegemonía de una política neoliberal que aplacó la organización y movilización social de mujeres de sectores populares y clases medias – en otro momento aliadas- contra al neoliberalismo económico.

Sin embargo, el proyecto neoliberal tenía sus fisuras. Hasta inicios del 2000, la dinámica política del país estaba marcada por permanentes movilizaciones de distintos sectores de la sociedad. Este fue el escenario de emergencia de procesos de organización autodenominados como “mujeres de sectores populares”, que se afirmaban desde distintos conocimientos-experiencias situados para interpelar los sentidos de las luchas del movimiento de mujeres y ampliar sus límites; imprimen a la crisis del una dinámica emancipadora respecto a lo ya instituido y por eso lo repolitiza.

La emergencia de organizaciones de mujeres de sectores populares ocurrió en un momento en el que el movimiento indígena rompía la relación ventrílocua que la



izquierda militante y otros sectores sociales y políticos del país habían establecido con ellos –indígenas- y otros sujetos “no ciudadanos”. En este contexto las mujeres de sectores populares dotaron a sus procesos de organización de sentidos de resistencia y transformación para desafiar un ordenamiento neoliberal fundado en poder-conocimiento con el que en el movimiento de mujeres se desconocía el carácter político de sus procesos. En oposición al conocimiento-poder, las mujeres de sectores populares se posicionaron desde el conocimiento-experiencia, una forma de afirmar la diferencia y reivindicar de otros modos de hacer política, en correspondencia con procesos organizativos de base, localizados, que trascendían la división privado-público y la lógica individual de la participación ciudadana.

Mujeres de clase media, precarizadas por los efectos del neoliberalismo, desempeñaron un papel importante en algunas de estas organizaciones, planteando una ética y compromiso militante como fundamento de una relación con mujeres de sectores populares distinta a la que establecían las expertas del género.

Expresiones del movimiento que lo hegemonizaron en torno a la apuesta por el estado, fueron cuestionadas por centralistas y por reproducir estructuras de dominación en base a las desigualdades de clase y etnia. A partir de estas críticas, mujeres de sectores populares se convirtió en una identidad de disenso desde la que desarrollaron procesos de autonomía organizativa como el MMO, Luna Creciente la CONAMUNE, la CONMIE y otros procesos de mujeres al interior de organizaciones mixtas. En estos procesos se produjo una resignificación de las luchas del movimiento de mujeres, que las acercaba a la complejidad de sus experiencias de discriminación y opresión de género, clase y etnia. Tales experiencias permiten identificar la irrupción de lo popular en el movimiento de mujeres como una táctica de desujeción (Flórez 2010) o de desidentificación (Rancière 1998), un proceso a través del cual se construían como actoras políticas.

El movimiento de mujeres había sido transformado en un conjunto de procesos descentralizados, con una identidad inestable, proyectos políticos y representaciones en disputa. Atravesó una crisis dinámica que lo diversificó, amplió sus límites y lo repolitizó.

La influencia que las organizaciones de mujeres de sectores populares se habían tenido en el movimiento se hizo visible en torno a los procesos preparativos para la Asamblea Nacional Constituyente del 2008 por su mayor presencia y la importancia que se dio a los derechos económicos. Lo popular en el movimiento estaba formado por una

amplia articulación de demandas no democráticas no satisfechas, dirigidas al estado y la sociedad en general, incluyendo a las propias integrantes del movimiento.

En el caso particular de la AMPDE, se formó a partir de la iniciativa de mujeres de clase media, con una amplia participación de mujeres de estratos económicos bajos y de provincias en las que la presencia del estado era escasa o nula. Especialmente mujeres indígenas y negras de la AMPDE articularon la identidad popular a la historia de resistencia de sus pueblos. Mujeres mestizas la vincularon a las trayectorias de desarraigo provocadas por la migración. Estas venían de trayectorias de militancia en otros movimientos sociales y partidos de izquierda y, a partir de este bagaje intelectual y subjetivo, asumieron la identidad popular al reconocer en su genealogía familiar historias de pobreza y una situación actual de precariedad. La identidad política “mujeres de sectores populares” no coincidía necesariamente con la situación económica de sus integrantes. Pero sí establecía una clara diferenciación de feministas de clase media que, en el contexto neoliberal, habían acumulado mayores privilegios y apostado por una política fundamentada en la eficiencia técnica y relaciones verticales con otras mujeres.

El hecho de que mujeres de clase media hayan asumido en primera persona la identidad popular se produjo por el deseo de encontrar entre mujeres desiguales un lugar común que potenciara su presencia política en un contexto postconstituyente. Su proceso se expresó como una voluntad construir una voz diferenciada, pero en diálogo con otros movimientos de izquierda, capaz de formar un feminismo popular, distinto al que predominó en el movimiento de mujeres durante los 90. Pero esta identidad común también implicó la introducción de complejas relaciones de poder, que dificultaron el tratamiento de las diferencias y desigualdades.

La memoria política de las organizaciones que integran la AMPDE ha tenido como hilos conductores a la formación y sostenimiento de organizaciones comunitarias, la lucha por la tierra y el agua, la gestión de barrios populares y las movilizaciones contra efectos económicos del neoliberalismo. Pero fundamentalmente, las narraciones de sí, han construido a sus organizaciones como estrategias para enfrentar la falta de reconocimiento del trabajo de las mujeres en los procesos de transformación y organización social.

En medio de los esfuerzos compartidos por formar una identidad común se evidenciaron algunas tensiones, manifiestas en negociaciones permanentes entre distintos modos de concebirla. La representación de lo popular planteada por mujeres de

clase media desdibujan los límites que convencionalmente definen la clase. Los trabajos reproductivos y de cuidado y un vínculo relativamente precario con el trabajo asalariado fue el lugar desde donde algunas se han definido como clase trabajadora, proletariado o como sectores populares. Así, se produce una operación ideológica que generó un sentido común a partir de la equiparación de la diferencia.

Pero, si bien esta táctica funcionó en el momento de creación de la AMPDE, con el tiempo mujeres de sectores más empobrecidos han reactivado otros sentidos que vuelven a colocar la diferencia, al poner énfasis en el lugar de la resistencia, más que en el de la exclusión, marginación u opresión. Así, la afirmación de la identidad popular a través de la reactualización de la memoria de resistencia constituye una táctica movida por el deseo de evidenciar las jerarquías en las que estaban organizadas sus diferencias en el mundo exterior para reorganizarlas en el espacio colectivo.

De tal manera, el deseo de horizontalidad que impulsó el encuentro de distintos sectores de mujeres en la AMPDE encontró límites en la racionalidad discursiva de equiparación equivalencial. La reactivación de diferentes sentidos de lo popular evidenciar el deseo de poner en diálogo las múltiples diferencias y las relaciones de poder que sobre ellas se construye.

Por esto, el feminismo popular solo puede ser entendido como una ideología, producto de luchas simbólicas, y no como un cuerpo teórico acabado. Está vinculada a los modos de organización que se producen paralelamente. Constituye una posición multilocal de sujeto que da lugar a distintos modos de entender y explicar la articulación de ejes de opresión, marginación y explotación de las mujeres. Por ejemplo, una de las características de este feminismo es su atención a la relación de las mujeres con la naturaleza. Mujeres indígenas de la Sierra y Amazonía hacen de su relación con la naturaleza un lugar de enunciación política. Mujeres de sectores urbanos ponen más énfasis en la compleja y contradictoria identificación mujeres-naturaleza como sujetos de equivalente explotación. Del diálogo entre una y otra visión, el feminismo popular parece plantear la necesidad de reconocer distintos tipos de naturaleza, construcciones históricas que requieren ser vinculas a la sociedad en una relación de interdependencia y retroalimentación. Otro ejemplo está en los distintos modos de concebir lo popular, que puestos en diálogo, afirman lo popular como lugar de otros conocimientos-poderes y plantean el deseo de reparación frente a una histórica exclusión política de mujeres empobrecidas y precarizadas.

Varias estrategias de educación popular fueron desarrolladas como herramientas políticas para reposicionar los conocimientos y poderes de sus integrantes, al permitir el desarrollo de una perspectiva crítica sobre sus contextos y espacios organizativos. Sin embargo, la estructura organizativa que la AMPDE desarrollada en la práctica, a pesar de las voluntades de horizontalidad, implicó jerarquías políticas en base a la cultura y etnia, la clase, el lugar de donde venían las mujeres o su edad. Una tendencia vanguardista entre mujeres de clase media se desarrolló como desde la inconsciencia colectiva. A esto, se suman que las diferentes condiciones materiales permitían un acceso diferenciado a la participación.

Diversas tácticas y negociaciones se dieron para formar una estructura con mecanismos de representación más claros e igualitarios. Pero las mismas dificultades y se mantuvieron. El espacio de coordinación, la colectiva nacional, creado para procurar mayor equidad y rotación de la representación, llegó a estar formada por integrantes de la AMPDE vinculadas de distintos modos a ONGs cuyos proyectos y financiamientos contribuían al desarrollo de la organización.

Además de esta estructura organizativa, discursos movidos por el deseo de construir una identidad común, llegaron a opacar las diferencias y desigualdades. De esta manera, el proceso colectivo dejaba pocas posibilidades de que las mujeres de sectores más empobrecidas pudieran autorepresentarse.

La experiencia organizativa de la AMPDE plantea la necesidad de que en medio de la construcción de una identidad común, se dé lugar al tratamiento de las diferencias y desigualdades, y las tensiones que se generan como consecuencia de las relaciones de poder. Como muestra la historia del movimiento de mujeres del Ecuador y de la propia AMPDE, esta es una condición para mantener la riqueza y dinamismo político, así como estructuras y dinámicas adecuadas a los objetivos de justicia y equidad que guían sus estrategias políticas.

## **ANEXO 1**

Fuente: Hill et. al. (2012 s/p)

## Referencias bibliográficas

Aguinaga, Margarita (2010) “Aportes feministas acerca de la soberanía alimentaria”. En Acosta y Martínez (comp.) (2010) *Soberanías*. (pp. 91-105)

Acosta, Alberto (2001) “Los primeros pasos del ajuste neoliberal”, en *Breve historia económica del Ecuador*. Quito: Corporación Editora Nacional.

Alvarez, Sonia (2001) “Los feminismos latinoamericanos ¿se globalizan?: tendencias de los 90 y retos para el nuevo milenio”, en Escobar, Arturo, Dagnino, Evelina y Alvarez, Sonia (Ed.): *Política cultural y cultura política. Una nueva mirada sobre los movimientos sociales latinoamericanos*. Bogotá: Taurus-INCAH.

Arboleda, María (1997) “Agendas de las mujeres para la Constitución”, en Jaramillo, Francisco (comp.) *Asamblea... análisis y propuestas*. Quito: Trama Social.

Arboleda María, Carrión Nancy, Herrera Stalin y Santillana Alejandra (2009 s/p) “Mujeres en su derecho: Configuración y contestación de las nuevas estatalidades locales desde la participación de mujeres en busca de sus derechos”. IEE, PRIGEPP/FLACSO ARGENTINA , IDRC.

Bobbio, Norberto (1996) *El futuro de la democracia*. México: Fondo de Cultura Económica.

Bourdieu, Pierre (1990) “Espacio social y génesis de las clases sociales”, en *Sociología y cultura*. México: Editorial Grijalbo.

Brah, Avtar (2004) “Diferencia, diversidad, diferenciación”, en *Otras inapropiables. Feminismos desde las fronteras*. Madrid: Traficantes de Sueños.

Bravo, Karina (2009) “A la calle: recorrido por la explotación sexual y las burlas patriarcales”, entrevista realizada por Nancy Carrión, en *Flor del Guanto No.1: Sexualidades Diversas y Desiguales*. Quito: Casa Feminista de Rosa.

Carrión, Nancy (2008 s/p) Las mujeres como sujetas sociales y políticas en proyectos de gobernanza local y descentralización en Ecuador. IEE, PRIGEPP/FLACSO ARGENTINA, IDRC.

\_\_\_\_\_ (2009 s/p) Las mujeres de sectores populares reorganizando el movimiento de mujeres del Ecuador.

\_\_\_\_\_ (2010 s/p) “Evaluación del proyecto para la implementación del Reglamento para la Buena Convivencia – Sumak Kawsaypa Katikamachik en las comunidades indígenas de Cotacachi”.

\_\_\_\_\_ (2013) “Sopa parlante: las mujeres hablamos de soberanía alimentaria y cuidados”, en *Cuadernos de debate feminista, No. 1*. Instituto de Estudios Ecuatorianos – ONU Mujeres: Quito.

Carrión, Nancy y Aguinaga, Margarita (2012 s/p) *Estudios de caso de impunidad en el acceso a la justicia de mujeres indígenas en los cantones Guamote y Colta - Provincia de Chimborazo*. IEE-ONU Mujeres.

Cielo, Cristina (2006 s/p) Towards a sociology of publics: liberal, republican and hegemonic publics.

CLAD (1998) “Una Nueva gestión Pública para América Latina”

Escobar, Arturo; Alvarez, Sonia E.; Dagnino, Evelina (2001) “Introducción: Lo cultural y lo político en los movimientos sociales latinoamericanos”, en *Política cultural y cultura política. Una nueva mirada sobre los movimientos sociales latinoamericanos*. Bogotá: Taurus, ICANH.

Flórez Flórez, Juliana (2010) *Lecturas emergentes. Decolonialidad y subjetividad en las teorías de movimientos sociales*. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.

Gargallo, Francesca (2004) *Las ideas feministas latinoamericanas*. Bogotá: Departamento Ecuménico de Investigación - Ediciones desde abajo.

Goetschel, Ana María; Pequeño, Andrea; Prieto, Mercedes; Herrera Gioconda (2007) *De memorias: imágenes públicas de las mujeres ecuatorianas de comienzos y fines del siglo veinte*. Quito: FLACSO Ecuador – FONSAL.

Gramsci, Antonio (1975) “La formación de los intelectuales”, en *Los intelectuales y la organización de la cultura*. México D.F.: Juan Pablos Editor.

\_\_\_\_\_ (1981) “Elementos de la política”, en *Cuadernos de la Cárcel, Tomo 5*. México: Ediciones Era.

Guerrero Cazar, Fernando; Ospina Peralta, Pablo (2003) “El giro histórico: entre la larga y la corta duración”. En *El poder de la comunidad. Ajuste estructural y movimiento indígena en los Andes ecuatorianos*, de Fernando Guerrero Cazar y Pablo Ospina Peralta Buenos Aires: CLASO/ASDI.

Guerrero, Andrés (1994) “Una imagen ventrílocua: el discurso liberal de la “desgraciada raza indígena” a finales del siglo XX”. En *Imágenes e Imagineros, Representaciones de los indígenas ecuatorianos, siglo XIX y XX*. Serie Estudios Antropología. FLACSO-Sede Ecuador.

\_\_\_\_\_ (1997) “Se han roto las formas ventrílocuas de representación”, entrevista hecha por Felipe Burbano de Lara, en *íconos: Revista de Ciencias Sociales*, No 1. FLACSO-Sede Ecuador.

Herrera, Gioconda (2001a): “El género en el Estado: entre el discurso civilizatorio y la ciudadanía”, en *Iconos* número 11. Quito: FLACSO

\_\_\_\_\_ (2001b) “Los estudios de género en el Ecuador: entre el conocimiento y el reconocimiento”, en Herrera, Gioconda (ed.) *Antología de género*. Quito: FLACSO – ECUADOR, Junta de Andalucía, pp. 9-60.

\_\_\_\_\_ (2007, s/p) *Sujetos y prácticas feministas en el Ecuador. 1980-2005*. Quito: FLACSO – Ecuador.

Hill, Dana (2012) “Ni una ley más sin nosotras: el poder de la Asamblea de Mujeres Populares y Diversas del Ecuador”, en *Flor del Guanto, No 4: Resistencias ecofeministas: naturaleza, comunidad y amor*.

Hill, Dana; Pérez, Lucía; Aguinaga, Margarita; Carmona, Gloria; Avila, Dora y Carrión, Nancy (2012 s/p) *Proceso de formación, oportunidades para la transformación*. IEE – ONU Mujeres.

Hinkelammert, Franz (2002) “La crisis de poder de las burocracias privadas: El socavamiento de los derechos humanos en la globalización actual”, en *Revista de Filosofía No. 40*, enero de 2002 (pp. 15-33).

Laclau, Ernesto (2009) “Populismo. ¿Qué nos dice el nombre?”, en Francisco Panizza, *El populismo como espejo de la democracia*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Lind, Amy (1994) “Poder, género y desarrollo: las organizaciones populares de mujeres y la política de necesidades en el Ecuador”, en León Magdalena, *Mujeres y participación política: avances y desafíos en América Latina*. Bogotá: TM Editores.

\_\_\_\_\_ (2005) *Gendered paradoxes. Women’s movements, state restructuring, and global development in Ecuador*. “1. Myths of Progress: Citizenship, Modernization, and Women’s Rights Struggles in Ecuador” (pp. 23-52) . Pennsylvania State University.

Manzo, Cecilia (2011) *Movimiento de Mujeres de El Oro: acción colectiva basada en la diversidad*. Quito: FLACSO sede Ecuador.

Moser, Caroline (1997) “Ajuste desde la base: mujeres de bajos ingresos, tiempo y triple rol en Guayaquil”, en *La Mujer frente a las políticas de ajuste*. Quito: CEPAM.

Ong, Aihwa (2006) “Introduction: Neoliberalism as Exception, Exception to Neoliberalism”, en *Neoliberalism as Exception. Mutations in Citizenship and Sovereignty*. Durham y Londres: Duke University Press.



Pequeño, Andrea (2007) “La autorepresentación: estrategias para un nuevo feminismo indígena en Ecuador”. Ponencia presentada en el Congreso de Latin American Studies Association, septiembre del 5 al 8, en Montreal, Canadá.

Polo Bonilla, Rafael (2012) *La crítica y sus objetos. Historia intelectual de la crítica en Ecuador (1960-1990)*. Quito: FLACSO - Sede Ecuador.

Prieto, Mercedes (1986) "Notas sobre el movimiento de mujeres en el Ecuador", en *Movimientos sociales en el Ecuador*, Quito: CEPLAES, CLACSO, CEDIME.

\_\_\_\_\_ (1998) “El liderazgo de las mujeres indígenas: tendiendo puentes entre género y etnia”, en Cervone Emma (ed.) *Mujeres contracorriente: voces de líderes indígenas*. Quito: CEPLAES, Fondo para la Equidad de Género.

Prieto, Mercedes; Cuminao, Clorinda; Flores, Alejandra; Maldonado, Gina y Pequeño, Andrea (2005): “Las Mujeres Indígenas y la Búsqueda de Respeto”. En Prieto, Mercedes (2005) (Ed.): *Mujeres ecuatorianas: Entre la crisis y las oportunidades 1990-2004* (pp. 155-194). Quito: FLACSO – Sede Ecuador.

Rancière, Jacques (1998) “Política, identificación, subjetivación”, Aux bords du politique de Jacques Rancière. Paris: La Fabrique.

Rodas, Raquel (2007) *Las propias y las ajenas. Miradas críticas sobre los discursos del movimiento de mujeres del Ecuador*. Quito: Abya Yala.

Samuel, Raphael (1984) “Historia popular, historia del pueblo”. En *Historia popular y teoría socialista*. Barcelona: Grupo Editorial Grijalbo.

Tene, Carmen (2000) “Ruptura de la exclusión de mujeres indígenas”. En *Mujer, participación y desarrollo*. Quito: CORDES, CEDIME.

Troya, Pilar (2007) *Discursos sobre ciudadanía del movimiento de mujeres del Ecuador a fines de los 90*. Tesis de Maestría, FLACO - Sede Ecuador.

Vega, Silvia (1991) “La investigación sobre mujeres en el Ecuador: balance y perspectivas para la década de los 90” Quito: CEPLAES (s/p)

\_\_\_\_\_ (2000) “Ciudadanía incompleta de los movimientos de mujeres” en *Mujer, participación y desarrollo*. Quito: CORDES, CEDIME.

Vera, María Pía (2013) *Más vale pájaro en mano: crisis bancaria, ahorro y clases medias*. FLACO - Sede Ecuador.

Verdesoto, Luis (1986) “Los movimientos sociales, la crisis y la democracia en el Ecuador”, en *Los movimientos sociales en el Ecuador*. Quito: CLACSO – ILDIS.